C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISION DE PRESUPUESTOS

PRESIDENTE: DON SANTIAGO RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ

Acta taquigráfica de la sesión celebrada el miércoles, 11 de noviembre de 1981

TEMA: Presupuestos Generales del Estado para 1982 (continuación). Emisión de dictamen a la vista del informe de la Ponencia. Debate de las Disposiciones adicionales finales, Anexos y Secciones.

Se abre la sesión a las once horas de la mañana.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1982 (continuación)

El señor PRESIDENTE: Señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Presupuestos. Como saben SS. SS., en el día de ayer concluimos el examen del articulado hasta el artículo 45 nuevo incorporado en virtud de la enmienda 664.

Corresponde en el día de hoy el examen de las

Disposiciones adicionales y finales de la ley. En primer lugar, a la Disposición adicional primera existe la enmienda número 94, del Grupo Parlamentario Centrista, que no se desea defender (*El señor Del Valle y Pérez: Está admitida en Ponencia, señor Presidente.*), y las enmiendas números 381, 382 y 383. Para su defensa, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, la enmienda 383 será defendida por mi compañero Ciriaco de Vicente.

La 381 se refiere al Comité de Seguimiento de

Disposición
adicional
primera

Inversiones. Cuando habla de la realización de las inversiones sometidas a la vigilancia, coordinación e información del Comité de Seguimiento, lo que pedimos es que se haga una especial referencia a los puestos de trabajo directos creados. Lo limitamos a los directos. El hablar de indirectos admite una serie de interpretaciones, y esto lo decimos a partir de dos consideraciones básicas. Una es que en el presente año hemos tenido una sesión con el Comité de Seguimiento de Inversiones, el cual nos ha enviado también una segunda relación del seguimiento de las inversiones públicas habiendo comenzado ya la discusión de los Presupuestos y, además, hemos podido comprobar que uno de los aspectos que ha mejorado en este presupuesto es que es consecuencia del trabajo del Comité de Inversiones Públicas y del Comité de Seguimiento de Inversiones. Pero creemos que es muy importante que se nos hable no sólo de la cantidad de millones que están comprometidos, sino además también de los puestos de trabajo creados. Creemos que en esto el interés del Gobierno debe ser coincidente porque el Gobierno continuamente —y eso lo hemos visto ayer en las intervenciones de los representantes del Grupo Centrista— hace referencia al cumplimiento del ANE y, de alguna manera, el Parlamento tiene que tener conocimiento de cómo se va a aplicar esto el año que viene. Hago constar además que en esta enmienda concretamente por parte del Grupo Centrista en Ponencia se pidió, dentro de una postura contraria de principios porque era obligada, tiempo para una reconsideración, o sea, que es posible que hoy nos presenten alguna modificación de su actitud primera en Ponencia.

En cuanto a la enmienda 382, guarda relación con alguna de las actuaciones que ha ido haciendo esta Comisión de Presupuestos, y es el que el Gobierno tenga la posibilidad para deducir de las cantidades que se deben transferir por subvenciones para gastos corrientes o de capital, es decir, por el Capítulo XXIV.7, Organismos Autónomos o Empresas, el importe de las deudas que tengan contraídas los mismos con la Seguridad Social. Esto tiene una razón evidente, y es que entendemos que dentro de la política de control de gasto público el Gobierno tiene que hacer que se aplique de una manera rigurosa también la ley en los organismos autónomos y en las empresas públicas. Este año hemos podido tener conocimiento de alguna auditoría en algún

organismo autónomo, recuerdo en este momento el Parque de Maquinaria de Obras Públicas, y hay algunas más solicitadas que han arrojado datos sobre deudas a la Seguridad Social muy importantes. Creemos que tiene sentido que el Gobierno pueda controlar, desde el punto de vista de control de gasto público y de una mayor rigurosidad y eficacia, la gestión de estos organismos.

En cuanto a la enmienda 383, le cedo la palabra a mi compañero Ciriaco de Vicente para que la defienda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Vicente para la defensa de la enmienda 383.

El señor DE VICENTE MARTIN: Con la venia del señor Presidente, abuso de la cesión que tan generosamente me pasa don Enrique Barón para hacer referencia a esta enmienda en la que, como SS. SS. verán si se molestan en leerla, se trata de una enmienda de análoga naturaleza intencional a la que ayer defendí en relación con el artículo 20 bis que se proponía se incluyera en el texto como nuevo artículo relativo, en aquel caso, a los criterios de gestión económica del Instituto Nacional de la Salud, en orden a la aplicación de las dotaciones presupuestarias que para el mismo aprueba la presente Ley de Presupuestos.

Nos encontramos aquí ante otra enmienda de análoga naturaleza en la que se pretende dar unos criterios, ya no económicos, de gestión económica, sino unos criterios operativos de la política sanitaria del sistema de la Seguridad Social. La razón de la pretensión socialista de inclusión de esta enmienda en el texto de la ley viene dada por el hecho de que en esta ley —y no está de más recordarlo en vista de alguna declaración formulada ayer en esta Comisión— se aprueba el Presupuesto de la Seguridad Social, cuya importante cifra no es necesario recordar a SS. SS. Lo que sí es evidente y necesario señalar es que si SS. SS. se molestan en leer la documentación remitida con el Presupuesto de la Seguridad Social observarán la orfandad en la que se encuentran los responsables de estas entidades gestoras, y concretamente la responsable de la gestión sanitaria del sistema de la Seguridad Social, el Inasalud, en orden a la aplicación o concreción de las partidas que como gasto se le aprueban en el Presupuesto de la Seguridad So-

cial. Dicho en otras palabras, se aprueba un dinero pero no se dice cuál es el norte político de gestión o de gestión política de la entidad al que ha de aplicarse el gasto de dichos fondos. Por ello se hace preciso cubrir este vacío. Posiblemente se nos alegue en algún momento ulterior que nos encontramos ya no ante normas de naturaleza reglamentaria, sino incluso ante normas de naturaleza todavía más modesta, si es que cabe la expresión; no obstante lo que yo quiero señalar es que esta enmienda, que pretende añadir al texto de la ley o a otro texto la denominación de criterios operativos de política sanitaria al sistema de la Seguridad Social, pretende cubrir un vacío que la práctica demuestra que existe, un vacío que es tanto más importante cuanto que la falta de norte sanitario está contribuyendo no sólo con esta línea, sino también con la línea de descontrol del gasto desde la perspectiva económica, a un deterioro de la acción del sistema sanitario de la Seguridad Social, a un deterioro de la propia acción protectora del sistema y a la puesta en crisis económica del propio sistema, lo cual cuestiona a corto plazo la subsistencia del mismo.

Quiero señalar que posiblemente a algunas de SS. SS. enmiendas como ésta les pueden parecer enmiendas menores, pero puede que dentro de tres o cuatro años haya que sacar a relucir estos papeles para poner de relieve que hubo algún grupo parlamentario que se preocupó de intentar evitar el caos al que la Seguridad Social va si no se aplican medidas de esta naturaleza, desde la Ley de Presupuestos o desde las medidas viarias concretas de gestión. Insisto en esto con el ánimo de que quede registrado en el «Diario de Sesiones» porque tengo la impresión de que estos temas, que no están suficientemente valorados por alguna de SS. SS. o por algún grupo político para ser más exacto, van a constituir algo digno de ser recordado, aunque lamentemos algunos la posibilidad de que pueda ser recordado cuando haya auténtica situación de quiebra.

Las medidas concretas que se proponen son, en primer lugar, la de que el gasto sanitario se dirija a corregir las desigualdades territoriales en la oferta sanitaria en coordinación con la restante oferta pública de servicio sanitario. Esto pretende un doble objetivo: en primer lugar, contribuir a enraizar en el país la solidaridad de todos los ciudadanos en orden a la dimensión

concreta de la aplicación del gasto público y, en segundo lugar, a que el Insalud practique una política sanitaria coordinada con los demás agentes sanitarios públicos y no descoordinada de éstos, lo cual da lugar a la duplicidad de recursos, a la existencia de recursos ociosos o, simplemente, al hecho de que haya zonas, dentro de la modestia, con gran capacidad de atención a los ciudadanos desde una perspectiva sanitaria y otras zonas vacías. Y ya no me refiero a la clásica distinción entre zonas urbanas o rurales, sino entre unas provincias y otras, entre unas regiones y otras.

También pedimos que se publique una norma de control de calidad de la asistencia sanitaria tanto del Insalud como de la concertada, aspecto este último de la mayor trascendencia, así como la publicación de la batería de indicadores asistenciales tanto para hospitales como para ambulatorios. En una palabra, que se sepa si el dinero que se gasta se está gastando prestando una asistencia de calidad o se está tirando prestando una asistencia rutinaria. A tal efecto se hace preciso la elaboración de unos parámetros o indicadores que sirvan de orientación para concluir si tal calidad existe, si no existe y, consecuentemente, corregir los defectos de calidad que puedan existir. Esta es una pretensión que no es exclusiva del Grupo Socialista, sino que está siendo solicitada por los sectores que pretenden defender el sistema público sanitario y a la cual se unen gran número de sanitarios, yo diría que desde distintas posiciones, todos aquellos que sienten una auténtica vinculación con su labor no sólo en los hospitales, sino también en los ambulatorios y que acuden a éstos con voluntad de servicio y no con voluntad de servirse de ellos.

Por otra parte, se propone también que se publique un indicador de la distribución de días de hospitalización en instituciones propias y concertadas, algo a lo que ya aludíamos ayer, pero que se elabore este indicador, que se publique y se distribuya concretamente al Consejo General del Insalud en todo caso y, además, a las comisiones provinciales ejecutivas cuando se creen y, por supuesto, a los parlamentarios de ambas Cámaras que trabajamos en esta materia, a los diputados a Cortes y senadores, a todos, de tal suerte que haya una información que pueda permitir la adopción de medidas. Lo único que se pretende con esta enmienda, como SS. SS. verán, es que se hagan cosas que no se hacen

para corregir a tiempo defectos que van a hundir al sistema de la Seguridad Social de no adoptarse las medidas a corto plazo.

Se señala seguidamente una línea de desarrollo de la atención primaria de la salud a través de los centros de salud y también se insiste en una línea de programas sanitarios especiales, de apoyo a colectivos débiles desde la perspectiva de la mayor posibilidad de riesgo previa a la salud como es la mujer embarazada, tanto durante el embarazo, el parto y el posparto, la población infantil y los jubilados y pensionistas, sectores especialmente abandonados, sobre todo el de la población infantil, con una sanidad escolar prácticamente inexistente, y los jubilados y pensionistas prácticamente abandonados en esta dimensión.

Por otra parte, se insiste en otra línea que es la de planificación familiar y el desarrollo del programa de geriatría, puericultura, prevención del alcoholismo, de las farmacodependencias, de la protección radiológica y de la detección precoz del carcinoma ginecológico y de mama. Todas ellas, líneas de actuación que insisto son fundamentales para evitar enfermedades, para detectarlas a tiempo, para salvar la salud de los ciudadanos y también —por si esto lo interesa a alguien— para ahorrar dinero, que también es importante si queremos una vez más y no me cansaré de insistir que están ustedes hundiendo el sistema de sanidad y de Seguridad Social sobre la base del descontrol del gasto y que aquí hay medidas buenas o malas, perfectibles o no, de ley o de reglamento, pero que como no las adoptan nosotros acudimos a plantearlas allí donde se aprueba el gasto de la atención sanitaria de la Seguridad Social, que es este presupuesto.

Por otro lado, se propone concretamente una línea importantísima dentro de este mecanismo o de esta idea de desarrollar una mejora de la organización, que es la labor de investigación de todo lo relativo a la organización y servicios del Instituto Nacional de la Salud en su dimensión de gestión de servicios y de control de la calidad.

Pretendemos que los responsables de la política sanitaria se enteren de una vez de que el Instituto Nacional de la Salud tiene que funcionar a nivel de organización, cuando menos, como cualquier empresa que compita en el mercado con una organización razonable y de cali-

dad y que, consecuentemente, hay que dejar las concepciones burocratizadoras del funcionamiento de las entidades públicas para ir a una concepción bien organizada, lo cual requiere tal vez realizar unos estudios de organización, a cuyos efectos se propone que se realice con cargo a ese presupuesto esos estudios, ya que si no podemos incurrir en la posibilidad de que la organización del Insalud se haga por circulares y, consecuentemente, se haga con improvisación como habitualmente se hace.

Una línea importantísima de nuestra enmienda es la de la orientación de la docencia del Insalud. Se está tirando dinero formando a médicos que no van a ser utilizados por el sistema sanitario, porque hay más médicos de los necesarios en algunas especialidades y, consecuentemente con ello, pedimos que la docencia se oriente hacia aquellas actividades que la sociedad española necesita, como es el caso de la gerontología, donde hay más posibilidades de empleo, la odontostomatología, terminando con el control del «numerus clausus» practicado por las escuelas de estomatología e introduciendo la posibilidad de formar estomatólogos en los hospitales de la Seguridad Social; la psiquiatría comunitaria, la gerencia hospitalaria; pretendemos que acudan a los hospitales de la Seguridad Social a formarse como residentes en gerencia personas que puedan hacerlo de acuerdo con la titulación, complementando la labor de la Escuela de Gerencia Hospitalaria escasamente dotada de administración hospitalaria, de bioestadística y, además, romper el círculo del clasismo que existe en la labor de la formación por el Insalud, dando entrada también en el mismo a la enfermería sanitaria, a la salud pública y a la enfermería psiquiátrica y no reservando la formación a los médicos, farmacéuticos y algún otro titulado superior.

Por otro lado, se propone la creación de servicios de psiquiatría en las residencias sanitarias e instituciones, así como la protección del alcoholismo y, concretamente, la dotación en las plantillas de personal médico de la Seguridad Social de 300 plazas para médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Lo que no se puede hacer en este país es ilusionar a los jóvenes con la formación en una línea sanitaria importante como ésta y seguidamente dejarles sin ninguna posibilidad, no porque la formación deba llevar acarreada de por sí la incorporación

a un contrato, sino porque la sociedad española está necesitando actuaciones de este tipo y se está formando a personas que van destinadas al paro. En consecuencia, o se planifica una política de formación sanitaria coordinada con las posibilidades de empleo del sistema público y del sistema privado sanitario o se está tirando el dinero y esto es algo que hay que tenerlo muy claro.

Por otra parte, se hace un plan de inversiones, o se proponen unas sugerencias sobre planificación de la dotación del fondo de investigaciones sanitarias para 1982. Ya presentamos el año pasado una enmienda de esta naturaleza y también lo hacemos ahora.

Yo no quiero insistir en su detalle. Simplemente deseo señalar que el punto décimo de las medidas que pretendemos vayan destinadas a investigaciones especiales al que dotamos con 600 millones de pesetas que, como posteriormente observarán SS. SS. a través de otra enmienda que presentaremos, va dirigida a potenciar las investigaciones relacionadas con el síndrome tóxico. Pretendemos que de estos 600 millones, 400 se apliquen a la todavía no iniciada investigación sobre el estudio prospectivo de población potencialmente afectada por el síndrome tóxico y otros 200 millones a la investigación clínica y toxicológica y otros aspectos asistenciales relacionados con estas personas.

Por tanto, creemos que aquí hay unas medidas dotadas del mejor sentido, dotadas de una voluntad de defensa del sistema público, dirigidas a evitar que se despilfarre el gasto que para algunos serán objeto de reglamento y, si lo son, queremos que exista dicho reglamento y mientras no sea así, los socialistas acudiremos a cualquier tribuna pública que pueda ser tan legítima como este Parlamento, porque aprobamos la partida que va destinada a la atención sanitaria, para decirle al Gobierno: gástelo usted al menos con racionalidad de acuerdo con estos criterios, y si no le parecen racionales, díganos usted cuáles son, y nos lo dice en la ley, en el reglamento o en el «Boletín Oficial del Estado», a través de una circular o de quien corresponda, pero débatalo y dígallo donde haya que discutirlo; cualquier cosa antes que el vacío que contribuye de manera sistemática, según unos deliberada, según otros negligente —la valoración al final es la misma— al hundimiento del sistema de la Segu-

ridad Social. Nada más, señor Presidente, pedimos el voto favorable a esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de las tres enmiendas, señor Bravo de Laguna, o sólo de la 383?

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Turno en contra de la enmienda 381 y 382; a la 383 contestará mi compañero José Luis del Valle.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de las enmiendas 381 y 382, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Después de esta última explosión verbal, casi no nos acordamos de las enmiendas 381 y 382.

Simplemente vamos a decir que el criterio del Grupo Parlamentario Centrista es aceptar ambas enmiendas. La primera proponía la inclusión de la referencia a los puestos de trabajo directos creados que nosotros incluimos en los Presupuestos para 1981 y que nos parece quizá un dato innecesario incorporarlo específicamente pero, en definitiva, tampoco tenemos ninguna razón de fondo para oponernos y, por tanto, vamos a aceptar esta enmienda.

También vamos a aceptar la enmienda 382, y lo vamos a hacer por coherencia con el artículo 22.1 del propio proyecto del Gobierno, donde se establece un sistema parecido en cuanto a la posibilidad de compensación de deudas a la Seguridad Social de las Corporaciones locales. Lo que nos extraña es que el criterio cambiante del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a que se establezca este procedimiento de compensación con respecto a los organismos autónomos o empresas que reciban subvenciones con las deudas a la Seguridad Social. Pero en cuanto a las Corporaciones locales no les parecía nada bien, porque hay una enmienda, la 361, que proponía la supresión.

De manera que lo que les parece bien para organismos autónomos o empresas, en cuanto a la posibilidad de establecer un procedimiento de compensación, a través de las subvenciones, con las deudas de la Seguridad Social, no les parecía bien cuando se trataba de Corporaciones locales.

El señor PRESIDENTE: Para una cuestión de orden, tiene la palabra el señor Granada.

El señor GRANADO BOMBIN: Señor Presidente, se ha contestado a la enmienda 382, que todavía no habíamos defendido.

El señor PRESIDENTE: Habían sido defendidas conjuntamente la enmienda número 381 y la número 382. Además, el Grupo Centrista ha manifestado su criterio favorable a su admisión.

Para turno en contra de la enmienda número 383, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: El Grupo Parlamentario Socialista, por boca de su portavoz el señor De Vicente, nos vuelve a reiterar, en gran medida, una serie de cosas ya contenidas en otra enmienda anterior. Volvemos a contestarle, muy sintéticamente, diciendo que se trata de un conjunto de normas de fijación de una política sanitaria, que son normas en la mayoría de los casos reglamentarias, que se están llevando a cabo. Y creemos que no es el texto articulado de la Ley de Presupuestos el lugar adecuado para introducir estas normas, sino que existen otros procedimientos como son las proposiciones de ley y las proposiciones no de ley para reclamar proyectos al Gobierno, o disposiciones legislativas de rango inferior a ley.

No obstante, no queremos dejar pasar la oportunidad de contestar puntualmente a todas y cada una de las propuestas que se contienen en la enmienda presentada por el señor De Vicente, y esperamos que con mejor fortuna en cuanto a la brevedad de la intervención.

En cuanto al objetivo número uno, que es corregir las desigualdades de oferta sanitaria mediante una serie de procedimientos, quiero señalar que hay que tener en cuenta ciertas normas que establecen las competencias de los entes autonómicos y de los preautonómicos —por cuanto muchos de estos servicios vienen transferidos a los mismos—, así como las competencias de las comunidades autónomas al respecto.

En cuanto al segundo objetivo, la existencia de una serie de indicadores sanitarios, conviene recordar que ya han sido publicados esos indicadores sanitarios en la Orden Ministerial de 2 de septiembre de 1978, que se publicaba en el «Boletín Oficial del Estado» el 14 de octubre del mismo año. Por otra parte, existe una comisión

de técnicos que está elaborando un conjunto de normas sobre control y calidad, estando prácticamente terminadas ya las concernientes al servicio de radiodiagnóstico y a laboratorio. En cuanto al tercer objetivo, es decir, el control de los días de hospitalización por los servicios estadísticos, hay que señalar que este control se está llevando ya a cabo y que existe un plan para mejorar este servicio mediante la aplicación de la informática. Ya se hacía referencia a ello en la contestación que se dio a la enmienda que presentó también el Grupo Socialista, en parte coincidiendo con la enmienda actual, citando la existencia de un plan de informatización, plan complejo que estaba en ensayo.

Respecto al cuarto objetivo, es decir, el impulso de los Centros de Salud, hay que señalar que requiere una serie de recursos, y que en el anejo a los Presupuestos de la Seguridad Social se puede comprobar cómo se van implantando progresivamente en función de las zonas en las que exista mayor deficiencia al respecto.

En lo relativo al quinto objetivo, que es el desarrollo de programas sanitarios especiales, hay que señalar también que, en lo que se refiere a los colectivos que necesitan de una especial protección, se están llevando a cabo una serie de programas por parte del Insalud y por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, muchas veces apoyados —como nos parece lo adecuado— por los centros asistenciales.

Por otra parte, en lo que se refiere al objetivo número seis, es decir, la creación de unidades específicas de planificación sanitaria, entendemos que en este momento no son convenientes ni adecuadas, y que se puede llevar a cabo esta planificación sanitaria a través de las propias instituciones sanitarias de la Seguridad Social y a través de las funciones directivas que tiene el Departamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social sobre las instituciones de la Seguridad Social.

Respecto a la existencia de una serie de programas especiales —objetivo número siete—, conviene también recordar los programas que se están llevando a cabo; por ejemplo, a través del Fondo Nacional de Asistencia Social, en el presupuesto del ejercicio de 1981.

En lo que se refiere a los sistemas de inversión y organización de centros y servicios asistenciales, se está buscando el sistema adecuado para

un control continuado en la cantidad y calidad de los servicios (objetivo número 8).

En cuanto al objetivo número 9, formación de residentes, ha de señalarse que la política que actualmente tiene establecida el Insalud, siguiendo las directrices marcadas al efecto por el Departamento y recogiendo las sugerencias del Consejo Nacional de Especialidades, es la formación en función de la demanda sanitaria que existe en el país, formando especialistas adaptándose a la realidad de la situación actual.

El objetivo número diez es la introducción de la psiquiatría. Nosotros ya señalamos en la reforma sanitaria que cada vez la asistencia sanitaria tiene unos costos crecientes, tanto en sí misma como en consecuencia de nuevas técnicas, por lo que creemos necesario el esfuerzo solidario de todas las administraciones públicas para dar una asistencia integral a los ciudadanos.

En lo que se refiere a la atención al alcoholismo, ha de señalarse que ya es objeto de tratamiento actual en régimen de ambulatorio; y en régimen de internamiento tiene que tener un tratamiento similar al de la asistencia psiquiátrica.

Respecto a la dotación de 300 plazas para médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, quiero resaltar que esta especialidad médica fue prevista como tal en el Decreto 2015/1968, de 15 de julio, que estamos en el ejercicio de 1981, y que se dotarán y se programarán las plazas que sean necesarias en función de la demanda del país.

En lo que se refiere a la distribución del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social, como ya se conoce por el informe de la Ponencia creemos que dicho Fondo, aparte de realizar una investigación continuada, en el caso concreto que nos ocupa debe también realizar una investigación en los problemas críticos que actualmente tiene el país. Entre ellos se prevé 400 millones de pesetas, y 250 millones de pesetas —creo recordar de memoria— en una disposición posterior, para dotar un fondo necesario para realizar las investigaciones en relación con el síndrome tóxico. No obstante, ha de señalarse que dentro del presupuesto del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social —que tendrá que ser objeto de retoque una vez que se apruebe este proyecto de ley— hay una cantidad destinada a la atención especial de investigación del síndrome tóxico, que está pendiente de la aprobación de la Comisión Adminis-

tradora de este Fondo. Con esa cantidad se van a hacer unos proyectos que se dividen en cuatro grandes líneas, que son: proyectos de investigación, con distintas especialidades; formación de personal; una serie de publicaciones, y una serie de operaciones especiales.

No obstante haber contestado —entendemos puntualmente— al contenido de la enmienda, volvemos a repetir lo que hemos señalado al principio: no creemos adecuado el texto articulado de la Ley de Presupuestos para introducir disposiciones como las que se pretenden por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno en favor de su enmienda 383, tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores diputados, como ustedes han podido percibir, el señor Del Valle ha distribuido la reflexión sobre el contenido de nuestra enmienda en dos tipos de temas: lo que ya se ha hecho y lo que se va a hacer.

Mi opinión personal es que el caos en el que se mueve la Seguridad Social —del cual es expresión la voluntad de solución que esta enmienda comporta— pone de relieve que lo que ya está hecho no se ve y, consecuentemente, es ineficaz. Yo dudo de que esté hecho, pero en fin acepto, cómo no, a título personal la palabra del señor Del Valle, aunque no puedo menos de juzgar el contenido de lo que él afirma que está hecho, diciendo que la ineficacia es perceptible.

En cuanto a lo que se hará, evidentemente, esa es la pretensión de nuestra enmienda: que se haga, y que se haga a través de la inclusión, en una partida, de una enmienda a la Ley de Presupuestos, ya que —insisto— la Seguridad Social opera en la Ley de Presupuestos como una gran partida que se aprueba sin más, de tal suerte que no se da ni la más mínima norma por el Parlamento sobre qué hay que hacer con ese dinero. Consecuentemente, se deja en manos del Gobierno una cifra que, homologado el tratamiento con el que se da a las partidas del Presupuesto General del Estado, no se justifica por ninguna parte. Observen ustedes el detalle con el que se discuten partidas en el Presupuesto General del Estado, con que se discuten, en el contenido del texto articulado de la Ley, preceptos que afectan cuestiones de cientos de millones, o de miles de

millones, pero jamás normalmente de cientos de miles de millones; y observen ustedes la total ausencia de criterios aplicables a un gasto tan importante como éste. En definitiva, que, como el señor Del Valle nos ha reflejado, entre los que se ha hecho —que no vemos— y lo que se hará —que no veremos, puesto que ya se anuncia una posición contraria a nuestra enmienda—, así nos va el pelo en la Seguridad Social. Dicho en pocas palabras, que la están hundiendo tranquilamente aun teniendo posibilidades de salvarla; posibilidades que se le brindan desde la oposición con la mejor idea de colaborar en la defensa de un sistema público.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno en contra, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Hay que recordar que el señor De Vicente nos anuncia continuamente el caos y el hundimiento de la Seguridad Social; nos lo anuncia todos los años y la Seguridad Social no se ha hundido. Yo no sé —y no me atrevo a afirmarlo— pero parece ser que lo que el señor De Vicente quiere es que se hunda la Seguridad Social y poder decir: Ya lo he pronosticado.

Por otra parte, las medidas que se adoptan no son como al señor que le duele la cabeza, que toma un píldora e inmediatamente quiere que se le quite el dolor de cabeza. Normalmente, entre la adopción de una medida y el que se vea su eficacia, se tarda un cierto tiempo, y el señor De Vicente lo sabe perfectamente.

En cuanto al sistema de discusión del Presupuesto de la Seguridad Social, éste viene impuesto en la Ley General Presupuestaria. Si se cree que no es el sistema adecuado introdúzcase una modificación; el Grupo Socialista tiene la oportunidad de presentar una proposición de ley, modificando la Ley General Presupuestaria en este punto. Además, a pesar de que no es el mismo sistema del Presupuesto del Estado, se está haciendo un gran esfuerzo —y se ve en la documentación que se presenta con el Presupuesto de la Seguridad Social— para acomodar la estructura del Presupuesto de la Seguridad Social a las normas que rigen en los Presupuestos del Estado.

También queremos recordar que muchas veces se han hecho una serie de pronósticos por el

Grupo Parlamentario Socialista. Por ejemplo el año anterior, se dijo que se podían incluir mayores gastos en razón de que había mayores ingresos y, según los resultados de este año, no se han cumplido los pronósticos del Grupo Socialista: es decir, los ingresos no solamente no han sido mayores, sino que bajan unos tres puntos con respecto a los ingresos previstos en el presupuesto del año 1981.

El señor PRESIDENTE: Con esto queda concluido el debate de las enmiendas relacionadas con la Disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos.

Como la totalidad de enmiendas presentadas son enmiendas de adición y no existe ninguna enmienda de texto alternativo a la citada Disposición, vamos a someterla en primer lugar a votación y con posterioridad votaremos las enmiendas que complementarían su contenido. *(Pausa.)*

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional primera por unanimidad de votos de la Comisión.

Enmienda número 94 que, en su caso, supondría una adición al apartado a) de la disposición adicional primera. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 94 por unanimidad de votos de la Comisión.

Las enmiendas 381 y 382, si bien son de contenido diferente, al haber anunciado el Grupo Centrista su posición favorable a las mismas, podemos someterlas, si no hay inconveniente, a votación conjunta. Enmiendas números 381 y 382 a los apartados g) y h) de la Disposición adicional primera. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas números 381 y 382 a los apartados g) y h) de la Disposición adicional primera.

En consecuencia, el contenido de la citada Disposición quedará complementado con el de la adición de las enmiendas números 94, 381 y 382.

Por último, sometemos a votación la enmienda 383 que pretende la creación de una Disposición adicional primera bis, nueva. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 383.

A la Disposición adicional segunda existe una única enmienda, la número 12, del señor Tammes, del Grupo Mixto, que será sometida únicamente a votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 19; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 12 a la Disposición adicional segunda.

A continuación, existen las enmiendas números 384 y 633 que pretenden la adición de un apartado cuatro a la Disposición adicional segunda.

Para la defensa de la enmienda 633, por el Grupo Socialista Vasco, tiene la palabra el señor Solchaga.

El señor SOLCHAGA CATALAN: Como conocen SS. SS., la Disposición adicional segunda en estos Presupuestos recoge la asunción por parte del Estado de una serie de obligaciones del INI. A nosotros esta Disposición adicional nos parece especialmente pertinente en la situación económica por la que atraviesa este país y en especial en relación con la crisis industrial y el proceso de reestructuración que ésta implica.

En efecto, el Instituto Nacional de Industria constituye la palanca principal para la política industrial del Gobierno, aunque por desgracia ha sido menos utilizada de lo que debía de haber sido desde nuestro punto de vista, y constituye asimismo la mayor concentración de empresas públicas de las que dispone el Estado. En ese sentido, consideramos conveniente que el Instituto Nacional de Industria, que durante los últimos años ha ido recibiendo en su seno empresas e industrias que estaban en grave situación de crisis, pueda sanear su situación de pasivo y ganar grados de libertad para poder ser utilizado en este proceso de reestructuración industrial al que antes hacía referencia.

Esto es especialmente pertinente porque, como es bien conocido, en este año, y hace tan sólo una semana, quedó aprobada, por este Parlamento, la creación mediante ley del Instituto Nacional de Hidrocarburos, que va a recoger precisamente aquellas empresas del Instituto Nacional de Industria que se podían contar entre las que producían mayor nivel de «cash flow» o de beneficios. De manera que a partir de ahora el Instituto Nacional de Industria va a encontrarse en una situación financiera que de no ser por esta Disposición adicional segunda habría de ser mucho más difícil de la ya bastante dificultosa por la que ha atravesado en los últimos años.

Ahora bien, nosotros, desde el punto de vista socialista, nunca hemos querido sino una utilización correcta de la empresa pública. Esto significa una utilización de la empresa pública beligerante, para luchar contra los diversos problemas que se plantean en la economía, pero no beligerante contra la empresa privada en el sentido de concederle privilegios. En este sentido es en el que nosotros presentamos esta enmienda de adición que pretende que precisamente, como contrapartida a este sacrificio que hace el Estado asumiendo una parte de los pasivos del Instituto Nacional de Industria, sea el propio Gobierno quien, en el plazo de unos meses, y ahora concretaré esta cuestión, presente al Parlamento un proyecto de contrato-programa de carácter plurianual para suscribir entre el INI y el Estado; es decir, una especie de garantía de que este dinero, que con el sacrificio de los contribuyentes españoles pasa a partir de ahora a ser un pasivo del Estado y no del conjunto de empresas públicas que constituyen el Instituto Nacional de Industria, va a ser utilizado precisamente dentro de una serie de planes que, al ser visados por el Parlamento, van a tener también el control de todos los contribuyentes a través de sus representantes legítimamente elegidos.

Yo quiero recordar aquí que el Instituto Nacional de Industria tiene una serie de obligaciones importantísimas en la reestructuración de los sectores básicos de la economía española: el sector siderúrgico y el sector de la construcción naval; pero que esto no es suficiente, que junto a estas reestructuraciones de estos dos sectores y otras que quizá puedan plantearse en sectores de menor importancia, en los que el INI tiene un gran peso específico, en un próximo

futuro, hay que considerar también al INI como una palanca industrial que sea capaz, en ausencia de suficiente iniciativa privada, de lanzar nuevas inversiones por sectores de futuro, por sectores industriales hacia donde vaya a ir en el sentido positivo la reestructuración industrial que la crisis económica actual exige y requiere.

En consecuencia, nosotros proponemos, pues, que se firme este contrato-programa y que sea el Gobierno el que presente al Parlamento el proyecto de dicho contrato-programa. Habíamos puesto en nuestra enmienda que el plazo en el que el Gobierno debería hacer esto sería de tres meses. Considerando el tema y viendo la enorme complejidad del mismo, nosotros estaríamos de acuerdo en admitir un plazo más importante puesto que se trata en todo caso de un proyecto de contrato-programa plurianual, es decir, que no hace referencia tan sólo a 1982, sino a un plazo bastante más amplio y entonces no tendría mayor importancia que, en vez de estar ya presentado al Parlamento el 31 de marzo estuviera el 30 de junio.

Con esta pequeña modificación que introduzco «in voce», es decir, que el plazo sea de seis meses, nosotros pedimos de SS. SS. la votación a favor de la enmienda del Grupo Socialista del Congreso y del Grupo Socialista Vasco.

El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Barón, que idéntica modificación se efectúa respecto a la enmienda 384 y en consecuencia que el plazo de presentación del contrato-programa, en lugar de ser de tres es de seis meses.

¿Turno en contra de la misma? (*Pausa.*) No existe.

Igualmente, a la Disposición adicional segunda figura presentada la enmienda 385, del Grupo Socialista del Congreso, que pretende la adición de un nuevo apartado, que sería en su caso un apartado quinto de la Disposición adicional segunda. Para su defensa, tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Esta es la tercera enmienda que, junto a las dos defendidas —la de ayer relativa a los criterios de gestión económica, la de hoy a los criterios de orientación sanitaria de la gestión del Insalud—, completan el panel de tres textos, cuya adición a la ley se pretende, en orden a mejorar la gestión de la Seguridad Social. Esta se refiere concreta-

mente al gasto farmacéutico del presupuesto-resumen de la Seguridad Social.

Aquí pretendemos terminar con una situación de caos en la gestión de la prestación económica de la Seguridad Social que, lógicamente, pasa por la definición de algunas coordenadas relativas al sector farmacéutico, con el que está íntimamente vinculada la importante cifra que la Seguridad Social invierte en la materia, y teniendo en cuenta, sobre todo, la condición prácticamente monopolista en que opera la Seguridad Social respecto de este sector en cuanto a una importante parte de la cifra de ventas del mismo.

Proponemos algo sentido por el sector de la industria farmacéutica y que el Gobierno no ha hecho hasta el momento. Instamos a ésta a que elabore «un plan de reestructuración de la industria farmacéutica y de la distribución mayorista» (hay una omisión en el texto mecanográfico de la conjunción «y», segunda línea, entre la palabra «farmacéutica» y la palabra «de»), «en colaboración con las empresas y con las organizaciones sindicales representativas, que permita que el sector alcance niveles competitivos y que garanticen el nivel de empleo actual».

También se pretende la eliminación de un conjunto de especialidades farmacéuticas existentes en el mercado, absolutamente inútiles. En este sentido, proponemos «la revisión del 25 por ciento de las especialidades existentes en el mercado, según criterios de eficacia e inocuidad», para eliminar aquellas que resulten inútiles y, consecuentemente, reducir la necesidad de inmovilizar recursos financieros por parte de los distribuidores minoristas y mayoristas, y también para terminar con una situación de caos y de multiplicidad de medicamentos.

Asimismo, se propone algo tan elemental como el «fomento de la producción de materias primas y de la investigación científica y técnica por parte de los laboratorios», adoptando el Gobierno las pertinentes medidas; así como algo importantísimo (tan importante que, o se toma esta medida o esto se va a pique desde la perspectiva del gasto farmacéutico) que es «una nueva normativa del Registro de especialidades que dé opción a aquellos medicamentos que, suponiendo un avance terapéutico en España, en comparación con otros existentes en el mercado, su materia prima haya sido sintetizada en nuestro país por el propio laboratorio que solicita el

registro». Dicho en otras palabras, esta es la expresión en positivo de una realidad, la del registro de especialidades en el que se registran especialidades que no añaden nada a lo que hay en el mercado y que, consecuentemente, está mal orientado.

Se pretende también algo tan modesto como realizar un estudio sobre la posibilidad, sobre la posibilidad, insisto, de creación de una empresa nacional químico-farmacéutica que tenga algunos objetivos básicos en orden al desarrollo de la industria farmacéutica en España. La posibilidad puede acabar con el sí o con el no. Por tanto, creemos que estudiar el tema no es algo que dañe sino que, por el contrario, permitirá la clarificación del mercado farmacéutico y del sector industrial de farmacia.

Por otra parte, se pretende algo muy importante en la política de precios de los medicamentos, que afecta tanto a los consumidores no vinculados a la Seguridad Social como a ésta, que es el «reajuste de los precios de los medicamentos que tenga en cuenta las variaciones (incluso a la baja) del coste de las materias primas». Hay materias primas que han bajado, cuyo precio anterior fue tenido en cuenta a los efectos de la elaboración del escandallo y de ulterior aprobación de precio y que siguen manteniendo el precio que tenían anteriormente, no obstante haberse registrado, insisto, una baja en las materias primas que han servido para la elaboración del medicamento. Por tanto, no corresponde, ni siquiera dentro de la economía de mercado, a lo que el mercado debe expresar. Esta es la realidad de los precios de las materias primas que sirven para la elaboración de un producto. Y, en orden a la elaboración de los nuevos precios, se propone la «aprobación de un nuevo escandallo de tipo aditivo que permita incluir los gastos de investigación de los laboratorios que demuestren, inequívocamente, que realizan una investigación seria y eficaz».

Nuestra enmienda solicita algo también importante y vinculado al tema del registro de medicamentos, que es el tema de la revisión de los precios de los medicamentos, de tal forma que se estimule la rentabilidad de la industria farmacéutica española y que se tengan en cuenta preferentemente los medicamentos que, siendo necesarios para la salud, están desapareciendo del mercado por aplicarse exclusivamente criterios de falta de rentabilidad —por no ser rentables,

no se siguen produciendo—, así como que ello no suponga aumento de los precios de los medicamentos de alto precio que, por ser modernos, son suficientemente rentables en términos generales. Como SS. SS. saben, la política registral se caracteriza porque se presentan al registro medicamentos que no añaden nada nuevo, salvo el precio más caro, y justamente se utiliza la vía del registro para vadear la vía de la revisión de precios. Se presenta al registro un medicamento que, insisto, no añade prácticamente nada, en ocasiones absolutamente nada, y la única diferencia con otro medicamento, con otra denominación específica y el mismo contenido básico, es simplemente la de que es el precio más alto. Se utiliza esta vía para lograr una elevación de precios por un trámite que podríamos llamar no adecuado.

Finalmente, también se pretende el mantenimiento de la aportación de los beneficiarios de la Seguridad Social durante el año 1982 en el 30 por ciento, cuando fueran dispensados mediante recetas normales de la Seguridad Social, y no en el 40 por ciento, como actualmente está hecho. Hay un error manifiesto de cálculo en el Presupuesto de la Seguridad Social, perceptible por un alumno de 1.º de EGB, en el cual se pone de relieve que existe una sobrevaloración de la partida en 12.000 millones de pesetas y, consecuentemente, esa partida puede servir perfectamente —y planteo esto en coordinación con otra enmienda cuantitativa al Presupuesto de la Seguridad Social— para reducir la aportación de los asegurados.

Se establece otra serie de medidas en relación con la situación de invalidez o incapacidad laboral transitoria. Y en otro orden de ideas, se propone, también dentro de la reestructuración del gasto farmacéutico, la creación de plazas de farmacéuticos hospitalarios en aquellos hospitales del Insalud de más de 250 camas, lo que permitirá reestructurar el gasto hospitalario reduciéndolo respecto a la dimensión farmacéutica del actual.

Por último, la elaboración de un Plan de Reordenación de las Oficinas de Farmacia, en colaboración con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y con las Organizaciones Sindicales representativas». Lo que se pretende es reestructurar el sector porque, de lo contrario, el sector se va a pique y la Seguridad Social se va a pique juntamente con él.

Yo quiero señalar que, o se adoptan estas medidas o triunfará la política que se está practicando de asalto al estado de bienestar, es decir, al sistema de prestaciones públicas de Seguridad Social; política sistemáticamente seguida que, lamentablemente, tenemos que denunciar año tras año y presentar enmiendas de análogo corte año tras año, porque año tras año no se hace nada; no es que se haga lo mismo, es que no se hace nada. Consecuentemente, como se deja que las cosas vayan tal cual, se hace preciso repetir año tras año las mismas enmiendas, en la esperanza de que algún día se tomen en razón y se asuma el espíritu que las enmiendas reflejan con otro texto.

Estamos dispuestos, insisto, a cualquier tipo de negociación en esta materia para obtener un texto que mejore la Seguridad Social. De lo contrario, llegará un año en el que no podremos presentar enmiendas a nada porque prácticamente todo se habrá convertido en niveles mínimos de protección a los asegurados y todo aquello que signifique algo importante, desde el punto de vista cuantitativo, estará en manos de las compañías mercantiles o de las aseguradoras, como demuestra el proyecto de ley del Seguro Privado, que anuncia, de manera clara ya, eso que el Gobierno siempre niega: la voluntad de reprivatización de la Seguridad Social. Lean SS. SS. el texto del proyecto de ley del Seguro Privado, donde tienen por escrito lo que siempre se nos niega de palabra: el intento claro y deliberado, ya no de las compañías sino del Gobierno, de reprivatizar la asistencia sanitaria y, consecuentemente también, de poner en crisis toda la atención de ésta, incluida la farmacéutica.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Aparte de reiterar los argumentos formales expuestos con anterioridad de que no es la Ley de Presupuestos el lugar adecuado para incluir medidas como las que se proponen a través de la enmienda socialista, vamos a centrarnos exclusivamente en los puntos fundamentales que se contienen en la misma.

Primero habla de la revisión del precio de productos farmacéuticos. Señor De Vicente, no es que no se vaya haciendo nada, es que puede ser que se vayan haciendo cosas y que no las

conozca S. S., que es otra cosa muy distinta. Precisamente, en la revisión que se ha realizado en el año 1981, con anterioridad por supuesto a la presentación de esta enmienda, se han seguido los criterios que se señalan en la enmienda del Grupo Socialista. Por ejemplo, a los productos registrados más modernos se les han congelado los precios y se han incluido revisiones a la baja de aquellos productos nuevos en razón del aporte novedoso, en el conjunto de especialidades farmacéuticas. La política que se propone dentro de la enmienda presentada por el Grupo Socialista es la política que se ha seguido en el sistema de revisión de precios por el Gobierno.

En lo que se refiere al tema de creación de servicios farmacéuticos en establecimientos hospitalarios dependientes del Insalud, efectivamente existen servicios farmacéuticos hospitalarios en todos los hospitales de más de 200 camas. ¿Por qué existen? Porque hay una Orden ministerial de 1 de febrero de 1977 que así lo dice.

En cuanto al punto 12, nueva ordenación de las Oficinas de Farmacia, sabe perfectamente S. S. que el 11 de agosto del año 1981, con anterioridad a la presentación de la enmienda por el Grupo Socialista, se ha firmado un acuerdo entre la Dirección General de Farmacia y Medicamentos y el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, que conoce o que debe conocer perfectamente su señoría.

En lo que se refiere a la revisión de la participación de los beneficiarios en el pago de los productos farmacéuticos, ha de señalarse que ya veremos si existe o no existe el error en el Presupuesto de la Seguridad Social sobre este tema. Ya lo veremos en su momento oportuno.

Por otra parte, hay que señalar que no todos los beneficiarios de la Seguridad Social están obligados a esa participación en el pago de los productos farmacéuticos. Conoce perfectamente S. S. los términos del artículo 2.º del Real Decreto 945/78 que excluye a una serie de colectivos, a los que ha mencionado S. S. como si estuvieran obligados al pago; por ejemplo, el colectivo de aquellos que hayan sido declarados en invalidez. Y me permito leer la norma que dice textualmente: «No será de aplicación lo establecido en artículo anterior» —que regula la participación— «a los tratamientos que se realicen en instituciones sanitarias cerradas propias y concertadas de la Seguridad Social; a los que tengan

su origen en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ni a la dispensación a los pensionistas de la Seguridad Social y trabajadores en situación de invalidez provisional derivadas de enfermedad común y accidente no laboral con derecho a prestación farmacéutica de la Seguridad Social, supuestos en los que el beneficiario no realizará aportación alguna».

El señor PRESIDENTE: El señor De Vicente tiene la palabra.

El señor DE VICENTE MARTIN: Nuevamente nos encontramos con el argumento de que no es el lugar la Ley de Presupuestos. Vamos a hablar de este tema cuando lleguemos al síndrome tóxico, donde hay enmiendas del Gobierno proponiendo que se incorporen a la ley textos de decretos recientemente aparecidos, a ver cómo se sostiene la posición del Gobierno, del Grupo de UCD, en ese momento y a ver por qué lo que está aprobado en un Reglamento hay que traerlo aquí. Nosotros proponemos que lo que no está en el Reglamento se incorpore aquí, pero si hubiera un Reglamento nos satisfaría suficientemente. Es más difícil demostrar la necesidad de traer aquí lo que está publicado en el «Boletín Oficial del Estado» que la de traer al «Boletín Oficial del Estado» —intentamos que así vaya, a través de la enmienda— lo que no está en la realidad.

Lo que quiero decir es que, aparte de estas razones, se sigue diciendo lo de siempre, que estamos en ello. Esta es la clásica actuación de la Administración cuando el administrado acude a una dependencia pública preguntando por un tema; siempre se le contesta, o al menos en muchos casos «estamos en ello». Lo cierto es que el tema no se resuelve. En este sentido, ya que se han hecho afirmaciones concretas, yo quiero decirle al señor Del Valle que, por favor, visite los hospitales de más de 250 plazas y que se lleve una pequeña hoja de block, de ese que se utiliza, de octava parte de una cuartilla, para tomar notas, porque observará la ausencia de servicios de farmacia hospitalaria; me refiero no al hecho de que haya farmacéuticos trabajando en otros temas, hablo concretamente de servicios de farmacia hospitalaria. Llévese el block, porque le van a sobrar las siete octavas partes de esa pequeña hoja para apuntar los hospitales que tienen esos servicios.

Finalmente, el señor Del Valle ha hecho referencia a un acuerdo entre la Secretaría de Estado para la Sanidad —no sé si lo ha dicho así, pero en todo caso así es— y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos; acuerdo clandestino, cuyo conocimiento público aparece por primera vez aquí en el Parlamento; acuerdo clandestino que afecta a cómo se ha de gastar el dinero de la Seguridad Social, a la política de precios, a la revisión del precio y al cómo del gasto. Es decir, dos señores, el secretario de Estado para la Seguridad Social y el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, firman un acuerdo asumiendo competencias que son del Parlamento. El acuerdo ha dejado de ser clandestino para ser incorporado al «Diario de Sesiones». Lo que me asombra es que se diga por el señor Del Valle —que, por otra parte, tiene todos mis respetos personales, aunque nos enfrentemos en estas contiendas— que yo tengo por qué conocer, que el Grupo Socialista debe conocer. Si es clandestino, ¿cómo lo vamos a conocer? De todas formas, sugiero al señor Del Valle que, para que sus palabras sean realidad, se nos envíe regularmente, no sólo al Grupo Socialista, sino a los demás, cuantos acuerdos se firmen sobre la materia o en otras materias conexas, que no se sabe por qué, siempre debemos de conocer, que en algunas ocasiones conocemos, pero que era preciso que aparecieran para que perdiera ese tono —insisto— clandestino y espúreo con el que es planteado y apareciera en el texto correspondiente. Lo de espúreo lo mantengo.

Finalmente, quiero decir, en relación con la afirmación del señor Del Valle vinculada al tema de la estimación de los gastos e ingresos de la Seguridad Social, una cosa muy importante. Nosotros vamos a demostrar en el Pleno de la Cámara una vez más este año —aunque SS. SS. se resistan a ello— que ustedes se equivocan o por falta de técnica o deliberadamente en la estimación de los ingresos. Me apuntaba una persona tan poco sospechosa de hablar con ligereza como el señor Granados, cuya dedicación a estos temas y análisis puntual es conocido por SS. SS., y por tanto le doy a él la paternidad de la idea, que no es una idea, sino una referencia, me decía que en la única cuenta de la Seguridad Social que se ha presentado con las cuentas del Estado hasta el momento, la última, la de 1980 —que no es que sea técnicamente muy buena,

pero es la única—, hay un reflejo claro de cómo nuestras tesis de que se están infravalorando los ingresos son ciertas. Concretamente se comprueba aquel año cómo hay 57.000 millones de pesetas de recaudación más que la prevista. Esos datos ya no son nuestros, son de ustedes.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno en contra, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Efectivamente quizá me sobre cuartilla, porque es que yo tengo una letra muy pequeña, señor De Vicente, al anotar las cosas.

Hay que señalar que puntualmente se deja en los casilleros de los diputados el avance de la recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social. Yo estoy hablando del ejercicio de 1981 que es el inmediato precedente y en éste podrá usted ver que, con respecto a las previsiones de recaudación, existe una baja entre el 3 y el 4 por ciento en este año con respecto a las de 1981, cuando S. S. anunciaba en el Pleno, en el presupuesto del año anterior, que se había hecho una infravaloración de ingresos. Luego se ha equivocado S. S., y reconózcalo así.

Por otra parte, no son acuerdos clandestinos los acuerdos que no conozca el señor De Vicente; son simplemente acuerdos que no conoce el señor De Vicente, no es que sean clandestinos.

El señor PRESIDENTE: Con ello queda concluido el debate de las enmiendas a la Disposición adicional segunda, relativa a la asunción por el Estado de las Obligaciones del Instituto Nacional de Industria.

Como quiera que las enmiendas presentadas suponen adición de nuevos apartados, podemos someter a votación, en primer lugar, la citada Disposición segunda y a continuación las enmiendas que en su caso integrarían apartados cuatro y cinco nuevos.

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición adicional segunda del proyecto de ley por unanimidad de votos de la Comisión.

Votamos las enmiendas números 384 y 633, de

contenido idéntico, que pretenden la presentación en el plazo de seis meses por el Gobierno de un contrato-programa con el Instituto Nacional de Industria.

Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Quedan igualmente aprobadas, por unanimidad de votos de integrantes de la Comisión, y en consecuencia, su contenido pasará a formar el apartado cuatro de la Disposición adicional segunda.

Por último, se somete a votación la enmienda número 385, del Grupo Socialista del Congreso.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 18; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 385.

La Disposición adicional tercera tiene presentada la enmienda 386, del Grupo Socialista del Congreso. Para su defensa, tiene la palabra el señor Granado.

El señor GRANADO BOMBIN: Sobre esta enmienda tendría que limitarme a repetir lo que dije para los años 1979, 1980 y 1981. Me parece inconcebible, aunque tal vez puedan replicarme que van a subir a 7.500 pesetas la pensión mensual, porque aquí, como en otros aspectos del Presupuestos que ha señalado recientemente mi compañero Ciriaco de Vicente, no hay ninguna norma; sencillamente se dice en la Disposición adicional que se mantienen las normas y los requisitos previstos en la legislación vigente.

Yo sólo quiero señalar, sobre esta tragedia que afecta a unos 500.000 españoles, algunos datos adicionales que han ocurrido durante el año actual.

El ex Presidente del Gobierno, señor Suárez, nos señaló en una ocasión que en este momento de crisis teníamos que evitar todos que el empobrecimiento de la mayoría condujera a la miseria o al hambre a ningún grupo. Nosotros lo compartimos plenamente, y esto lo digo porque probablemente la excusa sea la austeridad. Yo espero que los representantes del partido mayoritario no aleguen austeridad, porque me forzarían a decir palabras que prefiero no pronunciar en este momento.

Disposición
adicional
tercera

Por un diputado de la Minoría Catalana se preguntó al Gobierno, en enero de este año, qué criterios tenía sobre la aplicación del Fondo Nacional de Asistencia Social. El Gobierno no contestó, de hecho, a las preguntas implícitas y a la apoyatura que daba el diputado que creo que nos acompaña en esta sesión, señor López de Lerma. Se limitaba a decir que el costo era de 1.440 millones de pesetas mensuales, que era exactamente multiplicar por cuatro mil pesetas los 360.000 beneficiarios, y que aplicaría un 12,5 por ciento de incremento. Hay que pensar que la última elevación fue del año 1979.

Después, por un compañero mío de partido, se ha hecho otra pregunta sobre las condiciones para la concesión de la ayuda. Presumo que el Gobierno contestará con una resolución, porque con posterioridad a la pregunta ha dictado un decreto, publicado en el «Boletín» de 9 de noviembre, en el que señala que para tener derecho a la pensión del Fondo Nacional de Asistencia Social se necesita no tener absolutamente nada y no vivir con nadie, porque si vive con alguien, incluso alguien que tenga el salario mínimo —y hablo no ya de un soltero que tenga el salario mínimo; una familia de cuatro personas que tenga además un ascendiente mayor de sesenta y nueve años o inválido absoluto— no tiene derecho a la prestación. Esto es una vergüenza. Si los españoles dedicaran un poco de atención al Parlamento, verían que no teníamos ya no sensibilidad, sino que éramos inhumanos a pesar de tener figura humana.

La propuesta que nosotros hacemos este año, que repite —ya digo— la de años anteriores, es que se garantice una pensión mínima de 7.500 pesetas mensuales, y que se baje la edad a los setenta y cinco años. No me agrada mucho, fui adversario resuelto del régimen del general Franco, pero hay que volver a decir que en la Ley de Presupuestos para 1975 ya se establecía que la edad fuera sesenta y cinco años. Yo quiero apelar a la racionalidad del partido del Gobierno. Si un ciudadano español normal, en el sentido de que está en disposición plena de facultades físicas y mentales, tiene dificultades extraordinarias para encontrar trabajo, hay que pensar en cómo un hombre o una mujer española en circunstancias especiales, por cualquier razón, bien por culpa social, bien por defecto propio (inválido permanente, drogadicto, alcohólico, cualesquiera circunstancias que con-

curran en él), va a encontrar trabajo; y, sin embargo, para cobrar de ese Fondo se le impone la edad de sesenta y nueve años; aparte de que la expectativa de vida de estos conciudadanos —aunque ellos dirán que no son conciudadanos de nadie—, de estos españoles, es muy inferior a la de los demás, porque han llevado una vida más dura y no me importan las causas. ¿Cómo es posible que no bajemos a los sesenta y cinco años? ¿Cómo es posible que no nos propongamos de una vez el elevar al menos en cuatro o cinco puntos por encima del coste de vida la ínfima pensión que les reconocemos?

Hay un aspecto más hiriente, más doloroso aún en la política del Gobierno. Hay un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario a una empresa nacional por pérdidas del año 1979. Ya no es sólo —y tocaremos este tema con las cuentas de la Seguridad Social en su momento— que no se gaste lo disponible, sino que, encima, a estos españoles condenados a la miseria se les arrebatara parte de las cantidades disponibles, y se arrebata para reducir —pienso— el déficit público, no el de otras partidas que merecerían que el Estado se hiciera cargo de ellas, aparte de intentar evitar el déficit en las empresas públicas; pero más de 1.500 millones de pesetas se intentan detraer del Fondo Nacional de Asistencia Social para este crédito extraordinario, manteniendo esas ayudas —no sé cómo llamarlas—, esa miseria, en favor de ese colectivo de españoles.

Como último argumento quiero decir que si el producto interior bruto para 1982 parece que rondará alrededor de los 20 billones, tocamos a 530.000 pesetas aproximadamente por habitante; que un anciano tiene un índice de costo real de al menos un tercio más, es decir, que el índice de costo de cualquier ciudadano habría que multiplicarle el mínimo de subsistencia por 1,33 para un anciano, y, sin embargo, les queremos dar la séptima parte del promedio de riqueza nacional.

Si no reaccionan ante estos argumentos, que son muy objetivos, aunque puedan ser expuestos con la pasión que merecen, yo ya no sé qué hacer. Y pienso que lo que decía mi compañero Ciriaco de Vicente será válido para el futuro: es el silencio ante la irracionalidad, ante la inhumanidad de un Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Figura igualmente presentada a la Disposición adicional tercera la

enmienda número 411. ¿Desean defenderla? *(Pausa.)*

Para su defensa, tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, tengo la impresión de que por un error de transcripción mecanográfica imputable a mi grupo se ha hecho propuesta de adición al proyecto de ley de una Disposición adicional tercera bis, nueva, en un tema que es contemplado por la Disposición final tercera. Si S. S. lo estima pertinente, ya que hay otras enmiendas de otro grupo al mismo tema del AINS y del INA, dejaríamos su debate para ese momento, con el ruego de que a los efectos de debate en Pleno, si se estima pertinente, se subsanara por la Mesa la ubicación de la enmienda, vinculada —insisto— a la Disposición final tercera y no la adicional tercera.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, en la ordenación de los trabajos y en el informe de la Ponencia figura en la Disposición adicional tercera, aun cuando su contenido hace más referencia a la Disposición final tercera. En ese momento será debatida.

Para turno en contra de la enmienda 386, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Cumpló un deber, yo diría, desagradable de consumir un turno en contra de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Y cumpló un deber desagradable porque, sin perjuicio de la justicia de esas peticiones y de muchas otras —porque existen muchas demandas sociales que con el sistema democrático, gracias a Dios, han aflorado—, el Estado cuenta con una serie de recursos que son escasos para atender la totalidad de las demandas.

La enmienda socialista plantea dos temas: uno, reducción de la edad para el cobro de esta pensión de ayuda a ancianos y enfermos de sesenta y nueve a sesenta y cinco años; y dos, el aumento de la misma a 105.000 pesetas anuales, mientras que en el proyecto de Ley de Presupuestos se aumenta la misma a 77.700 pesetas anuales.

El problema que existe es que el costo que se deriva de estas medidas es de 18.211 millones de pesetas de gastos corrientes. Y en la situación en

que nos encontramos con el presupuesto actual no podemos atender dicha ayuda. Pero no quiero dejar de destacar el esfuerzo que se ha hecho por el Gobierno en los últimos años, esfuerzo que entiendo que es insuficiente y que poco a poco hay que tratar de mejorarlo. Desde el año 1978 hasta el proyecto de Presupuestos de 1982, esta pensión se ha subido de 42.000 pesetas a 77.500, con un incremento del 84,52 por ciento. Es un problema que ha preocupado al Gobierno y al partido político del Gobierno y en función de ello se ha hecho un decisivo esfuerzo en esta materia. Pero el problema es que el costo de la medida, medida que consideramos justa como muchas otras demandas sociales, es de 18.211 millones y no la podemos atender. Voy a desglosar las cifras muy brevemente.

En primer lugar, como consecuencia del aumento respecto al colectivo que actualmente percibe esta ayuda —que es de 199.600 personas—, el incremento que supondría el elevar la pensión anual de 77.700 a 105.000 pesetas sería de 5.449 millones de pesetas.

Por otra parte, al rebajar la edad de sesenta y nueve a sesenta y cinco años, aumenta como mínimo en un 40 por ciento, con lo que el coste adicional sería de 8.383 millones de pesetas. Por otro lado, estas medidas habría que hacerlas extensivas también a los 160.400 enfermos que son los que perciben actualmente estas ayudas, con lo cual el mayor costo sería de 4.378 millones de pesetas. La cifra que resulta de todo ello son 18.211 millones de pesetas, que es el costo que supone la enmienda del Grupo Socialista y que, desgraciadamente, los Presupuestos Generales del Estado no pueden atender.

El señor PRESIDENTE: No solicitándose más turnos de palabra, vamos a pasar directamente a la votación de la enmienda número 386 y de la propia Disposición adicional. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 12 votos a favor; 17 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 386. A continuación sometemos a votación la propia Disposición adicional tercera, relativa a ayuda a ancianos. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resul-

tado: 19 votos a favor; 12 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición adicional tercera.

Disposición
adicional
cuarta

A la Disposición adicional cuarta, relativa a los mecanismos de protección en favor de los afectados por el síndrome tóxico, existen presentadas la siguientes enmiendas: enmienda número 51, del señor Alierta.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Está retirada, señor Presidente. No se refiere al síndrome tóxico, sino al Fondo de Compensación Interterritorial.

El señor PRESIDENTE: Señor Alierta, a la vista de las enmiendas, yo creo que existe un error en la presentación de la misma. La enmienda 51 hace referencia a la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial y, sin embargo, la Disposición cuarta hace referencia a los mecanismos de protección a los afectados por el síndrome tóxico. Entiendo que no ha lugar a su discusión y la enmienda será debatida en el momento precedente.

Tiene la palabra el señor Alierta.

El señor ALIERTA IZUEL: En el proyecto de ley existen tres Disposiciones adicionales. Mi enmienda pretende la adición de una Disposición adicional nueva que yo numeraba como cuarta. Imagino que las enmiendas que se refieren a Disposiciones adicionales cuartas tienen el mismo planteamiento; es decir, nuevas Disposiciones adicionales que, en función de que en el proyecto de ley había tres, las numeran como cuartas.

El señor PRESIDENTE: El proyecto de ley tiene cuatro Disposiciones. Es decir, que la enmienda de su señoría sería la Disposición quinta. En su caso, la someteremos a discusión y votación.

La enmienda número 666 aparece retirada por el Grupo Centrista. Enmienda número 109, que no se desea defender. Enmiendas del Grupo Socialista números 387, 390, 388, 389, 391, 392 y 393.

El señor De Vicente tiene la palabra para su defensa.

El señor DE VICENTE MARTIN: Perdón, señor Presidente, me ha parecido entender que el Grupo Centrista retiraba la enmienda 109.

El señor PRESIDENTE: Está retirada la enmienda 666 y mantenida la 109, pero se ha renunciado al turno de defensa.

El señor DE VICENTE MARTIN: Muy bien, señor Presidente, muchas gracias.

Brevemente para decir que, con estas enmiendas, se pretende mejorar la protección de los afectados por el síndrome tóxico.

La enmienda 387 pretende la eliminación de un párrafo que figura en el apartado 1, letra a), de esta Disposición adicional relativa a pensiones, en el que se prevé que no causarán pensión las personas menores de dieciséis años. Pretendemos la eliminación de este texto, ya que aquí se introduce una limitación a algo que el texto aprobado por el Parlamento, en el denominado debate sobre la colza del día 17 de septiembre, no introdujo.

Por tanto, estamos dando cumplimiento —y conviene señalarlo— a uno de los acuerdos del debate sobre el síndrome tóxico habido en esta Cámara que, entre otros puntos, finalizaba con una tema relativo a pensiones, y se atribuía a la Ley de Presupuestos la posibilidad de abordar el tema, sin perjuicio de que el Gobierno haya dictado un decreto con el que ha anticipado algunas de las medidas en una línea que, como señalo, limita el contenido de los acuerdos aprobados por esta Cámara. No se hace ninguna distinción, en el acuerdo aprobado por la Cámara, que perjudique a las personas menores de dieciséis años, que, en principio, no hay razón para que sean excluidas desde el punto de vista del acuerdo político de la Cámara que nos vincula a todos, ni tan siquiera desde el punto de vista de establecer, como mínimo, los dieciséis años, que es tan arbitrario como cualquier otro, sin perjuicio de que puede que se vincule a la edad laboral, pero aque, aún así, no tiene fundamento. De ahí que propongamos la eliminación de este párrafo.

Por otra parte, la enmienda 388 pretende la supresión en el apartado 1, letra C), de un párrafo que hace referencia a aquellas personas que no hubieran causado derecho a percibir pensión del Estado, Seguridad Social o cualquier otro sistema público sin perjuicio del derecho de opción entre tales pensiones y la ayuda sustitutiva de

prestación del desempleo, también aprobada por el Parlamento. Nuevamente nos encontramos ante una limitación, a través de la Ley de Presupuestos, de lo aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en el debate sobre el síndrome tóxico.

También tenemos una enmienda de sustitución, la 389, que propone la sustitución en el apartado 1, letra C), de los párrafos primero y segundo por los textos siguientes. En primer lugar, se refiere aquí a la acreditación del hecho de la prestación de trabajo y la existencia de la base de cotización. En cuanto a la ayuda del desempleo se propone que se calcule en función de la base correspondiente, devengándose —y ésta es la diferencia— por el porcentaje máximo y durante un período de dieciocho meses. Se señala seguidamente que, en caso de no acreditarse el tiempo de trabajo y la base de cotización —ésta es una adición—, la ayuda será equivalente al salario mínimo interprofesional, que se devengaría —propone nuestra enmienda— también por un período de dieciocho meses.

La enmienda 390 pretende la adición en la letra A) del apartado 1 de la Disposición adicional cuarta, de un nuevo párrafo, que sería el quinto y último y cuyo texto es el siguiente: «Cuando el causante de la pensión hubiera cumplido los dieciséis años y estuviera incapacitado para todo trabajo, la cuantía de la pensión a la que se refiere el párrafo anterior no será nunca inferior a la que le correspondería de haber cotizado al Régimen General de la Seguridad Social durante treinta y cinco años, incrementada en un 50 por ciento en caso de que el afectado fuese, además, calificado de gran inválido, destinando este suplemento para remunerar a la persona que le atiende». Y es evidente que se están produciendo secuelas en esta línea por el síndrome tóxico.

Por otro lado, se pretende la adición a la Disposición final cuarta de una nueva letra D), que no figura en el texto del proyecto de Ley de Presupuestos, para la que proponemos la rúbrica de «ayudas a las asociaciones de afectados», y el texto es el siguiente: «El Gobierno, en el plazo de quince días a partir de la aprobación del Presupuesto, aprobará y publicará en el «Boletín Oficial del Estado» un procedimiento rápido para la concesión de subvenciones y ayudas a las asociaciones de afectados por el síndrome tóxico con cargo al presupuesto del Ministerio de la Presi-

dencia y, en su caso, del organismo autónomo Instituto Nacional del Consumo».

Se pretende simplemente terminar con la situación actual de desprotección a las asociaciones de afectados que no están recibiendo ninguna ayuda de la Administración y que, evidentemente, lo que se pretende es que la reciban para que puedan desarrollar las actividades propias de las mismas, legítimas por otra parte, y fundamentalmente para cubrir una línea importante que el Gobierno no ha desarrollado, que es la línea de información a los afectados en orden al ejercicio de los derechos que el Parlamento les reconoce y algunos de los cuales se instrumentan a través de esta Ley de Presupuestos.

Se propone también la adición de una nueva letra E), inexistente en el texto de la proposición, que, bajo la rúbrica de «apoyo a las investigaciones clínicas y toxicológicas» —se ha omitido en la transcripción mecanográfica la expresión «clínicas»—, tiene como pretensión que se doten al Fondo de Investigaciones Sanitarias —ya hice referencia a ello anteriormente— 150 millones para la financiación de los trabajos de investigación que tengan como objeto el estudio de los aspectos clínicos y toxicológicos relacionados con el síndrome tóxico. De tal suerte que aquí lo que se pretende es garantizar que haya unos recursos para que esas investigaciones puedan llevarse adelante, ya que lo importante en esta materia son dos líneas básicas: una, la protección a los afectados y, otra, el desarrollo de las investigaciones para reducir la incidencia, la morbilidad en relación con la población que ha consumido el aceite adulterado.

También se propone en la enmienda 393 la adición de un nuevo epígrafe con la denominación de «estudio prospectivo sobre el síndrome tóxico», en el que se dice que, con cargo al Fondo de Investigaciones Sanitarias —y ya aludí a ello anteriormente—, se afectarán 400 millones de pesetas, a fin de financiar la realización de un estudio prospectivo sobre la población potencialmente afectada por el síndrome tóxico, de acuerdo con lo aprobado en el medida número 25 ó 26 —no recuerdo con precisión— por el Pleno del Congreso de los Diputados del día 17 de septiembre.

Se dice que este estudio tendrá carácter especial, y esto lo connoto con la referencia que hice en la enmienda relativa al programa de aplicación del presupuesto del Fondo de Investigacio-

nes Especiales de la Seguridad Social, que —como ustedes recordarán— tenía una dotación de 600 millones, algunas de cuyas aplicaciones ya voy señalando. Es un estudio que no está hecho y, consecuentemente, si no está hecho por falta de recursos, aquí hay una oferta al Gobierno para que se realice.

También quiero señalar a esta propósito que, en definitiva, todas estas enmiendas lo que pretenden es, de una parte, que se cumpla lo acordado por el Parlamento; de otra, que se apoye a las asociaciones de afectados y, de otra, dotar al Gobierno de recursos para realizar aquellas tareas que el Parlamento previó, que no entrañaban prestaciones ni ayuda para los afectados, sino un gasto público a través de acciones como las investigaciones que, por su estado de paralización, especialmente la relativa al tema de la población potencialmente afectada por el síndrome tóxico, nos parecen fundamentales. Digo que nos parecen fundamentales porque este estudio prospectivo pretende determinar cuál es la población que no teniendo sintomatología correspondiente al síndrome, sin embargo, va a ser afectada. Y hay medios clínicos y de diversa naturaleza sanitaria para poderlo detectar y, por tanto, poder determinar cuál es la población cuantitativamente afectada en las áreas correspondientes, y prever cuál ha de ser el gasto a realizar y, sobre todo, los recursos sanitarios humanos y técnicos para hacer frente a la enfermedad.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra. *(Pausa)*. Señor Del Valle. La Mesa quisiera simultáneamente preguntar cuál es la posición del grupo en relación a las enmiendas 392 y 393, a la vista de las afirmaciones contenidas en el informe de Ponencia.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: En el conjunto de mi intervención haré referencia específica a las dos enmiendas que ha señalado la Presidencia.

En lo que se refiere a la enmienda número 387, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se pide que se suprima la referencia a los menores de dieciséis años, nosotros creemos que, por encima del contenido del texto expreso de las medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados, existe la intencionalidad del mismo. Es claro que la concesión de pensiones se refería

al conjunto de personas que no habían causado pensión por determinadas circunstancias, pero que tenían las condiciones objetivas necesarias; y una de las condiciones objetivas para causar pensión es encontrarse en edad laboral. Y existen otros apartados en los que también se ha interpretado en favor de los afectados el contenido de las medidas aprobadas por el Congreso, como es la ayuda de los tres años.

Por otra parte, en lo que se refiere a la cuantía de las pensiones ha de señalarse que no podemos establecer cuantías distintas de las que, con carácter general, se establecen, porque generaríamos una desigualdad en cuanto a los propios afectados. Es decir, si hubiesen causado derecho a pensión, cualquiera que fuera su cuantía, cobrarían una pensión determinada que podría ser la misma, y si no hubieran causado pensión no solamente causarían ese derecho, a pesar de no reunir las condiciones legalmente establecidas, sino que, encima, lo causarían en mayor cuantía que aquellos que cumplen los requisitos legales al efecto. Por otra parte, esto se compensa en cuanto que —recordará muy bien el señor De Vicente— en el Congreso de los Diputados se aprobó una ayuda de tres millones de pesetas, pero se añadía a continuación: siempre que no hubieran causado ninguna pensión a su favor del Estado o en cualquier otros sistema de Seguridad Social o cualquier otro sistema público. De ello se derivaba una consecuencia absurda y por eso se ha eliminado. Es decir, aquella persona que no había causado derecho a pensión percibía la pensión y la ayuda de tres millones; y el que había causado derecho a pensión con arreglo, por ejemplo, a las normas de la Seguridad Social percibía la pensión en la cuantía que le correspondía con arreglo a las normas de la Seguridad Social, y no percibía la ayuda de tres millones de pesetas. Como era un resultado absurdo, en la misma medida que el que se deriva de englobar a los menores de dieciséis años, se ha suprimido de las ayudas establecidas en esta Disposición adicional.

En lo que se refiere al sistema de las ayudas sustitutivas de la prestación de desempleo, es lógico que se establezca que solamente percibirán la prestación de desempleo aquellos que no la hubieran causado con arreglo al sistema general, o aquellos que disfrutaran de otras ayudas establecidas dentro de la propia normativa de la Disposición adicional tercera, porque si no nos

encontraríamos con situaciones muy curiosas. Una persona que percibiese una prestación por incapacidad laboral transitoria, si se siguiese la enmienda 388, del Grupo Parlamentario Socialista, percibiría la prestación por incapacidad laboral transitoria más la prestación de desempleo, lo cual es un resultado evidentemente absurdo, a nuestro juicio.

Por otra parte, nos remitimos, en lo que se refiere a la fijación de las cuantías de esta prestación de desempleo, a las normas de la Ley Básica del Empleo, y se establece un procedimiento flexible en cuanto a determinar los períodos de trabajo, para fijar la prestación y la cuantía de la misma.

En cuanto a la enmienda 391, es decir, las ayudas a las asociaciones de afectados, que se pretenden introducir dentro del organismo autónomo Instituto Nacional del Consumo, tengo que decir que ese organismo autónomo lo que contempla son las subvenciones a las asociaciones de consumidores, característica que no reúnen las asociaciones de afectados y, por eso, nos oponemos a dicha enmienda.

En lo que se refiere a las enmiendas 392 y 393, nosotros manifestamos en Ponencia el criterio favorable a la admisión de dichas enmiendas, que consisten en hacer cargar sobre el Fondo de Investigaciones Sanitarias dos partidas de 150 y 400 millones, como apoyo a las investigaciones y para realizar un estudio prospectivo de la población en riesgo, pero sugeriríamos una enmienda transaccional en el sentido de eliminar el último párrafo de dicha enmienda, la 392, que dijese lo siguiente: «Con cargo a la dotación del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social se afectarán 150 millones de pesetas a la financiación de los trabajos de investigación que tengan como objeto el estudio de los aspectos clínicos y toxicológicos relacionados con el síndrome tóxico». Y aquí acabaría, suprimiendo: «Por ingestión de aceite adulterado o por ingestión de cualquier otro producto». Porque lo conocido como el síndrome tóxico está ya muy individualizado, en función de las medidas aprobadas en el Congreso y de toda la terminología que se ha elaborado en relación con este asunto, se sabe concretamente que es el aceite tóxico al que nos referimos cuando hacemos referencia a los afectados por el síndrome tóxico. En consecuencia, sugeriría la admisión de esa modificación «in

voce» que se propone, por nuestro grupo, a la enmienda número 392.

El señor VICEPRESIDENTE (Alierta Izuel): Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: No voy a entrar en el debate de los aspectos anteriores a la enmienda 391, sino que voy a centrarme en ella y en la 392. En la enmienda número 391, nos ha dicho el señor Del Valle que su grupo no es partidario de que se dicten medidas de procedimiento rápido para la concesión de subvenciones a las asociaciones de afectados por el síndrome tóxico, por entender, el Grupo Centrista, que ha de procurarse que se hagan con cargo al Ministerio de la Presidencia —entiéndase a la Secretaría de Estado para el Consumo, aunque no se diga, y al Instituto Nacional del Consumo— y que ello significa calificar estas organizaciones como asociaciones de consumidores.

Yo le rogaría al señor Del Valle que me explicara a través de qué método se han podido sentir enfermos y estar enfermos y afectados por el síndrome tóxico una serie de personas que lo han sido como consecuencia de que han consumido algo. ¿O es que, tal vez, estamos volviendo a la teoría de la transmisión respiratoria de la enfermedad y, consecuentemente, a que no hay un consumo? Son asociaciones de consumidores las que se han creado. Asociaciones de consumidores en las que concurre una condición que es la de que se asocian respecto de la aparición de una enfermedad derivada de un consumo.

Insisto, nosotros mantenemos la enmienda y tenemos la impresión de que es que no se quiere apoyar a estas asociaciones de consumidores o, eventualmente, de que se sostiene la teoría de que la enfermedad se transmite por vía respiratoria y no por la ingestión de un aceite adulterado. Teoría que me parece que es la que, en el fondo, subyace en los argumentos del señor Del Valle, ya que en la enmienda 392, cuya aceptación en principio nos parece positiva, se pretende que se elimine la expresión «de aceite adulterado» o por ingestión de cualquier otro producto». Si el síndrome tóxico se ha producido por la ingestión de aceite adulterado, dígame, porque si no volvemos a la idea de que aquí nos podemos encontrar ante un síndrome tóxico padecido por vía atípica, valga la expresión; es decir, un síndrome tóxico padecido no

por vía de ingestión de algo, sino por vía de transmisión respiratoria.

Nosotros, por tanto, aceptando la idea positiva de admitir la enmienda en lo que entraña de voluntad de realización e investigación, mantenemos el texto con el ruego a la Presidencia de votación por separado del texto que el señor Del Valle postula.

Finalmente, en cuanto al estudio prospectivo sobre el síndrome tóxico nos parece muy bien que, por el señor Del Valle y el Grupo Centrista, se reconozca la existencia de un vacío, que es la no realización del estudio, como consecuencia del cual se accede a una enmienda, que entendemos positiva y constructiva, que es la dotación de dinero para hacerlo.

El señor PRESIDENTE: A la vista de sus manifestaciones, quisiera solicitar del Grupo Centrista si mantiene su enmienda transaccional o no, puesto que el contenido de transacción no parece posible lograrse.

El señor Del Valle tiene la palabra.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Señor Presidente, lo que dice la enmienda es «por ingestión de aceite adulterado» y añade «o por ingestión de cualquier otro producto», y hasta la fecha, que sepamos, el síndrome tóxico se ha producido como consecuencia de la ingestión de aceite adulterado. Afortunadamente, la ingestión de ningún otro producto ha dado lugar al síndrome tóxico. Si se aprobase con referencia específica a «por ingestión de cualquier otro producto» podría ser interpretado fuera de nuestras fronteras en un sentido que no creo que sea el deseado por el Grupo Socialista. Esa era la intención que dominaba mi intervención. En consecuencia, solicitamos que se vote separadamente.

El señor PRESIDENTE: El señor Del Valle tiene la palabra para un segundo turno en contra.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: En primer lugar, señoría, es muy fácil construir el maniqueo y decir que unas personas han dicho una cosa para poder contestar con lo que nosotros teníamos preparado. En consecuencia, yo no he dicho que las asociaciones de afectados no participan de la naturaleza —es lo que dice el señor De Vicente— de las asociaciones de consumido-

res. Me he entrevistado con las asociaciones de afectados y no quieren ser asociaciones de consumidores; son asociaciones de defensa de los intereses de los afectados por el síndrome tóxico y no asociaciones de consumidores, y lo sabe perfectamente el señor De Vicente.

En lo que se refiere al estudio prospectivo sobre el síndrome tóxico, la aceptación de la enmienda no implica el reconocimiento de que existe un vacío y que no se está haciendo nada. Sabe el señor De Vicente que se está haciendo ese estudio prospectivo, lo que pasa es que consideramos adecuado el sistema de financiación que para ese estudio se establece en la enmienda. Es decir, el estudio se está realizando y consideramos adecuado que, para el año 82, se financie ese estudio prospectivo con 400 millones del Fondo de Investigaciones Sanitarias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación en consecuencia las enmiendas relativas a la Disposición adicional cuarta, «Mecanismos de protección en favor de los afectados por el síndrome tóxico».

Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Por nuestro grupo no habría inconveniente en que se votaran todas de una vez, hasta la 391 inclusive.

El señor PRESIDENTE: Eso iba a proponer la Mesa, señor De Vicente. Como han sido defendidas conjuntamente, se iba a proponer la votación conjunta de las enmiendas, salvo la 392 y 393, por supuesto.

Como las enmiendas que implican mayor grado de alejamiento son las del Grupo Parlamentario Socialista, vamos a someter a votación en primer lugar las enmiendas 387, 388, 389, 390 y 391. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 14 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Quedan en consecuencia rechazadas las enmiendas números 387, 388, 389, 390 y 391.

A continuación, sometemos a votación la enmienda número 109, del Grupo Parlamentario Centrista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos a favor; 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 109, que en su consecuencia integrará el contenido de la nueva Disposición adicional cuarta.

A continuación, enmienda número 392, del Grupo Parlamentario Socialista, esto es, el texto de la enmienda en su integridad. A continuación someteríamos a votación la enmienda de menor alejamiento, que es el texto con la reducción propuesta en la transaccional del Grupo Centrista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 14 votos a favor; 17 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 392.

A continuación, enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Centrista, que sería el contenido de la citada enmienda, pero suprimiendo las palabras finales, esto es «por ingestión de aceite adulterado o por ingestión de cualquier otro producto». *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de votos en esta Comisión y, en consecuencia, la citada enmienda transaccional integrará el contenido de la Disposición adicional cuarta como apartado cinco.

Por último, enmienda número 393, del Grupo Socialista del Congreso. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 393, que integrará en consecuencia el apartado 6 de la Disposición adicional cuarta del proyecto de ley.

Tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Integrará el nuevo apartado que resulte, porque se ha sustituido la Disposición adicional cuarta por la enmienda 109.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, habrá que hacer una reordenación, puesto que la enmienda 109 tiene una diferente numeración de la que contiene el proyecto de ley.

A continuación figura la solicitud de creación de nuevas Disposiciones adicionales no contempladas en el proyecto de ley. En primer lugar, la pretendía a través de la enmienda 394, del Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Granada.

El señor GRANADO BOMBIN: Si el Gobierno hubiera cumplido alguna de las promesas que ha hecho sobre enviar a estas Cortes la Ley General de Seguridad Social, no hubiera sido necesaria esta enmienda. Pero ante ese incumplimiento, nos vemos obligados a intentar introducir algún elemento racionalizador en la legislación básica española.

Por esta enmienda pretendemos que, a partir de primero de enero de 1982, todo trabajador español que haya figurado afiliado y haya cotizado durante cuarenta años en situación de alta o asimilado al alta, tenga derecho a pensión, sea cual sea la edad que tenga en el momento de cumplir y probar esos trabajos de cuarenta años.

Queremos también introducir una reforma en una gravísima anomalía que afecta a un colectivo de españoles que —voy a señalarlo concretamente— son casi, en su totalidad, de las Fuerzas Armadas.

Hoy, en España hay determinadas profesiones dentro de las Fuerzas Armadas en que se pueden jubilar a la edad de cincuenta o cincuenta y cinco años. Estos hombres se incorporan a su actividad privada, porque es perfectamente compatible la pensión que se les atribuye por el Estado, por los servicios prestados a la Administración, con el trabajo por cuenta ajena, y por tanto con la afiliación y cotización en los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

Pero estos ciudadanos españoles, cuando se jubilan en el sistema de la Seguridad Social, perciben la plenitud de pensión, aunque hayan cotizado de hecho diez, once o doce años como máximo. Nosotros, aplicando una normativa que es general en todos los países donde tienen este problema —puedo citar el caso francés o el norteamericano—, lo que proponemos es que la jubilación a que tengan derecho en el sistema de la Seguridad Social sea estrictamente la que les co-

responda por los años realmente trabajados, puesto que la pensión es compatible con la que perciben como jubilados de la Administración pública.

El fundamento básico para la segunda parte es la racionalidad y la justicia, y un sentimiento de equidad es el que inspira esta normativa que proponemos.

En cuanto a lo de los cuarenta años, creemos que hoy, el mínimo pago que les puede dar la sociedad a los que han trabajado y han cotizado a la Seguridad Social durante cuarenta años es permitir, si quieren jubilarse —porque naturalmente nosotros aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, por mí compartida desde mucho antes, de que la jubilación nunca puede ser obligatoria—, después de haber dado esta prueba de colaboración al enriquecimiento nacional y al desarrollo económico y social, es permitir, repito, que se les reconozca este derecho.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Señor Presidente, para manifestarnos en contra de la admisión de esta enmienda por muchas razones, que vamos a exponer sintéticamente. La primera de ellas, que el admitir el que se puedan jubilar con cuarenta años de prestación implicaría el rebajar, de hecho, la edad de jubilación, en muchos casos, a cincuenta y cuatro años. No creemos que ese sea el contenido de los acuerdos últimamente suscritos entre las distintas fuerzas sindicales, la patronal y el Gobierno.

En segundo lugar, por unas razones técnicas, en cuanto que desvirtúa el sistema de la Seguridad Social. Es decir, lo que se pretende aquí es establecer un sistema de compra de pensiones, cuando el sistema de la Seguridad Social ha superado este sistema y lo que se dice es que las personas que han llegado a una determinada edad, es decir, a la edad que se considera oficialmente como vejez, tengan un sistema de protección adecuado. Se calculará esa protección económica en función de las cotizaciones y también se establece que cuando no sobrepasen determinados mínimos, se eleva a dicho mínimo.

En consecuencia, nosotros entendemos que no es posible la aceptación de esta enmienda que supone, ni más ni menos, el que las personas

que hayan trabajado cuarenta años, cualquiera que sea su edad, tienen derecho a cobrar una prestación equivalente al cien por cien de su base reguladora.

El señor PRESIDENTE: No solicitándose nuevo turno, vamos a someter directamente a votación la enmienda número 394. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 394 y, por tanto, la Disposición adicional nueva que allí se pretendía.

Enmienda número 395, del Grupo Socialista, que solicita la creación de una nueva Disposición adicional.

Tiene la palabra el señor Barón para su defensa.

El señor BARON CRESPO: Voy a defender conjuntamente las enmiendas números 395 y 396.

La primera pretende que el Gobierno presente al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de ampliación de plantilla del profesorado de EGB, con un objeto básico, que es la adaptación de las plantillas orgánicas de los nuevos centros de EGB a las nuevas necesidades e, igualmente, la elevación de la calidad de la enseñanza.

La enmienda 396, también en una línea parecida, pretende algo que es muy importante, entendemos, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de la enseñanza y también de la garantía de la gratuidad, así como el que empiecen a existir criterios en un tema tan importante como es el de las subvenciones a centros no estatales de EGB, y es plantear que las subvenciones que se dan por el Presupuesto, para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza, se acomoden a criterios objetivos en relación con las necesidades de la sociedad española.

Existen unos criterios objetivos en la enmienda 396 que plantean, en primer lugar, que se otorguen las subvenciones de acuerdo con un orden de prioridades en relación con las necesidades de las zonas urbanas, aquéllas que tengan un bajo nivel de renta, aquéllas de rápido crecimiento, las zonas rurales de difícil escolarización o deficientes condiciones sociales y económicas.

Además, se plantea que debe de existir una relación entre la subvención y el precio que se fije. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, a la hora de autorizar los precios de los centros, deben tenerse presentes los módulos de coste por aula aplicados a los centros subvencionados. Igualmente, por parte de la Administración, se deben dictar las disposiciones que sean pertinentes para dotar de personal suficiente a los organismos de él dependientes, encargados de la inspección económico-administrativa de los centros subvencionados.

Por último, se establece un sistema en el que hay dos aspectos. Uno, que permita garantizar la continuidad de la enseñanza. En el caso en que haya un incumplimiento de las condiciones, que el Ministerio tenga la posibilidad de encomendar la dirección del centro para garantizar su continuidad. Luego, que, en las negociaciones de los convenios colectivos que afecten a los centros de enseñanza privada subvencionados al cien por cien, la Administración deberá estar presente para poder garantizar también los derechos de los profesores.

Por último, en el caso de que se plantee la necesidad, se dictarán por el Ministerio las disposiciones para que el personal docente reciba sus salarios, en el caso en que estén subvencionados al cien por cien, directamente del Ministerio de Educación y Ciencia.

Esta nueva Disposición adicional pretende avanzar en una cuestión que nos parece absolutamente necesaria. En primer lugar, la garantía de la gratuidad, fijando unos objetivos que permitan relacionar, como he dicho, las necesidades de la sociedad española con la política de subvención a la enseñanza o a centros no estatales de EGB. En segundo lugar, avanzar en el control de unos fondos públicos que, hasta el momento, se están dando sin ningún tipo de garantía. Entendemos que las disposiciones deben de hacerse extensivas, también, a otro tipo de transferencias a partir de los Presupuestos Generales del Estado, y deben de introducirse en esta partida tan importante.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que la enmienda 618, de contenido idéntico, ha sido igualmente defendida, señor Solchaga.

Turno en contra de la defensa de las enmiendas 395, 396 y 618. Señor Bravo de Laguna, tiene la palabra.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Respecto a la enmienda 395, mi grupo parlamentario se opone porque significa un incremento de gasto real, ya que aunque la enmienda propone formalmente un concepto que se minoraría para compensar el aumento de gasto propuesto, este concepto, esa cantidad, se encuentra comprometida en virtud de las obligaciones existentes respecto a centros que imparten gratuidad de enseñanza.

En cuanto a la enmienda 396, que es una enunciación de amplias medidas de carácter educativo, tenemos que decir que algunas de ellas, concretamente la 1, 2, 3 y 4, se encuentran en la práctica realizándose ya, puesto que siempre que los centros reúnan los requisitos legales exigibles, se concede preferencia para la concesión de subvenciones a los situados en zona de difícil escolarización; y la regularización de precios en esos centros subvencionados está contenida en una instrucción de la Subsecretaría de Educación, de fecha 29 de abril de 1980, que contiene criterios muy similares a los que se proponen en la enmienda. Creemos, por tanto, que es innecesario incorporarlo al texto del Presupuesto.

Hay otras medidas que se contienen en la enmienda cuya legalidad es bastante dudosa. Carece de base legal, por ejemplo, la propuesta en la número 5, cuando el Grupo Parlamentario Socialista habla de que el incumplimiento de las condiciones establecidas por el otorgamiento de las subvenciones podrá dar lugar a la intervención temporal del centro por la Administración. Se trata, en definitiva, de que hay una intervención de carácter temporal con problemas de difícil solución. En cualquier caso, nosotros partimos de la naturaleza privada del centro y el carácter laboral de su relación con el profesorado en cuanto a las medidas números 6 y 7.

Por estas razones, nos oponemos a las enmiendas socialistas, no estrictamente por considerar rechazables todas las cuestiones —porque, como hemos dicho, las cuatro primeras se encuentran ya efectuándose en la práctica—, sino porque nos parece que no es adecuado incorporarlas a la Ley General de Presupuestos. En cuanto a otras medidas a que nos hemos referido, 5, 6 y 7, nos parecen contradictorias con las disposiciones legales vigentes.

El señor PRESIDENTE: No solicitándose nuevo turno en defensa de las enmiendas, vamos

a someter a votación las enmiendas que han sido defendidas.

En primer lugar, enmienda número 395, que pretende la creación de una nueva Disposición adicional. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 17 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 395.

Enmiendas números 396 y 618, de contenido idéntico, que pretenden la creación de una nueva Disposición adicional. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 19 en contra.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 396 y 618.

A continuación figura la enmienda número 397, que pretende igualmente la creación de una nueva Disposición adicional.

Tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Pretendemos con esta enmienda que el Gobierno, en un plazo de seis meses, presente un proyecto de ley para la transformación de la Caja Postal de Ahorros en una sociedad anónima con titularidad estatal y participación al cien por cien del Estado.

Las razones que nos mueven son que la Caja Postal es un organismo autónomo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su participación en los recursos es ya bastante importante. Sin embargo, este organismo autónomo sigue funcionando con unos esquemas obsoletos y con una falta de competitividad con el sector privado. Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de transformar este organismo autónomo en una sociedad que responda a unos criterios de modernidad, de eficacia y de competitividad con el sector privado.

En los Presupuestos de todos los años figura, para este organismo autónomo, un importante movimiento del orden de 77.000 millones de pesetas y, sin embargo, la participación con que contribuye, debido a sus beneficios, a la dotación del estado de ingresos, es bastante insignificante para el capital y para el pasivo que mueve y, por tanto, creemos que debe modernizarse y

transformarse en una sociedad que podría mejorar sus servicios y efectuar mayor captación de recursos y obtener mayores beneficios, y, por otro lado, tendría el Estado una mayor participación en el sistema financiero.

Nosotros creemos que este proyecto de ley puede ser enviado en este plazo y, en consecuencia, pedimos que se presente y que se vote favorablemente esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Nosotros nos oponemos a esta enmienda, señor Presidente, por considerar que realmente es injustificada, al menos no parece suficientemente justificada, la razón por la que la Caja Postal de Ahorros se convierta en sociedad anónima con titularidad del Estado de la totalidad del capital.

Se trata de una transformación jurídica importante. No creemos que la Ley de Presupuestos sea el vehículo para esa transformación jurídica importante. En todo caso, la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista podría hacerse a través de una proposición de ley y, quizá, ahí podríamos estudiar la conveniencia de esa transformación jurídica; pero no aprovechar la Ley de Presupuestos para este cambio de naturaleza jurídica con importantes repercusiones en cuanto a funcionamiento, en cuanto al personal y en cuanto al sector financiero, en definitiva.

Presentar una enmienda de esta naturaleza y de esta importancia, justificándola, simplemente, diciendo que así se hace más eficaz y dinámica la Caja Postal de Ahorros, nos parece sencillamente inapropiado en una Ley de Presupuestos.

El señor PRESIDENTE: No solicitamos más intervenciones de palabra, vamos a pasar directamente a la votación.

Enmienda número 397, que pretende la creación de una nueva Disposición adicional. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 19 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 397.

A continuación podemos someter a debate conjuntamente las enmiendas 398 y 634, de con-

tenido idéntico, y que figuran en el informe como admitidas por la Ponencia.

El señor Barón tiene la palabra.

El señor BARON CRESPO: Nos parece correcta la admisión por la Ponencia, pero, simplemente, querríamos señalar que este informe de la Comisión de Evaluación del Fraude Fiscal —que recordé ayer que se había constituido en abril de este año— tenía que haber venido antes de la discusión de estos Presupuestos. Hemos conseguido, en principio, que, con seis meses de retraso, llegue el informe. Lo que no sabemos todavía, ni aclaró el señor director general de Tributos en su comparecencia ni se ha aclarado todavía a la Cámara, es por qué no ha venido en su momento, cuando incluso el director general de Tributos reconoció que el informe era muy urgente. Entendemos que hubiera sido una pieza muy importante para poder hacer una política fiscal más correcta en el Presupuesto.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a someter a votación conjuntamente las enmiendas números 398 y 634, que pretenden la creación de una Disposición adicional nueva. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad de miembros de la Comisión y, en consecuencia, el contenido de las enmiendas 398 y 634 pasará a integrar el proyecto de ley como Disposición adicional quinta.

Enmienda número 399, del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: La enmienda 399 pretende que antes del 30 de junio se presente un proyecto de ley por el que se unifiquen los diferentes patronatos de casas, que figuran en los Presupuestos como un organismo autónomo en algunos Ministerios, para su mejor dotación y funcionamiento.

Tenemos ahora mismo el avance de liquidación del Presupuesto de 1981 y vemos que figuran importantes variaciones entre las dotaciones que figuran en los Presupuestos y las realizaciones estimadas.

Cada vez que se presentan los presupuestos

de los organismos autónomos figura en los mismos una cláusula —a la que luego nos referiremos— por la cual se pasa al Gobierno una Memoria, una información referida a los proyectos, a las inversiones que pretenden realizar, en definitiva, el programa, y de la que no tenemos información; por lo tanto, no sabemos a qué obedecen estas importantes variaciones y creemos que es conveniente —se podría efectuar una racionalización del gasto y ahorro de gastos corrientes— que todos estos organismos, que figuran en todos los Ministerios, se refundieran en uno solo.

Por estas razones, pedimos que se presente un proyecto de ley en tal sentido.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el señor Martínez-Villaseñor.

El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Muy brevemente, para oponernos a la toma en consideración de la enmienda que presenta el Grupo Socialista, ya que las razones que aporta son, por su propia explicación, suposiciones. Dice que, si acaso esto fuese así, llegaríamos a unas determinadas consecuencias. Evidentemente, el que haya distintos patronatos de casas en los distintos Ministerios obedece a la naturaleza misma del tema de que hay unos patronatos creados legalmente, que funcionan para dar satisfacción a las necesidades propias del personal de cada uno de estos Ministerios y, por tanto, consideramos que, en los Presupuestos, lo que no se puede hacer es transformar esos patronatos de casas y crear algún tipo de órgano distinto.

Esta es una ley adjetiva que lo que hace es dotar a los distintos patronatos existentes y, por tanto, el planteamiento nuestro es que se mantenga tal como viene en el Presupuesto, ya que el supuesto ahorro en gastos corrientes, la supuesta mayor clarificación y todas estas cuestiones, realmente no se resuelven por el mecanismo que establece la propuesta de la enmienda.

Nosotros estamos en la eficaz realización de los presupuestos en cada uno de los patronatos existentes en los distintos Ministerios.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: No es para un segundo turno, sino para una clarificación, porque antes, en la enmienda anterior se me respondió en el mismo sentido que manifiesta ahora el señor Martínez-Villaseñor.

Nosotros no pretendemos que la Ley de Presupuestos transforme estos organismos autónomos en uno sólo; pedimos que se presente a las Cortes un proyecto de ley en tal sentido, en el que se articularía lo que nosotros pedimos en la enmienda; es decir, no es la Ley de Presupuestos quien los transforma, sino pedimos la obligación de que el Gobierno presente un proyecto de ley en tal sentido. En todo caso, creo que las razones son bastante diferentes.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno de rectificaciones, tiene la palabra el señor Martínez-Villaseñor.

El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR: Yo comprendo que el planteamiento que nos quiere hacer en Comisión el representante del Grupo Socialista es el de decir que como esto no es posible aquí —no lo ha pensado al plantear la enmienda—, nos propone que se haga un proyecto de ley que consiga, en definitiva, los propósitos que plantea en este momento.

En consecuencia, ateniéndome a las razones que he explicado antes y a lo que consideramos no razones justificativas del planteamiento que hacía, estimamos que debemos oponernos a la enmienda planteada por el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a votación.

Enmienda número 399. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 19 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 399.

Enmienda número 400, que pretende la creación de una nueva Disposición adicional.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Sabiendo la posición que va a manifestar el Grupo Centrista con respecto a esta enmienda, me limitaré únicamente a decir lo que pretende, que es, tam-

bién, la refundición en un solo organismo autónomo de los actuales y dispersos servicios de publicaciones que existen en la Administración del Estado.

Esta enmienda ya se presentó el año pasado; dimos razones de peso que volvemos a exponer ahora, como es acercar con un solo organismo a los administrados, todas las disposiciones, normas y proyectos que actualmente se publican en los diferentes servicios de publicaciones. Esto produciría también un ahorro en el coste del mantenimiento de estos servicios; ahorro en el que estamos empeñados nosotros.

Por otra parte, también quiero decir que no comprendemos las razones del Grupo Parlamentario Centrista, que se opone a una racionalización en el gasto que produciría esta reunificación de los servicios.

Únicamente pedimos que nuestra enmienda se vote favorablemente, puesto que creemos que esto es beneficioso para el país, porque produce un ahorro y una mayor racionalidad en estos servicios de publicaciones tan dispersos.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra. Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, nosotros no somos tan optimistas como el señor Padrón en el sentido de que el envío de un proyecto de ley refundido pura y simplemente en un servicio único los distintos servicios de publicaciones de los distintos Ministerios produjese esos efectos tan positivos a que él se ha referido.

Creemos que no es en la Ley de Presupuestos donde se deben abordar estas cuestiones de transformación jurídica de los distintos servicios u organismos de la Administración, y por estas razones nos hemos opuesto a las enmiendas anteriores y a ésta. En todo caso, sugerimos al Grupo Parlamentario Socialista que presente la oportuna proposición de ley con los criterios concretos de refundición que defienden en sus enmiendas a los Presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, sometimos a votación, en consecuencia, la enmienda número 400, que pretende la creación de una nueva Disposición adicional. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 14 votos a favor, 19 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 400.

La enmienda 401, del Grupo Socialista, pretende igualmente la creación de una nueva Disposición adicional. Para su defensa, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CREŞPO: Señor Presidente, lo que pedimos en esta Disposición adicional no es un proyecto de ley, sino que la Administración cumpla con su deber. Se ha creado una Comisión interministerial, que tiene como objeto la racionalización de la utilización del equipamiento informático en la Administración. Hay un error en la enmienda, que señalo de paso, y es que esta Comisión interministerial no es nueva; ya existe y lógicamente es de suponer que habrá hecho algún informe o alguna evaluación sobre cómo se está utilizando el equipamiento informático en la Administración española. Lo que tenemos que señalar —a la hora de hablar de dinero es cuando se nos escucha un poco— es que nuestra experiencia concreta en la Comisión de Presupuestos, y no hemos entrado en otros terrenos, es que la situación actual de utilización del parque y de coordinación nos parece muy insuficiente.

Pongo un ejemplo. Concretamente hemos preguntado a los responsables del Centro de Proceso de Datos, en algunas ocasiones, y a los responsables de la Intervención Genral del Estado cómo están coordinados los ordenadores de la Dirección General del Tesoro y del Centro de Proceso de Datos, y no se nos ha contestado hasta ahora si están coordinados tan siquiera.

Por otra parte, hay un problema que afecta al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, y es que, con criterios de ahorro que nos parecen discutibles, a la hora de pagar las nóminas del Estado, como sólo hay un ordenador central en la Dirección General del Tesoro en Madrid, resulta que los pagos que se hacen en provincias se tienen que enviar en sacas, lo que nos dejó absolutamente admirados a los ponentes del proyecto de Ley de la Cuenta General del Estado de 1977, porque, además, se emplean unas hojas traslúcidas que se mandan, lo cual conduce a que los funcionarios cobren concretamente las percepciones básicas a principio de mes y luego se les liquidan las complementarias a final de mes. Entendemos que no es un ahorro andar moviendo sacas por todo el país.

Nosotros realmente no les pedimos que hagan un proyecto de ley, lo que les pedimos es que nos expliquen cuántos ordenadores hay en la Administración, sería interesante saber también cuántas marcas y cuántos equipos de ordenadores hay; si se pueden enchufar unos con otros; si están coordinados; si se piensa en tratar, desde un punto de vista sistemático, la información. Y no me digan que la Ley de Presupuestos no es el lugar para hacerlo, porque en este momento estamos teniendo que votar el dinero para todos los Ministerios.

Nos parece un error que ustedes no quieran mezclar a los funcionarios y que sigan con los patronatos de viviendas en cada Ministerio, pues eso supone no abrir a los ciudadanos a lo que debe ser una sociedad democrática. Está bien que los ciudadanos se mezclen en sus lugares de vida, incluso si son funcionarios; pero en este caso ustedes nos tendrían que explicar qué es lo que pasa con la utilización del equipamiento informático de la Administración, porque es seguro que conseguiríamos ahorros importantes y, además, lograríamos posiblemente reducir el número de suministradores e incluso utilizar el grado de equipamiento de la industria nacional, que está bien representada en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra. Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, quiero decirle al señor Barón que mi Grupo Parlamentario siempre escucha con atención lo que él dice, que casi siempre suele hablar de dinero, por otra parte.

Nosotros vamos a aceptar esta enmienda, la 401. Únicamente nos parece que sería preferible, desde un punto de vista técnico, que se calificara a la Comisión interministerial a la que se refiere; esto es, no simplemente decir «la Comisión interministerial», sino indicar exactamente a qué Comisión interministerial se refiere la enmienda. Y, en definitiva, entre todos vamos a intentar que este problema de las sacas se acabe.

El señor PRESIDENTE: Señor Barón, la Mesa, si se le permite, a la vista de lo manifestado por el Grupo Centrista, sometería a votación con posterioridad la enmienda número 401. Parece que sería preferible una redacción más exacta, sobre todo por las especificidades técnicas que plantea el tema de la informática, que podrían SS. SS. elevar a la Mesa con posteriori-

dad. Ahora, continuamos con el debate de otras enmiendas, si le parece.

El señor **BARON CRESPO**: No tenemos inconveniente en que haya una redacción más precisa, pero la Comisión interministerial existe, no sé si está en la motivación de la enmienda, pero se puede buscar, no hay problema.

También quiero manifestar, aunque sea brevemente, mi asombro porque se me recrimine que hable de dinero en la Comisión de Presupuestos. Creo que aquí de lo que hay que hablar es de dinero básicamente y de cómo se administra.

El señor **PRESIDENTE**: Segundo turno. Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor **BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ**: Creo que la comisión a que se refiere la enmienda se denomina Comisión interministerial de Informática. En cualquier caso, podría aprobarse con esa denominación, pendiente de si efectivamente se corresponde con la norma vigente.

Naturalmente que en los temas presupuestarios se habla de dinero, pero es que el señor Barón hizo antes una referencia a que el Grupo Parlamentario Centrista sólo le atiende cuando habla de dinero. Le atendemos siempre, señor Barón.

El señor **PRESIDENTE**: Mientras que SS. SS. presentan el nuevo texto de la enmienda, vamos a pasar al debate.

Enmienda 402, que plantea igualmente una nueva Disposición adicional. Para su defensa, tiene la palabra el señor Torres.

El señor **TORRES BOURSAULT**: Gracias, señor Presidente. Voy a defender conjuntamente las enmiendas números 402 y 403, que cubren diferentes vertientes del mismo problema.

Nuestra enmienda 402 pretende que en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de estatuto de Derecho público regulador del régimen jurídico de las agencias que tengan por objeto la obtención y distribución de información y en cuyo capital sea mayoritaria la participación del Estado o de sus organismos autónomos.

La enmienda 403 pretende que se solicite del Tribunal de Cuentas que en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos, remita un informe de fiscalización de las cuentas y de la gestión económica de la

compañía mercantil anónima Agencia EFE, S. A., correspondiente a los tres últimos ejercicios económico-presupuestarios.

La motivación de ambas enmiendas —como digo— es similar, aunque cubriendo diferentes aspectos de lo que es una agencia distribuidora de información; y, para qué andarnos con rodeos, aquí nos estamos refiriendo en concreto a al Agencia EFE, S. A. Uno de los aspectos, el de la primera enmienda, es aquél que tiene su trascendencia en el problema informativo y de garantía de la libertad de expresión, libertad de transmisión de noticias, y libertad de distribución de información. La Agencia EFE, S. A., tiene participación pública, al 66 por ciento, de la Dirección del Patrimonio del Estado y del INI y también un accionariado privado minoritario diverso, cuyos intereses son a veces antagónicos, en materia de política de precios, por ejemplo, con los que define el objeto social; pero éste es otro problema en el que de momento parece necesario entrar. Es, pues, de participación pública mayoritaria. La intervención de la Comisión de Presupuestos en el tema de la Agencia EFE deriva de que sus déficit presupuestarios se cubren con una consignación de 1.800 millones de pesetas que carece del necesario control parlamentario, a nuestro juicio, y ésta es la segunda faceta del problema que presento a SS. SS.

Entendemos que al ser la Agencia EFE una agencia de distribución de noticias con participación pública, debe tener también, en este aspecto de la garantía de la libertad de expresión y de la objetividad en la transmisión de las noticias, un control público como ocurre con otros entes o medios de participación pública que están en la memoria de todos y que cubren aspectos informativos. Porque, de lo contrario, se corre el riesgo, señoras y señores diputados, de que no se defiendan desde aquí los intereses del Estado, de que no se defiendan, y ya sería grave, los intereses del Gobierno, sino que se defiendan estrictamente los intereses de una satrapía personal que no tendría ningún control de quienes votan y contribuyen a la financiación del medio de que se trate.

Por otro lado, en la política de inversiones de esta entidad con participación pública, en la política de personal, por debajo de cualquier media salarial en el año 1981, se ha impuesto —lo digo en el sentido fuerte de la palabra— (y sé de qué hablo, porque asesoré al Comité de Empresa en la negociación del convenio colectivo de 1981), una subida salarial del seis por ciento, prácticamente insólita en cualquier nivel de empresa pública o privada.

Por tanto, entendemos que para garantizar la transparencia presupuestaria, la transparencia de inversiones y del empleo de medios económicos públicos en la gestión de la Agencia EFE se debe aprobar la enmienda número 403. Y para garantizar la libertad de expresión y el servicio que esta entidad de participación pública debe prestar a la sociedad española, quisiera resaltar a los señores diputados que no sólo se trata aquí de garantizar la libertad de información en su proyección interna, en España, sino que también se trata de que se proyecten al exterior su sistema político y sus instituciones. Esto debe hacerse —y creo que no requiere mayor razonamiento— desde una participación del Parlamento en el control y en la garantía de esta objetividad, de esta transparencia, de esta libertad constitucional que, de otra forma, quedan sujetas a la interpretación de un presidente-director general, de un Consejo de Administración o de una Junta General de accionistas, cuyos intereses no tienen por qué ser necesariamente los que representamos en este Parlamento.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Nos oponemos a estas dos enmiendas que afectan fundamentalmente, como el señor Torres ha dicho, a la Agencia EFE. El director de la Agencia EFE estuvo en la Comisión, entre las personas que fueron citadas para informar, y el señor Torres, que estuvo presente, sabrá que, a través de una serie de preguntas formuladas por su propio grupo parlamentario, quedó clara cuál era la naturaleza jurídica, la distribución de capital de la Agencia EFE y los controles de carácter presupuestario, que son los que en definitiva nos deben preocupar más en estos momentos, los controles internos y los externos, incluso, con el envío al Tribunal de Cuentas.

Nosotros creemos —y con ello abundamos en las razones señaladas anteriormente respecto a otras enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista— que, en cuanto a la transformación jurídica de organismos de cualquier naturaleza, no es la Ley de Presupuestos el lugar idóneo para marcar y/o condicionar cuál es esa transformación jurídica.

Ya sé que el señor Padrón dice que no es que aquí se regule la transformación, pero sí se indica que se envíe un proyecto del Gobierno con tal naturaleza jurídica concreta.

Aquí se habla de que se envíe una Ley de Estatuto de Derecho Público, regulador del régimen jurídico de las agencias, que tenga por objeto, etcétera, y cuyo capital sea mayoritario en la participación del Estado en sus organismos autónomos.

Esto dicho así, pura y simplemente, no es decir mucho, porque ya en este momento, como el señor Padrón ha reconocido, la participación del Estado, a través del INI y de la Dirección General del Patrimonio del Estado, es mayoritaria en la Agencia EFE.

Por tanto, creemos que no es necesario introducir en los Presupuestos este tipo de disposiciones.

En cuanto a la enmienda 403, relativa a que se requiera al Tribunal de Cuentas para que, en el plazo de seis meses, envíe un informe de fiscalización de cuentas y de gestión económica de la Agencia EFE, nos parece innecesario incorporarlo al presupuesto. Desde luego, no hay que dar ningún rango legal a esta obligatoriedad. Basta con que las Cortes requieran al Tribunal de Cuentas, que constitucionalmente tiene una relación directa con las Cortes, para que envíe la información que considere oportuna.

Por estas razones, nosotros nos oponemos a ambas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Se ha hecho llegar a la Mesa el contenido de la enmienda número 401, ya propuesta. Su texto sería el siguiente: «La Comisión Interministerial de Informática elevará un informe al Congreso, en el plazo de tres meses, sobre el programa de adquisiciones del sector público, grado de homogeneización y de los sistemas de conexión con la red básica, redes especiales de transmisión de datos, protocolos de adaptación de terminales y atención preferente a los productos de fabricación nacional».

Si sus señorías no tienen inconveniente en la aceptación de la enmienda, vamos a someterla a votación. Es la enmienda transaccional en relación con la número 401. (Pausa.)

Efectuada la votación, quedó aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda por unanimidad de votos de la Comisión y, en consecuencia, pasará a integrar el

proyecto de ley como Disposición adicional sexta.

A continuación, sometemos a votación las enmiendas 402 y 403, que han sido defendidas conjuntamente.

El señor GASOLIBA I BOHM: Señor Presidente, pedimos que se voten por separado.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente, votaremos separadamente las enmiendas. Enmienda número 402, del Grupo Socialista del Congreso. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 14 votos a favor; 19 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 402. Enmienda 403. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 15 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 403, del Grupo Socialista del Congreso.

Figura, a continuación, la enmienda 404, que pretende igualmente la creación de una nueva Disposición adicional. Si no desean efectuar el trámite de defensa, pasamos directamente a la votación. *(Pausa.)*

Enmienda número 404, que prorroga la vigencia de la Disposición adicional octava de la Ley 74/1980 para el ejercicio.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Está admitida en Ponencia.

(El señor Bravo de Laguna pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.

El señor BRAVO DE LAGUNA Y BERMUDEZ: Señor Presidente, es simplemente para proponer que, en lugar de hablar de la prórroga de la vigencia de la Disposición adicional octava de la Ley de Presupuestos de 1981, se incorpore realmente el texto de esa Disposición adicional octava en su literalidad, en lugar de hacer una referencia a una prórroga de una norma de una

Ley de Presupuestos anteriores. Simplemente quería señalar esto. Por tanto, coincidimos totalmente con la enmienda y se trataría de una modificación de carácter técnico, ya que creo sería más ajustado copiar literalmente la Disposición adicional octava.

El señor PRESIDENTE: ¿No hay inconveniente, señor Barón, en la sustitución de su enmienda por la reproducción literal de la Disposición adicional octava de la Ley de Presupuestos de 1980?

El señor BARON CRESPO: Ninguno, señor Presidente. Además, así lo entendemos mejor.

El señor PRESIDENTE: En ese caso, vamos a pasar directamente a votación la sustitución, por vía de enmienda transaccional, de la enmienda número 404; enmienda transaccional que consistiría en la reproducción en la Ley de Presupuestos, en su caso como Disposición adicional séptima, de la Disposición adicional octava de la Ley 74/1980. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, quedó aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de votos de miembros de la Comisión y, en consecuencia, su contenido pasará a integrar, como Disposición adicional séptima, la Ley de Presupuestos.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Esta Disposición adicional octava —que efectivamente faculta a los miembros y a los grupos parlamentarios del Congreso para requerir información y auditoría al Tribunal de Cuentas y que va a figurar nuevamente en la Ley de Presupuestos para 1982— en la práctica, tal como ha figurado en la Ley de 1981, no tiene actualidad, no tiene vigencia, puesto que nosotros, tanto en el año 1980 como en el año 1981, hemos pasado escritos a la Presidencia del Congreso —votados favorablemente todos en la Comisión de Presupuestos—, por los cuales pedíamos al Tribunal de Cuentas informes y auditorías de determinados organismos públicos y de determinados organismos autónomos y, hasta la fecha, no los hemos reci-

bido. Sabemos que se ha cruzado correspondencia entre el Presidente del Tribunal de Cuentas y el Presidente del Congreso, en la cual se manifestaba la imposibilidad material del Tribunal de poder efectuar dichos informes sin producir un retraso en el trabajo normal que tiene, como es la fiscalización del gasto de las cuentas del Estado de los ejercicios que están aún por enviar a las Cortes.

Resulta, pues, que nos encontramos con que aprobamos una disposición que luego, en la práctica no sirve, debido a la situación del Tribunal de Cuentas, tanto en lo que respecta a la falta de una nueva ley orgánica como en lo que se refiere a la falta de dotación de medios materiales y humanos. Por mucho que figure en los Presupuestos y, a pesar de que diversos grupos parlamentarios tenemos la intención y el deseo de conocer la situación de estos organismos autónomos o de cualquier órgano de la Administración, nos encontramos en una incapacidad total para poder tener estos datos.

Si en los Presupuestos para 1982 no se produce un aumento en los créditos destinados al Tribunal de Cuentas, de tal forma que puedan ampliarse las dotaciones materiales y humanas, nos encontraremos con que estamos aprobando aquí disposiciones que luego, en la práctica, no sirven para nada. No sirven para nada, y por mucho deseo que tengan los socialistas de que haya transparencia y claridad en el gasto público, llevamos cuatro años batallando en este sentido; cuatro años que han sido de inutilidad y de esfuerzos vanos, puesto que nos encontramos con la cerrazón, la apatía y la pasividad del Grupo Centrista, del grupo del Gobierno, para que de una vez por todas tengamos un Tribunal de Cuentas que responda a los deseos constitucionales, en definitiva a los deseos del pueblo español de saber cómo y de qué forma se gasta el dinero público, el dinero con el que todos contribuimos a los Presupuestos del Estado.

El señor PRESIDENTE: Para la explicación de voto, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: No sé muy bien, señor Presidente, a qué ha respondido esta explicación de voto, porque realmente las enmiendas anteriores no se referían al Tribunal de Cuentas; pero desde luego mi

grupo rechaza que el Grupo Socialista tenga el monopolio del deseo de honradez, transparencia y firmeza.

El señor PRESIDENTE: El señor Barón tiene la palabra.

El señor BARON CRESPO: Si me permite, es para una cuestión de orden, en relación con las enmiendas 402 y 403, que acaban de ser votadas.

Inmediatamente después de haber sido defendidas estas enmiendas, hemos recibido, la mayor parte de todos los comisionados, una información que lleva el membrete de la Agencia EFE, S. A., en relación con unas aclaraciones que este diputado solicitó con motivo de la comparecencia del presidente de la Agencia EFE. Realmente, aquí se ven los deseos de transparencia y de información, porque en esta información que se nos da de tres folios lo único que se hace es recoger el plan general de contabilidad y no se añade en absoluto —como en su día no se explicó— ninguna de las cuentas de ingresos, resultados extraordinarios, ingresos de explotación, a lo cual se había comprometido el presidente como consecuencia de su comparecencia. Quiero señalar la protesta del Grupo Parlamentario Socialista ante esta información que, más que información, es una real tomadura de pelo a la Comisión de Presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Figura a continuación en el proyecto de ley la enmienda número 405, que pretende la creación de una nueva Disposición adicional.

El señor Barón tiene la palabra.

El señor BARON CRESPO: Sí, señor Presidente, ésta es una Disposición que se aprobó también en la Ley de Presupuestos del año pasado, como consecuencia de una enmienda nuestra. No se ha cumplido y creemos que es importante que la Ley General Presupuestaria se adapte a la Constitución; somos conscientes de que es más urgente acabar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, pero creemos que también en esta Comisión nos encontramos con bastantes dificultades— y al discutir el proyecto de Ley de Presupuestos se han visto algunas de ellas— por presupuestos se han visto algunas de ellas— por problemas que plantea una ley que tiene elementos bastante positivos, pero que también tiene

elementos que habría que cambiar de modo considerable para adaptarla a un sistema democrático.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Para una simple cuestión de orden, señor Presidente.

Sólo hasta cierto punto me parece muy bien lo que acaba de decir últimamente el señor Barón, porque si el año pasado se introdujo en la Ley de Presupuestos que tendría que remitirse a la Cámara un proyecto de ley de modificación de la Ley General Presupuestaria, fue como consecuencia de una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco.

El señor PRESIDENTE: No solicitándose turno en contra, vamos a pasar directamente a la votación de la enmienda número 405.

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 405, que pasará a integrar el contenido del proyecto de ley como Disposición adicional octava.

Para la defensa de la enmienda 406, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Como todos ustedes saben, desde hace por lo menos dos años—incluso muchos de los que aquí nos sentamos hemos participado en cuestionarios e informes a la Comisión de racionalización del gasto público— existe una Comisión que está estudiando la racionalización del gasto público, cuyos resultados son una especie de Guadiana que no conocemos, aunque tenemos noticias de que hay ya una habitación, no sé en qué Ministerio, que está tapizada con los volúmenes que se han entregado, pero no conocemos ninguna conclusión de este informe. Creemos que para conseguir realmente una mejor asignación del gasto público sería muy importante que los distinguidos profesores y catedráticos que están encargados de este informe nos enviaran las conclusiones a las Cortes para que el dinero dedicado a este informe y al trabajo de la Comisión no fuera un dinero mal gastado, y que esta Comisión no pa-

sara a formar parte del cúmulo de comisiones que han hecho un trabajo cuyos resultados no se conocen.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: A nosotros nos parece, señor Presidente, que lo que no se puede recoger en una ley de presupuestos es la consagración de una ilegalidad por parte del Estado.

Independientemente de que se hayan o no publicado esos informes, si el trabajo se ha realizado, lo que no se puede es consagrar una especie de represalia de tipo salarial, diciendo que no se pague hasta que no se reciba el informe o hasta que no se publique. Nos parece absolutamente inadecuado en una Ley de Presupuestos y en cualquier otra norma, por supuesto, que se pretenda algo semejante.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno de rectificación, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: No es la consagración de una ilegalidad. Hemos aprobado esta mañana, por ejemplo, en relación con la Seguridad Social de organismos autónomos y empresas públicas, que se adopten medidas cautelares. Lo que estamos pidiendo es una medida cautelar. No decimos que no se pague, sino que no se pague hasta que no se entregue y entendemos que las Cortes están plenamente facultadas para hacer eso.

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a someter a votación la enmienda 406, que pretende la creación de una nueva Disposición adicional que, en su caso, sería la novena. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 16 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 406.

Enmienda número 407, que solicita igualmente la creación de una nueva Disposición adicional. Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Para poder mejorar el trabajo de la Comisión de Presupuestos, nosotros hemos presentado una enmienda proponiendo que se nos instale no una terminal, que parece incorrecto en la terminología informática, sino un terminal —no sé por qué es así, pero en fin, ésa es una cuestión que la Real Academia alcarará—; que se nos instale —digo— un terminal de ordenador que esté ligado a los dos ordenadores del Ministerio de Hacienda, con lo cual podríamos mejorar y acelerar mucho la información, porque para la mayor parte de los informes que nos han sido suministrados por el Ministerio de Hacienda o que se nos debe suministrar se necesita mucho tiempo normalmente, como ocurre con la imprenta de la Fábrica de la Moneda. Concretamente el señor director general del Patrimonio del Estado nos dijo que no nos podía entregar los resultados de las empresas del Patrimonio porque la Fábrica de la Moneda no trabajaba en los debidos plazos. Creemos que la introducción de una tecnología moderna que, además, permitiría asegurar la privacidad de los ciudadanos, en la mayor parte de los casos, teniendo en cuenta que se podrían tomar medidas cautelares, ayudaría mucho a algo que necesita esta casa, como es tener funcionamiento propio del último cuarto del siglo XX.

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Nosotros creemos que una Ley de Presupuestos no es el lugar adecuado para indicar que se establezca cualquier tipo de servicios. Es como si ahora se necesitaran tres máquinas de escribir para las secretarías del Secretario Primero del Congreso y se pidiera en la Ley de Presupuestos para 1982.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, las máquinas de escribir se compran a empresas privadas y, a no ser que el señor Bravo de Laguna piense que el Ministerio de Hacienda y la Administración son propiedad privada de los diputados centristas, entendemos que todos los demás diputados tenemos derecho a ser infor-

mados de cómo funciona la Administración Pública.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación, en consecuencia, la enmienda número 407, que ha sido mantenida por el Grupo Socialista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 407.

Enmienda número 408, que pretende igualmente la creación de una nueva Disposición adicional.

El señor BARON CRESPO: Esta es la que había que retirar, porque es coincidente con la enmienda número 400, es del mismo tenor.

El señor PRESIDENTE: Queda retirada la enmienda número 408.

Enmienda número 51, del señor Alierta, que pretende igualmente la creación de una nueva Disposición adicional. *(El señor Gasoliba i Bohm pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Señor Presidente, únicamente quiero significar que Minoría Catalana tiene presentada una enmienda similar a la del señor Alierta, me parece que con el número 301; lo que pasa es que nosotros la situáramos como una Disposición transitoria.

El señor PRESIDENTE: El encaje exacto de la enmienda de S. S. en la Disposición final quinta nueva y como tal figura en el debate.

El señor GASOLIBA I BOHM: De acuerdo, señor Presidente; nosotros tenemos una igual, en el mismo sentido, como Disposición final quinta, en la página 338 del «pegote».

El señor PRESIDENTE: Es exacto, lo que ocurre es que lo que la Mesa no puede evitar es la voluntad de S. S. en la formalización de sus enmiendas. El señor Alierta pretende incluirla como Disposición adicional, en su caso, novena y S. S. como Disposición final quinta, y eso da

lugar a la distinta ubicación en el espacio, salvo que S. S. lo pretendiera transformar igualmente en Disposición adicional.

El señor GASOLIBA I BOHM: Yo señalaba a la Presidencia por si creía oportuno hacer una discusión conjunta o primero ver ésta y después volver a discutir el tema en la ubicación que tenía nuestra enmienda 301, como le parezca a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Podemos efectuar el debate conjuntamente, lo que ocurre es que el espacio de situación, según la calificación y la pretensión de la enmienda, es diferente en uno y otro caso.

El señor Alierta tiene la palabra.

El señor ALIERTA IZUEL: La enmienda presentada hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial. La distribución de este Fondo aparece en la Sección 33, pero los criterios con los cuales se ha distribuido aparecían únicamente en un pequeño número de páginas de la Memoria con la cual se presentaron los Presupuestos. En la mañana de hoy se nos ha distribuido a los diputados de esta Comisión la Memoria del proyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial que, remitido al Senado, regulará en su día los criterios con carácter definitivo.

La Ley de Presupuestos que estamos discutiendo, lo que hace es recoger provisionalmente unos criterios anticipados, que son resultado de los acuerdos autonómicos de este verano.

Yo quisiera decir que estos criterios plantean algunas cuestiones. En los propios argumentos que se deducen de la Memoria que nos han remitido hoy se dice que la finalidad de este Fondo, como en su día quedó de manifiesto al discutir la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es lograr una mayor armonía entre las partes integrantes del territorio español y estimular un desarrollo regional más equitativo y equilibrado. Por eso, la Memoria insiste en que las variables que deben recogerse deben tener, sobre todo, un marcado carácter estructural, es decir, que la utilización de criterios que reflejen situaciones coyunturales no parece que sea la más adecuada, ya que desnaturalizaría la función del Fondo de Compensación Interterritorial, pues estos problemas de tipo co-

yuntural pueden tener una resolución más adecuada a través de otros instrumentos de política económica, alguno de los cuales se recogen, en su manifestación concreta, en la Ley de Presupuestos que nos ocupa.

Pues bien, respecto a temas de estructura económica, un clásico en nuestros libros —quizá sea de los primeros temas que han conocido todos los estudiantes que se hayan enfrentado con la asignatura de Estructura Económica en la Facultad— es el progresivo desequilibrio de la población en nuestro país entre el interior y la periferia. Es una tendencia secular de la pérdida de la población en el interior y la concentración de la población en la periferia.

Algunos datos estadísticos breves de que dispongo aquí reflejan que de 1940 a 1975 las provincias periféricas —veintitrés en su totalidad— han crecido todas ellas en población, salvo una. En cambio, de las provincias del interior —veintisiete—, diecinueve de ellas han perdido población; es decir, el 70 por ciento de las provincias situadas en el interior.

La dispersión de densidades en nuestro país es extremada. En 1940, la dispersión de densidad de población habitantes/kilómetro cuadrado, en diferentes provincias, oscilaba de 16 a 253 y, en 1975, esta dispersión pasó a ser de 10 a 567, es decir, que el mínimo es cada vez más mínimo y el máximo cada vez mayor. Es una dispersión que creemos extraordinaria y muy desequilibrada.

Es para hacer frente a esta tendencia secular y a este desequilibrio inherente a nuestro país, que es muy característico —porque creo que ningún otro país de Europa reúne estas circunstancias—, para lo que se introdujo en la Comisión que discutió la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas la superficie como uno de los criterios para la distribución del Fondo; no la superficie como «el» criterio para distribución del Fondo, pero sí la superficie como uno de los criterios para distribuir una parte del Fondo, porque creemos que este criterio sencillo podría cumplir una finalidad adecuada a estas peculiares circunstancias de nuestro país.

Ahora bien, los criterios anticipados en la Memoria de los Presupuestos del Estado, más ampliamente detallados en la que se nos ha repartido hoy, aplican una ponderación del 5 por ciento, que creemos que es pequeña, sobre todo

teniendo en cuenta que, como consecuencia de las modificaciones sufridas, se ha introducido la población como un elemento de ponderación con respecto a los criterios que aparecían en su día en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esta población, por tanto, tiende a favorecer de alguna forma —y creemos que este criterio es justo, no vamos a ponerlo en entredicho— la distribución del Fondo, precisamente hacia esas regiones donde se ha ido concentrando secularmente la población.

Hay que tener en cuenta que, como decía antes, en la Ley de Presupuestos se recogen multitud de medidas que tratan de afrontar problemas coyunturales, como las asignaciones, todas ellas en miles de millones de pesetas, para la reconversión industrial; el empleo comunitario o la subvención que, con cargo a los Presupuestos del Estado, se da para el paro.

Por ello, este diputado tenía preparada una enmienda transaccional a la que tenía presentada ante la Comisión, por la cual este criterio del 5 por ciento que se atribuía a la superficie se proponía se elevara al 20 por ciento, manteniendo los otros criterios que venían defendiéndose en la Comisión, es decir, un 65 por ciento en relación a la inversa de la renta ponderada con la población, un 10 por ciento al saldo migratorio, un 5 por ciento al paro, un 20 por ciento a la superficie más el hecho insular, de la misma manera que viene recogido en la Memoria del proyecto de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial.

Ahora bien, en la propia Memoria que nos han entregado hoy se recoge que la elaboración de la sección 33 implica un cuidadoso equilibrio entre esta distribución territorial y la distribución sectorial de las inversiones del Estado. Dado que la cuantía atribuida al Fondo de Compensación Interterritorial —180.000 millones— es una parte muy importante de las inversiones totales, alteraciones en este momento, presentadas por esta Cámara, de estas distribuciones no sólo afectarían a la distribución territorial, sino también, indirectamente y en gran medida, a la distribución sectorial de las inversiones.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y las razones políticas que aconsejan una rápida tramitación de esta Ley de Presupuestos, este diputado no va a presentar la enmienda transaccional que tenía preparada, así como anuncia a

la Comisión que va a retirar aquella por la que pretendía que se creara una Disposición adicional nueva, modificando los criterios de distribución interregional. Pero sí quería —y por ello se excusa ante la Comisión— llamar la atención a los señores diputados sobre estos criterios que son importantes y que espera sean recogidos en la tramitación de la Ley de Fondo de Compensación Interterritorial a tramitar por el Senado, Cámara que esperamos que represente los intereses territoriales.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda retirada la enmienda número 51, presentada por S. S.

A continuación, figura presentada la enmienda número 54 del señor Aizpún, Grupo Mixto, que pretende la creación de una Disposición transitoria nueva.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Aizpún.

El señor AIZPUN TUERO: Muy brevemente —doy por reproducido el texto, pues creo que es conocido por todas SS. SS.— voy, más que a ampliar, a resumir la fundamentación de la enmienda en estos términos: La empresa Matesa, algunos de cuyos aspectos históricos son conocidos, ha sido subastada seis veces sin resultado positivo por falta de licitador. Recientemente, la Abogacía del Estado, siguiendo instrucciones de la Dirección General de lo Contencioso, ha transmitido al juez especial de Matesa para su oportuna tramitación, la petición de que se proceda a un nuevo ciclo de subastas de todos y cada uno de los bienes de la empresa, muebles, inmuebles y derechos que pertenecen a la misma.

Fácilmente pueden considerar SS. SS. qué clase de resultado va a dar una subasta en la que una fábrica se va a subastar por lotes. El inicio de este nuevo ciclo de subastas, con vistas a la enajenación parcial de todos sus activos, supone el inmediato cierre de la empresa, el despido de sus trabajadores, la pérdida de 255 puestos de trabajo, la imposibilidad de mantener la asistencia técnica y recambios acerca de 15.000 telares IWER funcionando en más de 50 países, con el consiguiente descrédito para la imagen comercial de España en el exterior, y la práctica eliminación de tecnología española en el mercado mundial de máquinas de tejer, aparte de la repercu-

sión que tendrá sobre las empresas suministradoras y auxiliares en estos momentos de crisis.

Como quiera que hay unos estudios de viabilidad, los cuales yo no prejuzgo en absoluto —no tengo la menor idea de si efectivamente son viables o no, si son racionales o no—, y un impedimento legal para que estos estudios puedan llevarse a la práctica o ser negociados o para que puedan arbitrarse soluciones distintas a la mera subasta, nosotros presentamos esta enmienda sobre la cual quiero hacer especial hincapié en que no prejuzgamos en modo alguno cuál deba ser la solución; no pretendemos en modo alguno apoyar que sean o no viables los planes que se presenten; no pretendemos condicionar en modo alguno la postura que se vaya a adoptar por unos o por otros; lo único que pretendemos es dejar manos libres para poder estudiar soluciones y que no se llegue al absurdo de que apareciera una solución que hiciera viable la empresa, con la que se pudieran mantener los 255 puestos de trabajo y que, por un impedimento puramente formal, esto no pudiera llevarse a cabo, aun estando de acuerdo el Gobierno, la empresa, el administrador judicial, el Comité de Empresa, etcétera.

No quiero hacer mayor extensión de la defensa de esta enmienda en este momento, pero sí señalar que en el propio informe de la Ponencia se dice que los ponentes del Grupo Centrista se oponen a su aceptación y postulan la creación de una Disposición transitoria. La realidad es que nosotros no la habíamos propuesto como Disposición adicional, sino como transitoria. Por consiguiente, creo que, en realidad, hay un acuerdo en aceptarla como está propuesta, como Disposición transitoria.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)

Existe una enmienda de idéntico contenido, presentada por Minoría Catalana (Pausa.) No desean efectuar su defensa, puesto que el contenido es el mismo. Por tanto, no solitándose turno en contra podemos pasar directamente a su votación.

Serán votadas conjuntamente las enmiendas números 54 y 191, que pretenden la autorización al Gobierno de determinadas medidas en orden a la liquidación de Matesa. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas números 54 y 191, que pasarán a integrar el contenido del proyecto de ley como Disposición transitoria.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Urralburu.

El señor URRALBURU TAINTA: Brevemente voy a explicar la abstención del Grupo Socialista en relación con las enmiendas que han presentado el diputado señor Aizpún y la Minoría Catalana.

Efectivamente compartimos el objetivo de hacer viable, en cuanto sea posible, el futuro de la empresa Matesa, pero resulta que, con la enmienda ya aprobada, tal como está redactada, se posibilita al señor Vilá Reyes para que, como persona física que posee mayoritariamente la personalidad jurídica de Matesa, se haga cargo de nuevo de la sociedad y que toda la deuda que tiene adquirida —razón por la cual está en Administración Judicial— venga a impagarse por una medida del Gobierno, convirtiéndose otra vez en propietario de Matesa y así, olvidando que esa empresa ha defraudado al Estado no menos de 10.000 millones de pesetas, comenzar de nuevo, sabiendo que eso significa no ya la salida para los trabajadores —que la hay al margen de esa posible solución—, sino un premio del Estado a quien ha cometido ese fraude tan grande.

Se me puede contestar que la enmienda no prejuzga que el poseedor de la sociedad, a partir de esa autorización que se le da al Gobierno, siga siendo el señor Vilá Reyes. Yo tengo datos, conozco la voluntad de las partes que están actuando en el tema y tengo el presentimiento de que la empresa Matesa va a volver a las mismas manos, y eso significará que, por una autorización dada por el Congreso al Gobierno, aquéllos que defraudaron al Estado más de 10.000 millones de pesetas se vuelven a hacer cargo de una sociedad sin que hayan devuelto al Estado esos miles de millones.

A nuestro entender, esa enmienda sólo sería admisible en el caso de que se condicionara la autorización a que, en todo caso, los antiguos propietarios de la sociedad Matesa no pudieran hacerse cargo, en el futuro, de la sociedad, pero

tal como está redactada, es imposible que eso pueda admitirse por nosotros, puesto que no se condiciona la autorización al Gobierno, y tenemos datos suficientes para afirmar que el Gobierno puede trabajar por ese camino de devolver la sociedad a quien, por sentencia judicial, se le había retirado.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Aizpún.

El señor AIZPUN TUERO: El señor Urralburu ha puesto la venda antes que la herida; es decir, piensa que le vamos a contestar que esto no prejuzga. Efectivamente, esto no prejuzga en absoluto; la enmienda no prejuzga y será el Gobierno el que negocie las condiciones en que esto pueda ser liquidado. A lo mejor resulta que tiene que liquidarse subastando por lotes; esa será la solución si es la más racional.

Al señor Urralburu y a su grupo les preocupa extraordinariamente que la sociedad pueda o no volver a manos de los antiguos propietarios y, por lo visto, tiene datos para afirmar que eso es posible. Yo no los tengo y, por supuesto, el Comité de Empresa de Matesa tampoco, porque es quien me ha pedido que defienda esta enmienda. Por consiguiente, para mí, aun en el supuesto —que no admito, pero que simplemente, a efectos dialécticos, expongo— de que se planteara dejar a 255 personas en la calle, dependiendo de quién fuera el patrono de la empresa, invitaría a esas 255 familias de Matesa a que se reunieran para decir si querrían manter viva la empresa o si lo fundamental era quién fuera el patronato.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Como saben SS. SS., nosotros teníamos una enmienda de idéntico contenido que se ha votado conjuntamente. Nada más querría precisar que esta enmienda que hemos presentado se ha vinculado, a través del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, a instancias del Comité de Empresa de Matesa que, como saben ustedes, tiene una planta importante en Barcelona.

El señor PRESIDENTE: Las disposiciones finales de la ley, primera y segunda, no tienen presentada enmienda alguna, por lo que pueden

ser sometidas a votación conjuntamente. (*Un señor diputado: Separadamente.*) Bien.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; ninguno en contra; 11 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición final primera.

Si les parece, vamos a someter a votación la Disposición final segunda.

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición final segunda por unanimidad de votos de la Comisión.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Simplemente explicar que nos hemos abstenido en la votación de la Disposición final primera que aprueba los presupuestos de los consorcios para la inspección y gestión de las contribuciones territoriales, porque tenemos una enmienda en la sección quince del presupuesto pidiendo un aumento de la dotación de esos consorcios.

El señor PRESIDENTE: A la Disposición final tercera de la ley figuran presentadas las siguientes enmiendas —entenderé que, en tanto en cuanto no se manifieste expresamente, se desea simplemente pasar a votación—: enmienda número 409, enmienda número 410, enmienda número 411 y enmienda número 418, todas ellas del Grupo Socialista del Congreso, que someteremos a votación, en consecuencia, sin debate; enmienda número 728, del Grupo Comunista; enmienda número 57, del Grupo Centrista; enmienda número 729, del Grupo Comunista; enmienda 730, del Grupo Comunista; enmienda número 727, del mismo grupo, y enmienda 731, del mismo Grupo Comunista.

(*El señor Barón pide la palabra.*)

El señor Barón tiene la palabra.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, se pide la defensa de la enmienda 412 por el señor Granada.

Disposición
final
tercera

El señor PRESIDENTE: La enmienda 412 se refiere al anexo primero, no a la Disposición final tercera.

Por el Grupo Centrista, tiene la palabra el señor García-Margallo.

El señor GARCIA-MARGALLO MARFIL: Para una cuestión de orden. Recordar a la Mesa que, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el articulado sobre normas tributarias, se hace necesaria una Disposición adicional cuyo texto proporcionaré a la Mesa en el curso de la sesión de esta tarde para acomodar la normativa del Impuesto de Sociedades a los tipos derivados de la introducción y aprobación de las enmiendas ayer discutidas.

El señor PRESIDENTE: La Mesa entiende que S. S. hace reserva de la introducción de una nueva Disposición adicional como consecuencia del triunfo en el día de ayer de las nuevas tarifas y deducciones en el Impuesto General sobre la Renta.

El señor GARCIA-MARGALLO MARFIL: Disposición adicional que es absolutamente necesaria desde un punto de vista técnico para mantener la coherencia.

El señor PRESIDENTE: La Mesa agradecería que el texto fuese presentado a la misma con la mayor rapidez.

Había solicitado también la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Es en relación con la Disposición final tercera, que es la que estamos ahora examinando, y recordar que, con arreglo al informe de la Ponencia, existe un criterio expresado mayoritariamente en la Ponencia por el Grupo Centrista, de supresión de esta Disposición final y, en consecuencia, pediríamos que se sometiese a votación en primer lugar la Disposición final, porque en ese caso solamente se aprobaría la enmienda que presenta el Grupo Centrista bajo la condición de que subsistiese la Disposición final tercera.

El señor PRESIDENTE: En ese caso, la petición de S. S. es que sea sometida en primer lugar a votación la propuesta del Grupo Centrista de supresión de la enmienda en su totalidad y, a

continuación, la enmienda número 57 como sustitutiva. Bien.

Siendo, en consecuencia, la posición más alejada de todas la que pretende la supresión íntegra de la Disposición final tercera, será la primera que someteremos a votación. Por tanto, pretensión de supresión de la Disposición final tercera.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; en contra, 11; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda eliminada del contenido del proyecto de ley la Disposición final tercera y entiendo que, con arreglo a la petición del Grupo Centrista, procede someter a votación a continuación la enmienda número 57 sustitutiva de su contenido.

Tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Nosotros lo que planteamos en el informe de la Ponencia era que, si se suprimía la Disposición, que era nuestra petición principal, no someteríamos a votación lo siguiente; pero se condicionaba a la existencia de una Disposición que tuviese el contenido de la misma la sustitución del texto del proyecto por el texto de la enmienda 59. Luego, que se vote, si acaso, condicionadamente a que puedan aprobarse otras enmiendas sustitutivas. No sé el procedimiento reglamentario para el caso, señor Presidente.

Yo creo —en una cuestión de orden— que existe el precedente de que una vez votada la más alejada del proyecto, no es necesario proceder a votación de las demás si ha triunfado.

El señor PRESIDENTE: Exacto. Por eso la Mesa ha sometido en primer lugar la pretensión de exclusión. En consecuencia, en el proyecto de ley figurarán únicamente como Disposiciones finales las que figuran en el proyecto como primera y segunda, no así la tercera, que ha sido eliminada.

Figura una pretensión de adición de una nueva Disposición adicional que se denominaría quinta.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Bono.

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito): Para una cuestión de orden. Si la Comisión su-

prime esta Disposición final tercera, las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista y por el Grupo Comunista, ¿se entiende que ya no se pueden mantener?

El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, yo creo que como voto particular sí pueden ser mantenidas.

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito): Perfectamente.

El señor PRESIDENTE: Figura la petición de inclusión de una nueva Disposición adicional, que sería en este caso la tercera, que es la formulada por Minoría Catalana a través de la enmienda número 301.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Aquí volvemos a incidir en el tema, antes expuesto por el diputado señor Alierta, sobre los criterios de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial.

Nosotros ya mostramos nuestra oposición a los factores que incidían en la composición de la fórmula que ha de llevar a la distribución del Fondo, cuando se discutió la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Posteriormente, la plasmación de este Fondo, según se explica en la misma Memoria presentada por el Ministerio de Hacienda, se hace conforme con unos acuerdos entre grupos parlamentarios, pero que no se han plasmado ni han pasado a través del control de las Cámaras, y además se hace al mismo tiempo a través del anuncio hecho por el Consejo de Ministros y que creo que se ha plasmado hoy mismo en el envío de un proyecto de ley que precisamente establecería los criterios de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. Por tanto, de alguna manera aquí, en la sección treinta y tres, tal como se presenta en los Presupuestos Generales del Estado, se están prejuzgando unos criterios que han de ser discutidos por estas Cortes.

En consecuencia, nosotros proponemos en esta Disposición final quinta que el criterio es mantener los fondos previstos de 180.000 millones de pesetas destinados al Fondo de Compensación Interterritorial; pero en razón de los argumentos expuestos que no se realizase tal dis-

tribución hasta que no se haya decidido la Ley del Fondo de Compensación y, por tanto, estas Cortes tengan conocimiento del mismo y puedan debatirlo.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: En efecto, esta discusión sobre el Fondo de Compensación Interterritorial es una de las más complejas y más delicadas de este Presupuesto. Cuando nos opusimos a la enmienda de totalidad, a diversas enmiendas de totalidad, sobre la distribución del Fondo explicamos la filosofía que inspiraba este Fondo de Compensación Interterritorial que, en todo caso, tiene un carácter tentativo, aproximativo, porque efectivamente falta por aprobar la Ley Orgánica de Desarrollo de Financiación de Comunidades Autónomas.

En este sentido, los criterios utilizados para la distribución de los 180.000 millones de pesetas del Fondo de Compensación Interterritorial respondían a los criterios aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera siguiendo la comisión de expertos designada al respecto. En definitiva, recogían los criterios de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, los criterios que hay que utilizar para el Fondo, si bien con unos porcentajes que pueden ser más o menos discutibles; el inverso de la renta, al 70 por ciento; el índice de paro, la distribución, el 5 por ciento; la tasa de migración, el 20 por ciento, y la extensión superficial, el 5 por ciento.

Estos criterios, como digo, podrán ser objeto de modificación en la ley de desarrollo de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, ya presentada en el senado, pero, en cualquier caso, nos parece que es necesario y conveniente que en 1982 exista este fondo, que se distribuya de la manera propuesta porque, en definitiva, ello contribuirá a la agilización de las inversiones públicas y, en todo caso, si se modifican los criterios, que éstos entren en vigor para el Fondo de Compensación Interterritorial del año 1983.

El señor PRESIDENTE: Segundo turno de rectificación. Tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Señor Presidente, señorías, yo creo precisamente que esta

distribución es innecesaria e inconveniente por dos razones, que son las que siguen.

En primer lugar, los criterios de distribución son muy discutibles, porque, por ejemplo, en un tema tan prioritario como es el paro y su incidencia en determinadas áreas españolas, lo que ocurre es que se le ofrece un índice de ponderación del 5 por ciento o, como ha explicado el señor Alierta, se hace la inversa del cuadrado de la renta, con lo cual, evidentemente, los criterios de ponderación son más que discutibles y sobre todo, si entramos en este tema, es más discutible aún la no homogeneización de los períodos estadísticos con los cuales se evalúan las diversas estadísticas.

Nosotros sabemos que aquí hay unos pactos, los llamados pactos autonómicos, y que esto se ha de presentar de alguna manera y se nos ha de colar de esta forma un tanto inaudita, sobre todo porque, repito, la distribución de este Fondo se hace sin que haya pasado la discusión y su explicación a través de un proyecto de ley, por otra parte presentado. Por tanto, no entiendo estos argumentos, a no ser que sean los argumentos que podríamos llamar reales, que son los de los pactos autonómicos firmados entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Gobierno. Pero esto, evidentemente, lo único que hace es conculcar la soberanía de esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Segundo turno de rectificación. Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, nosotros no hemos negado que este Fondo de Compensación responda, en su plasmación en los Presupuestos, a unos pactos anteriores, lo cual no significa privar de soberanía a esta Cámara, que puede aprobar o rechazar dicho tema.

En cualquier caso, los datos que se han utilizado para el Fondo de Compensación Interterritorial son los últimos de que dispone la Administración. Sabe perfectamente el señor Gasoliba que, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, los datos que se utilizan normalmente son de una antigüedad que oscila según a qué se refieran, pero pueden estar entre los tres y los cuatro años. El dato más antiguo que se ha utilizado, porque era el último de que se disponía, es el de la renta «per capita» de carácter regional,

que es del año 1977; pero, por ejemplo, en índices de paro se han utilizado para el Fondo de Compensación Interterritorial índices del primer semestre de este propio año 1981. De manera que los datos son los más actuales de que se pueda disponer por la comisión de expertos y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuyos criterios podrán, como dije anteriormente, ser más o menos discutibles; pero, evidentemente, responden a unas consideraciones de carácter objetivo.

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a la votación de la enmienda número 301, de Minoría Catalana. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: dos votos a favor; 29 en contra; tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 301.

Quisiera anticipar que la Comisión va a concluir ahora, inmediatamente después de votar la Disposición adicional anticipada por UCD, que será la última votación en la mañana de hoy.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Muy brevemente, señor Presidente.

Simplemente decir que nos hemos abstenido. Estamos de acuerdo en el fondo de lo que plantea Minoría Catalana, pero estamos en contra de que se admiten los 180.000 millones como cantidad global.

Quiero preguntarle al diputado ponente de UCD si nos puede suministrar los datos con los cuales se ha elaborado la distribución del Fondo. Es decir, nosotros hemos pedido a través de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística si se nos pueden suministrar esos datos; no ya los criterios, sino los datos sobre los cuales se ha elaborado el Fondo de Compensación Interterritorial, para que lo conozca la Comisión y podamos saber cómo se han aplicado los criterios que nos dijo el portavoz centrista.

El señor PRESIDENTE: Señor Arredonda, efectivamente se ha distribuido, no sé si está en poder de S. S., la Memoria sobre el Fondo de

distribución, que está aquí a disposición de todos los integrantes de la Comisión. Ha sido remitida por el Gobierno y en el día de hoy se ha distribuido; S. S. tiene una, si no ha dispuesto de ella con anterioridad.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Brevísimas explicación para decir que nos hemos abstenido porque, aunque compartimos parte de las preocupaciones de la Minoría Catalana sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, y ya en su día dijimos que, a nuestro juicio, lo que se instrumenta en esta Ley de Presupuestos no es un Fondo de Compensación Interterritorial, como dice la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, sino otra cosa, sin embargo, entendemos que la solución que ellos proponen es una solución que, en definitiva, vendría a paralizar la inversión de 180.000 millones de pesetas.

Entendemos, francamente, que por esa razón, aunque comprendemos algunas de las razones que ellos han apuntado, y probablemente también las veamos desde criterios opuestos, pero, en cualquier caso, no estamos de acuerdo con la solución concreta que se propone. Por eso, para manifestar al mismo tiempo que no estamos de acuerdo con el Fondo de Compensación Interterritorial, nos hemos abstenido en esta votación.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a someter a votación los dos últimos puntos que quedan pendientes, antes de pasar a los anexos de la ley.

Disposición
adicional
cuarta

La Disposición adicional cuarta no tiene enmienda alguna; puede ser sometida a votación directamente. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición adicional cuarta, que pasará a denominarse Disposición adicional tercera.

Por último, hay una nueva propuesta de Disposición adicional, la señalada con anterioridad por el señor García-Margallo, a cuyo texto voy a dar lectura, por si no es conocido. Dice así: «Como consecuencia de la elevación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fís-

icas, se autoriza al Gobierno para modificar la retención en la fuente prevista en el artículo 32 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, y al amparo de lo dispuesto en el número 2 de la Disposición adicional segunda de dicha ley».

¿Podemos someterla directamente a votación o desean consumir un turno en defensa de la misma? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor García-Margallo.

El señor GARCIA-MARGALLO MARFIL: Señor Presidente, simplemente aclarar a la Comisión, en el tiempo más breve posible, que cuando se modifican los tipos impositivos de un impuesto, necesariamente hay que acomodar las tablas de retención. Y es así que en el Impuesto de Sociedades, la retención para el pago de determinados conceptos figura expresada en la propia ley, es necesario que en normas del mismo rango se autorice al Gobierno para modificar exclusivamente el tipo de retención, para mantener la congruencia y coherencia del sistema.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la propuesta de dicha Disposición adicional, que pasaría a ser la Disposición adicional cuarta. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la Disposición adicional cuarta, por virtud de la enmienda transaccional que ha sido presentada y dada lectura a sus señorías.

Se suspende la sesión, que comenzará a las cuatro y media de la tarde. Agradecería la mayor puntualidad.

Eran las dos y diez minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro horas cuarenta minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señores diputados, vamos a reanudar la sesión que, habiendo quedado en la mañana de hoy en la conclusión de las enmiendas finales y adicionales, debe comenzar por el anexo I, relativo a transferencias de crédito del Presupuesto del Estado a orga-

Anexo I

nismos autónomos y a los presupuestos de la Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

Al anexo I figura presentada, en primer lugar, la enmienda número 95, del Grupo Socialista, que no se desea defender, y la enmienda número 181, de Minoría Catalana. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Señor Presidente, señorías, en nuestra enmienda número 181 se defiende la introducción de un texto que ya estaba en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año, y que hace referencia a facilitar, tanto en los entes autonómicos como en los entes preautonómicos, la posibilidad de cubrir aquellas vacantes que hubiese en las transferencias de crédito con funcionarios propios o con personal contratado al efecto, lo que, evidentemente, va en la línea de facilitar los procesos de transferencias de competencias que se acuerden.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) No hay turno en contra.

Enmienda número 412, de Socialistas del Congreso. Para su defensa, tiene la palabra el señor Granada.

El señor GRANADO BOMBIN: Brevísimamente. Nosotros proponemos que se eliminen de la expresión correspondiente a las tres líneas finales, «de otras dotaciones de gastos consecutivos no ampliables o de inversiones...», las palabras «o de inversiones». Por una sencilla razón. Así como entendemos que el Gobierno y los entes gestores de la Seguridad Social deben gozar de libertad para disponer de los créditos no consumidos de las partidas que comprenden obligaciones de créditos no ampliables, entendemos que las inversiones que, al menos, arto pequeñas son (y no entro ahora en el problema de quién debe financiar las inversiones de la Seguridad Social, que hasta la Unión de Centro Democrático, eminentes hombre de la Unión del Centro Democrático, sostienen con toda justicia que debe ser el Presupuesto del Estado, pero de lado este problema), pero consignadas en el Presupuesto una serie de cantidades mínimas para inversiones, entendemos que jamás deben ser tocadas; deben ejecutarse, al menos en esa cuantía, y que ni el Gobierno ni los órganos gestores de la Seguridad Social pueden disponer de ellas para gastos corrientes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Enmienda número 413, del Grupo Socialista. ¿Desean que sea sometida directamente a votación? (Pausa.) Enmiendas números 414 y 415, del mismo grupo. Para su defensa, tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Que se sometan a votación.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Enmienda número 882, del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Elorriaga, que puede consumir un turno simultáneamente en cuanto a las enmiendas números 883, 884, 885 y 886, si lo desea.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Si me permite digerir las enmiendas, trataré de hacerlo de acuerdo con lo manifestado por el señor Presidente.

Enmienda número 882. De acuerdo con lo que dice el texto, que, si me permiten una leve referencia al mismo, dice: «Las que resulten proceder en favor de las Comunidades Autónomas y entes preautonómicos de los créditos correspondientes a las funciones y servicios del Estado y organismos autónomos que legalmente hayan sido transferidos a los mismos o se vayan transfiriendo en el futuro»; nuestra opinión al respecto es la siguiente: efectivamente, creemos que en relación con el caso de los entes preautonómicos, los Presupuestos Generales del Estado deberán seguir siendo los que doten a dichos entes de los medios suficientes para ejercer aquellas competencias que les hayan sido transferidas. No así en el caso de las Comunidades Autónomas, porque creemos que una vez que han sido transferidas competencias a las Comunidades Autónomas, hay unos mecanismos previstos en la Ley de Financiación que no prevén precisamente que los Presupuestos Generales del Estado transfieran medios; mejor dicho, no es que no permitan que los Presupuestos Generales del Estado prevean una transferencia de medios, sino que lo que no se prevé es que esas transferencias de medios tengan relación con competencias transferidas.

Esta manifestación que acabo de realizar se basa en el capítulo II, artículo 4.1 de la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, que dice que de conformidad con el apartado 1, ar-

título 157 de la Constitución y, sin perjuicio de lo establecido en el resto del articulado, los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por los siguientes: los ingresos procedentes de su patrimonio y demás derechos privados; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado (este es el instrumento básico); los recargos que puedan establecerse sobre los impuestos del Estado; las participaciones en ingresos del Estado; el producto de las operaciones de crédito y el producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.

Señorías, en ningún caso de los previstos en la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas aparece que tendrán que recibir estas Comunidades Autónomas transferencias de créditos correspondientes a funciones. Serán otras las fuentes de financiación previstas en los Presupuestos Generales del Estado, pero nunca correspondientes a funciones que hayan sido ya transferidas. De ahí nuestra enmienda, sobre la que en estos momentos pretendemos introducir una enmienda «in voce», porque creemos que no estaba correctamente planteada, enmienda «in voce» que diría lo siguiente: «Los que resulten procedentes en favor de entes preautonómicos de los créditos correspondientes a las funciones y servicios del Estado y organismos autónomos que legalmente hayan sido transferidos a los mismos o se vayan transfiriendo en el futuro, así como los que resulten procedentes en favor de las Comunidades Autónomas de los créditos correspondientes a las funciones y servicios que se vayan transfiriendo en el futuro».

Si S. S. me permite, señor Presidente, hago entrega en este momento de esta enmienda «in voce» que introduce una modificación en la enmienda presentada por nosotros con el número 882 al texto del proyecto.

En cuanto a la enmienda número 883, nuestro grupo parlamentario solicita la supresión del apartado número cinco de este mismo anexo I, primero, apartado A); y dentro de este apartado A), el punto cinco, que dice: «Las que sean necesarias entre los créditos de inversiones de cada Departamento ministerial y la sección 33, “Fondo de Compensación Interterritorial” y viceversa, para cumplir los objetivos y finalidades de dicho Fondo».

Señorías, creo que el planteamiento de este

punto cinco supone una auténtica tergiversación del Fondo de Compensación Interterritorial. Si en los Presupuestos Generales del Estado —en su momento se discutirá la procedencia o no del planteamiento que se ha realizado— tiene como objetivo la aprobación del Fondo de Compensación, esa aprobación lo que hace es establecer un nivel. Hablaremos más adelante de cuáles tienen que ser las características y las razones por las cuales se tiene que distribuir o no en este momento dicho Fondo, pero se establece una cuantía. ¿Qué supone el punto cinco? Pues supone que si esto se aprueba, el Fondo de Compensación Interterritorial resulta que no van a ser 180.000 millones de pesetas; pueden ser 180.000 o pueden ser 300.000, porque evidentemente se está autorizando la transferencia desde previsiones realizadas en los Presupuestos correspondientes a los distintos Departamentos ministeriales al Fondo de Compensación Interterritorial, y creemos que ese no es el objetivo del Fondo de Compensación Interterritorial.

Creemos que ese no es el objetivo del Fondo de Compensación Interterritorial. Los distintos Departamentos ministeriales tienen unas competencias que ejecutar, unas responsabilidades que cumplir, unas previsiones presupuestarias a las que tienen que hacer frente, y el Fondo de Compensación Interterritorial tiene otros objetivos. Esta Cámara —entendemos nosotros— tiene como misión fundamental establecer el límite de ese Fondo de Compensación Interterritorial, cuál es su distribución y nada más.

Sí entenderíamos la segunda parte del punto cinco cuando se dice «y viceversa», es decir, la posibilidad de que desde el Fondo de Compensación Interterritorial partidas que ahí están previstas pudiesen revertir a los distintos Departamentos ministeriales. Y digo que sí entenderíamos, porque pudiese darse el caso de que determinadas Comunidades Autónomas o entes territoriales de otro orden, preautonómicos, comunidades provinciales, etcétera, no estuviesen en condiciones, por falta de estructura adecuada, de poder utilizar los fondos que les corresponden desde el Fondo de Compensación Interterritorial. Entonces sí entenderíamos que sería, efectivamente, no conveniente el que esas partidas presupuestarias que pretenden como objetivo el del Fondo de Compensación Interterritorial no se utilizasen y entonces, insisto, sí comprenderíamos que esas partidas se transfiriese-

sen a los Departamentos ministeriales, para que los Departamentos ministeriales correspondientes asumiesen los planes de ejecución que pudiesen enmarcarse dentro de las partidas presupuestarias que, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiesen a las Comunidades Autónomas. Pero en ningún caso creemos que el planteamiento del punto cinco es de recibo, porque creemos que es una adulteración muy profunda de los objetivos y, sobre todo, del planteamiento y determinación del Fondo de Compensación Interterritorial.

De momento, señorías, si me permite el señor Presidente, me limito a la defensa de estas dos enmiendas. Creo que hay otra enmienda, que es la número 884, que fue aceptada en la Ponencia, por tanto, no voy a proceder a ningún tipo de planteamiento en relación con esta enmienda.

En relación, concretamente, con la enmienda 885 y brevísimamente, nuestro objetivo es algo que ya hemos planteado anteriormente a lo largo de la discusión del texto del articulado. Lo que se plantea en nuestra enmienda es la supresión, en el apartado que dice: en los Presupuestos de la Seguridad Social, punto dos, eliminando el último inciso donde se dice «o de inversiones del Presupuesto-resumen de la Seguridad Social».

¿Qué pretendemos con esto? Lo que pretendemos es evitar que el nivel de inversiones presupuestado pueda reducirse vía transferencias que incrementen el gasto corriente. Creo que este es un planteamiento que se ha hecho por algún otro grupo —no sé si el Grupo Parlamentario del Partido Socialista ha hecho una enmienda del mismo tenor—, por lo que no tendríamos ningún inconveniente en asumir su planteamiento en lo que se refiere a este punto concreto.

Creemos, efectivamente, como ya se ha dicho, y no insisto más, que el nivel de inversiones es harto precario —nos da la impresión— para que además, por el procedimiento que aquí se prevé con destino a gastos consuntivos, se pueda utilizar o detraer fondos previstos, al menos inicialmente, a inversiones.

Por último, señor Presidente, creo que hay otra enmienda, la 886, pero que también fue aceptada en Ponencia. Con esto concluyo la defensa de las enmiendas a las que hacía referencia su señoría.

El señor PRESIDENTE: Señor Elorriaga, le agradecería hiciera llegar a la Mesa el texto de la

enmienda transaccional propuesta en relación con la enmienda 882.

¿Turno en contra? (*Pausa.*)

Por el Grupo Centrista, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Señor Presidente, brevísimamente, para manifestar nuestra posición favorable a las enmiendas número 95, del Grupo Centrista; 181, del Grupo de Minoría Catalana; 141, del Grupo Socialista del Congreso; 884, del Grupo Parlamentario Vasco, y a la 886, del mismo grupo parlamentario.

En lo que se refiere a las enmiendas que han sido objeto de defensa, en cuanto a la enmienda 412, del Grupo Parlamentario Socialista, que coincide con la enmienda 886, del Grupo Parlamentario Vasco, tengo que señalar que es necesario evitar el endeudamiento de la Seguridad Social para el funcionamiento de sus servicios y que la intención inicial es aplicar, en primer lugar, aquellos gastos previstos para inversiones que no hayan sido aplicados y, si fuera necesario, acudir a los gastos de inversiones, porque entendemos que lo vital dentro del funcionamiento de la Seguridad Social es el mantenimiento de dicho funcionamiento en términos normales.

En lo que se refiere a la enmienda 882, entendemos, sobre todo tras la corrección que hemos oído por parte del Grupo Parlamentario Vasco, que viene más sintéticamente recogido el espíritu dentro del texto del proyecto, en cuanto que se refiere a Comunidades autonómicas y entes preautonómicos y permite la posibilidad de realizar transferencias, ya se trate de servicios que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas en el futuro o que ya se hayan transferido, y resulta absolutamente imprescindible comprender este caso fundamentalmente, como ya ha dicho el representante del Grupo Vasco en cuanto a los entes preautonómicos.

En lo que se refiere a la enmienda que afecta al Fondo de Compensación Interterritorial, lo que hay que precisar es que en el anexo I se señala que la razón fundamental de autorizar estas transferencias entre los Departamentos ministeriales, las secciones del Presupuesto del Estado y el Fondo de Compensación Interterritorial, son el cumplimiento de los objetivos y finalidades del Fondo. Lo que se dice es que en función de estos objetivos y finalidades del Fondo se po-

drán hacer mutuas transferencias con el objeto de asegurar su cumplimiento.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno de rectificación, tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Señor Presidente, el señor portavoz de UCD en este momento ha reconocido que el planteamiento que hacemos nosotros en relación con los entes preautonómicos es el correcto; es decir, que en relación con los entes preautonómicos, los Presupuestos Generales del Estado tienen que consignar partidas presupuestarias que permitan la financiación de competencias asumidas por dichos entes preautonómicos; competencias asumidas, porque han sido transferidas ya antes de la aprobación de estos Presupuestos, o bien porque vayan a serlo a lo largo del ejercicio del año 1982.

Una cosa son los entes preautonómicos y otra las Comunidades Autónomas. En relación con las Comunidades Autónomas tengo que decir que, lamentablemente, creo que el representante de UCD no ha dado ningún tipo de argumento que permita fundamentar la tesis del Gobierno en virtud de la cual tienen que recogerse en los Presupuestos Generales del Estado provisiones presupuestarias para financiar competencias ya transferidas. Nosotros lo que decimos es que competencias ya transferidas en el caso de las Comunidades Autónomas, tienen unos mecanismos de financiación muy concretos, que son el procedimiento de cesión de tributos y todos los que se prevén en el artículo 4.º de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Señorías, las leyes se hacen para cumplirlas y creo que si alguien tiene que cumplirlas o hacerlas respetar es precisamente esta Cámara y me da la impresión de que las leyes a través de este procedimiento que estamos utilizando las hacemos pero, luego, nosotros mismos, desgraciadamente, vamos a ser los primeros que vamos a dar ejemplo de no cumplimiento de las mismas.

Antes he leído lo que dice el artículo 4.º en cuanto a financiación de competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, y me gustaría que me demostrasen —si estoy equivocado retiraría la enmienda— que en alguna parte de esa Ley Orgánica de Financiación de Comunidades

Autónomas se dice que en los Presupuestos Generales del Estado tendrán que seguir recogiendo dotaciones presupuestarias para financiar competencias ya transferidas, que es al punto al que nos estamos refiriendo. Qué duda cabe que en aquellas competencias que vayan a ser transferidas en el futuro, las dotaciones presupuestarias previstas en el proyecto de Presupuestos tendrán que transferirse, evidentemente, también a la Comunidad Autónoma. En esto estamos totalmente de acuerdo. Pero en lo que son competencias ya transferidas, es tanto como decir que las Comunidades Autónomas van a tener que estar en función, única y exclusivamente, de la dotación presupuestaria; en una palabra, van a estar maniatadas y de hecho la autonomía no va a existir, cuando el proceso de autonomía financiera para las Comunidades Autónomas está perfectamente previsto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Por último —insisto y no deseo repetir más para no hacerme excesivamente reiterativo—, en ningún caso se prevé el que funciones ya transferidas tengan que ser contempladas en los Presupuestos Generales del Estado con dotación presupuestaria. Esto en cuanto a la enmienda 882.

Yo le diría al ponente de UCD que si no hay argumentos, que no me los dé, pero que no trate de convencerme con argumentos que no ha lugar al caso.

En cuanto a la enmienda 883, creo que tampoco ha habido una respuesta sobre el tema. En la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas se dice en el artículo 16 (que creo que conviene recordarlo, porque me parece que se nos ha olvidado a todos, sobre todo si no pensamos seguir la letra y el espíritu de la ley, evidentemente, no merece la pena recordar lo que se ha dictado y legislado en esta Cámara) claramente: «El Fondo de Compensación Interterritorial se dotará anualmente con una cantidad no inferior al 30 por ciento de la inversión pública que para cada ejercicio haya sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado». Entonces, señorías, en este párrafo segundo del punto 1 del artículo 16 se establece claramente que hay un nivel de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, y un aspecto concreto que es el del Fondo de Compensación Interterritorial es el que esta Cámara tiene que determinar su cuantía y eso es de lo que se trata. Si

aquí aprobamos una cuantía determinada —la distribución en su día tendría que haberse hecho anteriormente—, pero en el supuesto de que ahora se determine esa cuantía, lo más que puede variarse es su distribución territorial, pero, en ningún caso, esa cuantía, porque esa cuantía está prefijada por la aprobación que realice esta Cámara.

Por lo tanto, no ha lugar —creemos— ateniéndonos a los que dice la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, a lo que se establece en el punto 5, que en nuestra opinión va en contra de lo establecido en la LOFCA.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno de rectificación, tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Señor Presidente, en cuanto a la enmienda número 882, quiero señalar que no se trata de atacar la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, sino todo lo contrario. Dada la fecha de elaboración de los Presupuestos, puede haber una serie de servicios que entre la elaboración y la aprobación de los Presupuestos han sido transferidos a la Comunidad Autónoma; que no tengan Comunidades Autónomas todavía aprobada una ley de cesión de tributos a las mismas, y que es necesario prever un sistema de financiación de dichos servicios hasta que tengan aprobada la cesión de tributos correspondientes. Luego todo lo contrario a lo que dice el señor Elorriaga.

En lo que se refiere a la enmienda del Fondo de Compensación, hay que señalar: primero, que se ha puesto en vigor un Fondo de Compensación anticipadamente, y, segundo, que lo que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas es un mínimo de financiación del 30 por ciento. Respetando dicho mínimo, y como consecuencia de las mutuas transferencias de las secciones al Fondo de Compensación y del Fondo de Compensación a las distintas secciones, se puede respetar el contenido de la ley y se puede conseguir lo que con el Fondo se persigue; es decir, cumplir los objetivos, que es lo fundamental dentro del Fondo de Compensación Interterritorial.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Valle.

Con ello queda concluido el debate de las enmiendas respecto del anexo I, Transferencias de crédito del Estado a distintos organismos. Vamos a comenzar las votaciones.

En primer lugar procede la votación de la enmienda número 95, del Grupo Centrista, al apartado 1, párrafo primero. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos a favor; 12 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 95, que integrará y sustituirá, en consecuencia, el texto del apartado 1, párrafo primero, del anexo I de la Ley de Presupuestos.

Enmienda número 181, de la Minoría Catalana, que propone la adición de un nuevo párrafo en el anexo I, letra b), apartado 1. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; 10 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 181, cuyo contenido añadirá el anexo I, letra b), apartado 1, del articulado.

Enmienda número 412, del Grupo Socialista del Congreso, al apartado 2 del anexo I. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 17 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 412.

Enmienda número 413, de supresión del apartado 1, letra a), cinco, Transferencias de crédito. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 18 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 413.

Enmienda número 414, del Grupo Socialista, de adición en el apartado 1 de una nueva letra c). *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 30 votos a favor; ninguno en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 414. En consecuencia, el contenido de la enmienda 414 se adicionará a la letra c) del apartado 1 del anexo 1.

Enmienda número 415, del Grupo Socialista, de adición de un apartado 3 a los presupuestos de la Seguridad Social. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 17 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda número 415.

Tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Señor Presidente, es que esta enmienda 415 tiene sentido si subsistiera la Disposición final tercera, que prevé una serie de transferencias de los presupuestos del AISNA a los presupuestos de la Seguridad Social, pero yo creo que no subsistiendo, por lo menos con arreglo al dictamen de la Comisión ya aprobado, tiene muy poco sentido la enmienda 415.

El señor PRESIDENTE: En cualquier caso está votada, y el voto de los grupos viene determinado por su posición frente a las enmiendas.

Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Yo creo que tiene sentido, al menos desde el virtual ejercicio del derecho que comparta el anunciado voto particular a presentar al Pleno. Pero también, dentro de la interpretación que el Grupo Centrista prevé para la solución de los problemas del INAS y del AISNA, no es menos cierto que, se produzca o no, digamos, la transferencia a las Comunidades Autónomas y a los entes preautonómicos y, consecuentemente, éstos procedan a integrar en una república propia, para entenderlo de alguna manera, el patrimonio sanitario que les sea dicho (para que el señor Del Valle lo entienda, vamos, lo digo en pocas palabras), esto requiere mantener claramente que no se puede computar a los Presupuestos del Estado como transferencia a la Seguridad Social lo que

lógicamente es el resultado de una operación específica y no va incluido en la partida de 350.000 millones de pesetas del presupuesto, porque se desvirtuaría el calendario del Gobierno y, en última instancia, lo aprobado en el ANE.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Vicente.

Enmienda número 882 en la redacción de la enmienda transaccional presentada por el señor Elorriaga. ¿Sus señorías la conocen o hace falta que sea leída? *(Varios señores diputados: Que se sea leída.: Bien, la leemos.*

«Las que resulten procedentes en favor de los entes preautonómicos de los créditos correspondientes a las funciones y servicios del Estado y organismos autónomos que legalmente hayan sido transferidos a los mismos o que se vayan transfiriendo en el futuro, así como las que resulten procedentes en favor de las Comunidades Autónomas de los créditos correspondientes a las funciones y servicios que se vayan transfiriendo en el futuro.»

Entiendo que es una enmienda al anexo I, apartado 1, punto 2. Procedemos a la votación de la enmienda a la que se ha dado lectura. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 17 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechaza la enmienda transaccional respecto de la 882.

Enmienda número 883, del Grupo Vasco, al artículo 2.º, anexo I, apartado 1, solicitando la supresión de la letra a), número 5. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: un voto a favor; 18 en contra; 11 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 883.

Enmienda número 884, del Grupo Vasco, de sustitución, al artículo 2.º, anexo I, apartado 1. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; ninguno en contra; 10 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 884, que integrará, en consecuencia, el contenido del presupuesto de la Seguridad Social, anexo 1.

Enmienda número 885, del Grupo Vasco, a este mismo anexo, presupuestos de la Seguridad Social, apartado 2. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: tres votos a favor; 28 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 885.

Tiene la palabra el señor Elorriaga.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Señor Presidente, simplemente es para una cuestión no sé si de orden o de desorden. Quiero manifestar que me ha sorprendido enormemente...

El señor PRESIDENTE: Entonces es para explicación de voto. Le ruego que espere a que acabemos las votaciones.

Enmienda número 886, que pretende la supresión del epígrafe del artículo 2.º, anexo I, presupuestos de las Comunidades Autónomas. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión y, en consecuencia, su contenido implica la desaparición del epígrafe de referencia.

Vamos a votar, a continuación, el texto del anexo I en su integridad, salvo la enmienda número 886 y, por lo tanto, la parte de dicho anexo que aparece suprimida, y las adiciones y sustituciones, como consecuencia de las enmiendas aceptadas por la Comisión, números 95, 181 y 414. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos a favor; 10 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Anexo I, transferencias de créditos.

Para explicación de voto, el señor Elorriaga tiene la palabra.

El señor ELORRIAGA ZARANDONA: Para manifestar mi extrañeza por la votación del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda 885, que pretendía exactamente lo mismo que una enmienda de dicho grupo parlamentario a este mismo anexo, que creo que es la número 412.

No sé si es por un planteamiento atávico en la negativa de apoyo a nuestro grupo parlamentario, pero, en fin, queremos hacerles ver que la enmienda es de idéntico contenido y alcance.

El señor PRESIDENTE: Al anexo II figuran presentadas las siguientes enmiendas: número 56, del señor Cisneros, respecto de la cual la Ponencia manifiesta su criterio favorable; número 416, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Desea efectuar su defensa? (*Pausa.*) El señor De Vicente tiene la palabra.

Anexo II

El señor DE VICENTE MARTIN: Se propone en el número 7, Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, la creación de un nuevo apartado con la denominación correspondiente, declarando crédito ampliable el relativo al de las dotaciones para hacer frente a lo que indebidamente en el texto mecanografiado se llama «sistema especial de la Seguridad Social de los minusválidos», que no es tal cosa, sino «sistema de prestaciones económicas y sociales de los minusválidos no incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social», en los términos aprobados por esta Cámara y sin perjuicio del texto que resulte en el Senado y de su ulterior y segundo paso por esta Cámara.

Se trata de que cuando el texto de la ley se apruebe en este tema, que con independencia de matices supone un avance, exista una dotación presupuestaria. Existe ya una enmienda nuestra a la sección 19, proponiendo la dotación de una transferencia a tal fin, y aquí lo que se hace es declarar este crédito ampliable, de acuerdo con el contenido funcional del anexo II, con objeto de que, llegado el momento, se pueda tirar con cargo a ese crédito y ampliar el mismo si necesario fuere.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Comunista tiene presentadas al anexo II las enmiendas números 732, 733, 734, 735 y 736. ¿Desea efectuar su defensa? (*Pausa.*) Tiene la palabra el señor Bono.

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito): Sí, señor Presidente, muy brevemente, para explicar que la enmienda 732 lo que pretende es añadir una nueva letra, después de la b), en el número 1, que diga: «Las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad de los Funcionarios». Con esto, lo que pretendemos es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Ley de Presupuestos de 1981.

La enmienda 733 viene derivada de la número 715, en la que dada la votación de la misma, al haber sido rechazada, se considera ya como votada.

La enmienda número 734 también pretende añadir al anexo II, créditos ampliables, un apartado, al final, que diga: «Los créditos destinados a cumplir las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley de Jubilación del Profesorado de EGB». Esta ley, como SS. SS. saben, es un proyecto que tendrá que contemplar y aprobar esta Cámara. Es una ley urgente desde muchas perspectivas; desde la perspectiva social y profesional de los que pueden y deben ser jubilados antes de los setenta años, que es la fecha actual, por la labor realizada, muy encomiable a muchos niveles, y porque además la propia Administración del Estado, en previsión de la necesidad de rejuvenecer un poco, por decirlo así, la enseñanza en este país, últimamente ha convocado una serie de oposiciones de turno libre, en expectativa de ocupar plaza, contando, además de éstas, con el acceso directo de aquellos alumnos que han obtenido buenas notas o unas notas determinadas y que pasan directamente a ser maestros, que en este momento representan un número no inferior a 4.000, lo que constituye un problema para estos jóvenes bastante acuciante y serio, ya que si este proyecto de ley de jubilación a los sesenta y nueve o quizá menos se llevara a la práctica rápidamente, podría dar cabida a esos 4.000 alumnos que ya son profesores de EGB en expectativa de trabajo.

Este para mí es el problema más acuciante desde el punto de vista social y político, y desde luego todas las Delegaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, de casi todas las provincias, están acuciadas por la presión de estos profesores que han aprobado su oposición, que están en expectativa de trabajo y que en el momento actual no lo tienen.

La enmienda número 735, al igual que la nú-

mero 736, también va en la misma dirección que las anteriores, proponiendo añadir un nuevo párrafo que diga: «Los créditos destinados a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del desarrollo normativo de la Ley General de Cultura Física y del Deporte».

La enmienda 736 lleva la misma dirección, porque propone añadir un párrafo que diga: «Los créditos destinados a satisfacer la integración de las enseñanzas artísticas en el sistema de educación general, tal como se prevé en la Ley General de Educación». En definitiva, es facilitar la puesta en práctica de estas leyes ya vigentes y abrir la posibilidad de ese crédito para que estas leyes puedan tener una plasmación concreta.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de las enmiendas defendidas? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Del Valle.

El señor DEL VALLE PEREZ: Voy a contestar exclusivamente a la enmienda 416 y al resto lo hará mi compañero el señor Bravo de Laguna.

En cuanto a la enmienda 416, agradezco la rectificación del señor De Vicente, porque era muy raro incluir un sistema especial de Seguridad Social que no estaba creado. Por otra parte, a pesar de la rectificación, lo que se hace es de futurible en esta ley, y lo normal es que donde se aprueben las leyes se fije su fecha de entrada en vigor, y cuando esa entrada en vigor se produce con anterioridad a la entrada en vigor de unos presupuestos, prevén sus propios mecanismos de financiación. Por tanto, nos remitimos a los mecanismos de financiación y a la norma que se contenga en la actual proposición de ley sobre minusválidos, en cuanto a la entrada en vigor de la misma y, en definitiva, a sus mecanismos de financiación. Es por eso por lo que rechazamos la enmienda 416.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna para la contestación de las restantes enmiendas.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: De las enmiendas 732 a 736 del Grupo Parlamentario Comunista.

Nos oponemos a la enmienda 732 porque se trata de considerar crédito ampliable a las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de una

ley que todavía no ha entrado en vigor. Por tanto, difícilmente tendrá la consideración de ampliable ningún crédito que no figura previamente consignado.

Nos oponemos a la enmienda 733 por las razones que expuso mi grupo parlamentario al rechazar una enmienda al artículo 19 de la ley.

La enmienda 734 es además innecesaria, no creemos que sea precisa, puesto que el régimen de pensiones de los funcionarios es ampliable, en virtud de lo dispuesto en el anexo II, norma segunda, punto 2, del mismo proyecto de ley.

La número 735 habla también de considerar ampliables los créditos destinados a dar cumplimiento al desarrollo normativo de la Ley General de Cultura Física y del Deporte. Creemos que en ese desarrollo normativo tendrán en cuenta las consignaciones presupuestarias necesarias, sin tener que considerar ahora mismo ampliable un crédito que no aparece consignado.

Por último, en la enmienda 736 también son de aplicación los argumentos anteriores y, por tanto, nos oponemos a considerar ampliables los créditos que aparecen en esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a las votaciones de las enmiendas, comenzando, en primer lugar, por la enmienda número 56, de don Gabriel Cisneros, que solicita la adición de una letra h) nueva en el número 1, epígrafe primero del anexo II del proyecto de Ley de Presupuestos. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 29 votos a favor; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 56, determinando, en consecuencia, la adición de una nueva letra h) en el epígrafe de referencia.

Enmienda número 416, del Grupo Socialista del Congreso, que pretende la creación de un nuevo apartado con la letra d), en el crédito 19.04.447. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 416.

Enmienda número 732, al apartado 1, número 1, letra b). *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 18 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 732.

Enmienda número 733 al apartado 1, número 1, letra b). *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 18 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 733.

Enmienda número 734, que propone la creación de un apartado nuevo en el apartado 1, número 1, del anexo II. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 18 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 734.

Enmienda número 735, que propone una adición en este mismo apartado 1, número 1, anexo II. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 12 votos a favor; 18 en contra.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 735.

Por último, enmienda número 736, que pretende igualmente una adición en el apartado 1, número 1, de dicho anexo. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 736.

Vamos a someter a votación a continuación el anexo II, créditos ampliables, en su integridad, puesto que no ha existido ninguna sustitución del mismo, y al que habrá de incorporarse, en su caso, el contenido de la enmienda número 56, creando una nueva letra h). *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; 11 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el anexo II.

Anexo III El anexo III relativo a operaciones de créditos autorizadas a los organismos autónomos, tiene presentada únicamente una enmienda, la número 681, del Grupo Socialista.

El señor PADRON DELGADO: Que se someta a votación, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Renunciándose al trámite de su defensa, se somete a votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 18 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 681, al anexo III.

Pasamos a votar el texto del anexo III de la ley. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 20 votos a favor; 11 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el anexo III de la Ley de Presupuestos.

Anexo IV El anexo IV es el relativo a las obligaciones del Instituto Nacional de Industria asumidas por el Estado. *(Pausa.)*

Señores diputados, el anexo IV es una simple especificación o desarrollo del contenido de la Disposición adicional segunda, en donde se establece la concreción de las obligaciones del Instituto Nacional de Industria asumidas por el Estado con señalamiento de su duración, período de amortización e interés. Por tanto, no procede someter a votación el anexo IV, puesto que es una simple continuación de un artículo ya aprobado por esta Comisión.

Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, hay una enmienda que, salvo que en algún momento al salir de la sala haya sido debatida no encuentro relacionada, puedo estar equivocado, en el índice de enmiendas presentadas, que es la 417, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se pretendía la creación de una nueva Disposición final. Puedo estar equivocado, señor Presidente, pero, por si acaso, más vale resolverlo ahora. *(Pausa.)*

Señor Presidente, si me lo permite, parece que

se empieza a descubrir el origen del equívoco que, no obstante, creo es el momento de subsanar. Y es que la enmienda número 417, en el encabezamiento dice: «La siguiente enmienda a la sección 22, Ministerio de Economía y Comercio». Bien es cierto que el contenido del texto de la enmienda no ofrece duda y está claro que se refiere a la inclusión de una nueva Disposición final, con la numeración de tercera bis; y bien es cierto que no es su naturaleza y contenido admisible en orden a la inclusión en el debate de la Sección 22, si es que está incluida en él, que supongo que sí, aunque parece que hay signos de que no.

El señor PRESIDENTE: Descuide, señor De Vicente, que en protección de sus derechos estamos buscando su enmienda en un pajar de enmiendas. *(Pausa.)* Lo que ocurre es que en la sección 22 tampoco aparece relacionada. *(Pausa.)*

Señor De Vicente, si le parece, como existen todavía pendientes de votación del texto del artículo diferentes enmiendas respecto de las cuales aún esta Mesa no ha tenido conocimiento del acuerdo de los grupos parlamentarios, como son la 332, 334, etcétera, se puede buscar con mayor lentitud, y en el caso de que la votación se produzca a destiempo no impedirá que su incorporación se haga en el lugar sistemático que corresponda.

Vamos entonces a comenzar con el examen de las enmiendas a las distintas secciones de la Ley de Presupuestos.

En primer lugar, figura la enmienda número 445 del Grupo Parlamentario Socialista, que implica una enmienda a todas las secciones, en cuanto que traslada del capítulo 02, compra de bienes corrientes y servicios, artículo 25, atenciones de carácter social y representativo, al capítulo 01.121.3, complementos, dedicación absoluta.

Tiene la palabra el señor Solchaga.

El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, nos preguntamos si este es el momento de discutir las enmiendas aparcadas en relación con el articulado de la ley, o se va a hacer más tarde y pasamos ya directamente a las enmiendas de las secciones.

El señor PRESIDENTE: Estamos en el trámite de debate de enmiendas a las secciones. La

Mesa dijo que en tanto en cuanto existiera —acaba de decirlo hace un momento— acuerdo o desacuerdo de los grupos, en el momento mismo se introducirían a efectos de debate y votación. Quedan pendientes cuatro o cinco temas que están relacionados y en su momento serán objeto de debate y votación.

Para la defensa de la enmienda número 445, que es a todas las secciones de la Ley de Presupuestos, al capítulo 02, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Vamos a intentar, por lo menos en las enmiendas más importantes, detenernos un poco antes de someterlas a votación.

Esta enmienda 445 pretende que unos gastos que figuran en el capítulo 02 de todos los servicios como atenciones de carácter social y representativo de altos cargos y que globalmente suponen un montante de bastante consideración, pasen al capítulo 01, esto es, gastos de personal.

Pedimos esto porque sabemos que estos gastos de carácter social y representativo son cantidades de libre disposición de los Ministros y de los altos cargos de la Administración, que retiran sin tener que justificar. Por tanto, esto debe considerarse como gastos de retribuciones. No nos oponemos a que figure aquí si se considera que necesitan estos gastos, pero que pasen al capítulo 01 y que figuren en nómina para que así puedan tributar en el Impuesto sobre la Renta.

Por estas razones, porque creemos que hay que poner claridad y transparencia en el Presupuesto, nos oponemos a que estos gastos figuren en el capítulo 02, esto es, de compra de bienes y servicios, puesto que son claramente gastos de personal, son retribuciones para los Ministros y altos cargos.

Pedimos que todas estas partidas figuren en el capítulo 01, partida 121.3, con un apartado que diga «complemento de dedicación absoluta».

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, nos oponemos a esta enmienda por considerar que justamente los criterios de claridad y transparencia se consiguen manteniendo el concepto y en el capítulo 02 tal y como figura en los Presupuestos.

Se trata de que haya uniformidad en cuanto a los gastos de carácter social y representativo de altos cargos, que aparecen así expresamente consignados en los Presupuestos y, por tanto, con todos los requisitos de claridad y transparencia que conlleva esa precisa determinación. Al mismo tiempo nos oponemos porque el que pasaran al capítulo 01 en concepto de dedicación exclusiva, o cualquier otra consideración retributiva, llevaría aparejado el que esas cantidades se recibieran por esos altos cargos en concepto de sueldo personal, con lo cual, si tienen gastos de carácter social o representativo, tendrían que acudir a otras partidas del presupuesto y creemos que se produciría un efecto contrario al pretendido por la enmienda.

Por estas razones nos oponemos a esta enmienda, y creemos que se cumplen exactamente los criterios de claridad y transparencia con el mantenimiento del concepto en el capítulo 02, tal como figura en las distintas secciones del presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno de rectificación, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: La no aprobación de esta enmienda supone, para nosotros, un claro caso de fraude fiscal.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno de rectificación, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Para nosotros no supone un claro caso de fraude fiscal.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a los señores ponentes por la claridad conceptual de su exposición.

Vamos a someter a votación, señores diputados, la enmienda número 445 que, caso de triunfar, llevaría implícita, naturalmente, una corrección en el capítulo 02 de todas las secciones en favor del capítulo 01. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 445.

Antes de pasar al examen de las enmiendas que figuran a continuación, quisiera señalar al señor De Vicente que la Mesa ha encontrado la enmienda perdida y hallada en esta Cámara. Figura relacionada con el número 418 y es un error en el «pegote» y, como tal, hay una nota de corrección de errores que se ha entregado a casi todas SS. SS., probablemente no a usted; y no ha sido votada esta mañana toda vez que el triunfo de la enmienda presentada por el Grupo Centrista en relación a la desaparición de la Disposición final tercera ha conllevado la no necesidad de votación de las enmiendas que figuran a partir de la 409 y siguientes. En consecuencia, caso de desear mantenerla S. S., es la que figura con el número 418, equivocadamente, a la Disposición final tercera, y en realidad es 417, un puro error material, y en el «pegote» figura en la página 329.

El señor De Vicente tiene la palabra.

El señor DE VICENTE MARTIN: El tema, señor Presidente, no tiene nada que ver con el que dio lugar esta mañana a la desaparición de la Disposición final tercera, de ahí que nosotros proponíamos como una final tercera bis. Pero el tema de esta mañana se refería a dos organismos autónomos, al INAS y al AISNA, por tanto a aspectos sanitarios, y esto se refiere a la defensa de los consumidores; es decir, el triunfo de la enmienda centrista, de momento, no significa en absoluto que haya quedado cuestionado este tema, como S. S. podrá percibir por la mera lectura del texto que se ha enmendado y por la mera lectura del texto que pretendo defender.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor De Vicente, tiene razón. En consecuencia, puede defender la enmienda que someteremos a votación y caso de triunfar pasaría a integrarse como Disposición adicional quinta.

El señor DE VICENTE MARTIN: Muy suscitadamente, para no perder el ritmo de entrada en las secciones, decir que el texto que se propone no es otro que el de dar un mandato al Gobierno para que en el plazo de dos meses a partir de la aprobación de esta Ley de Presupuestos se dicten por el Gobierno las disposiciones reglamentarias necesarias para atribuir al único Ministerio las diversas competencias sobre consumo, hoy dispersas en los Ministerios de Economía y Comercio y Presidencia.

La fundamentación es muy clara. Por una parte hay una Secretaría de Estado en el Ministerio de la Presidencia, Secretaría de Estado para el Consumo; hay un Instituto del Consumo, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía y Comercio, y hay una Dirección General de Disciplina del Mercado. A su vez, el secretario de Estado para el Consumo tiene un director adjunto, con lo cual son tres los organismos o dependencias, dicho sea en sentido convencional, que teóricamente elaboran en la materia, y cuatro los altos cargos responsables del tema dispersos en dos Ministerios, lo cual nos parece mucho dada la escasez de recursos que al tema se dedican y, sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias singulares, que ya tendremos ocasión de tocar en la sección 11, de que a la Secretaría de Estado para el Consumo se le atribuyen nada menos que 527 millones de pesetas entre los capítulos 1 y 2, es decir, gastos de personal y gastos de funcionamiento de los servicios, y como única tarea en el presupuesto, ya que en el presupuesto por programas no figura nada, en el presupuesto numérico, por decirlo de alguna manera, está la de transferir 266 millones de pesetas a Corporaciones locales y a asociaciones de consumidores. Dicho en otras palabras, que para transferir 266 millones gastan 527 millones, por lo que la peseta resulta un tanto cara. Es esta una razón que abona, nosotros entendemos, la integración en un único organismo de tan dispersa competencia y, sobre todo, de tan caras actuaciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)

El señor Bravo de Laguna tiene la palabra.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: No es realmente un turno en contra, señor presidente. Nosotros vamos a manifestar nuestro criterio favorable a la enmienda número 417, si bien ya la integración es un único Departamento ministerial aparecía en el Real Decreto 1808/1981, de creación de la Secretaría de Estado para el Consumo y cuando llegue la sección 11 y las partidas relativas a la Secretaría de Estado para el Consumo debatiremos lo que el señor De Vicente ha anticipado.

El señor DE VICENTE MARTIN: Iría precedido de una pregunta, es la de que si como vamos a votar el tema, ¿se anuncia, por tanto, un

voto favorable al contenido de la enmienda? (*Asentimiento.*)

Muchas gracias al Grupo Centrista, pero para que quede bien fundamentada la coincidencia de posiciones, que no se confunda consumo con alimentación, que no es lo mismo.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Hay una cuestión que se plantea mi grupo al aceptar esta enmienda que es de carácter técnico, porque cuando habla de diversas competencias sobre consumo, hoy dispersas en los Ministerios de Economía y Comercio y de la Presidencia, podría ocurrir que hubiera algún otro Ministerio que tuviera alguna competencia en materia de consumo que no esté citado en la propia Disposición. Por eso quizá sería preferible atribuir a un único Ministerio las diversas competencias que tengan distintos Departamentos ministeriales. Quizá fuera una fórmula más amplia de integrar en un sólo Ministerio competencias que quizá no estén sólo en Economía y Comercio y Presidencia.

El señor PRESIDENTE: ¿Acepta la rectificación propuesta el señor De Vicente por vía de enmienda transaccional?

El señor DE VICENTE MARTIN: No, señor Presidente, hay una cuestión conceptual, que no voy a entretener a SS. SS. con ella, pero que me mantiene firme en los principios

El señor PRESIDENTE: En ese caso la sometemos a votación y figuraría como Disposición final quinta.

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 417, que pasará a integrar el contenido del proyecto de ley como Disposición fiscal quinta.

Sección 01 Continuamos y retornamos a las secciones. A la 01 figuran presentadas, por el Grupo Parlamentario Comunista, las enmiendas números 827 y 828.

El señor Pérez Royo tiene la palabra.

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, ahí hay un error. La sección 01, como sabe S. S., es la Casa del Rey, que mi grupo no tiene intención de enmendar, lo que pasa que es un error y esa enmienda se refiere a Seguridad Social, y es el servicio 01 de Seguridad Social.

Hay bastantes enmiendas a otras secciones, a la 02, 03, que lo especificamos además en la Ponencia; pero en este caso, además, por ser la sección 01, tenemos interés en aclarar el equívoco.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se ha comprobado. La enmienda corresponde al presupuesto-resumen de la Seguridad Social y allí será debatida.

A la sección 02, Cortes Generales, figura presentada la enmienda número 435, de Socialistas de Cataluña. Para su defensa tiene la palabra el señor Parras.

Sección 02

El señor PARRAS COLLADO: Esta enmienda hace referencia a las Cortes Generales, en pretensión es muy sencilla, es simplemente intentar que haya un grado de especificación en detalle en la misma, que es la tónica que aparece en otras secciones.

En las mismas motivaciones que damos, ya sabemos que las Cortes Generales no están sujetas o sometidas a presupuestos del Gobierno, tienen su propia autonomía para acordar sus propios presupuestos, pero sería muy interesante que diésemos ejemplo y que fuésemos un poco espejo general de la tónica en especificación y detalles en Presupuestos, etcétera.

Por esta razón pedimos que se vote favorablemente la enmienda.

El señor PRESIDENTE: En la Ponencia figura el criterio favorable de los portavoces centristas a su aceptación.

Vamos a someter a votación la enmienda número 435, de Socialistas de Cataluña, en relación con la sección 02, Cortes Generales. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 435 y, en consecuencia, su contenido integrará el de la sección 02.

A la sección 03, Tribunal de Cuentas, figura Sección 03

presentada la enmienda número 419, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Sí, señor Presidente, ya nos encontramos otra vez debatiendo los presupuestos del Tribunal de Cuentas. Nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad, que tendremos ocasión de debatir en el Pleno, pero ésta se refiere a una enmienda parcial y lo único que pretende es adecuar a la realidad el actual presupuesto del Tribunal de Cuentas, a todas luces insuficiente; pero hay un error y es que debido a que ha habido un fallecimiento hay una cantidad que figura para uno de los altos cargos; por lo que habría que detraer la partida destinada a Intosai, que como ustedes saben no significa nada y no sirve para nada, y dedicarla a un programa de formación de los funcionarios del Tribunal de Cuentas.

Es una enmienda bastante lógica. Lo único que pretende es que estos 4.800.000 pesetas se destinen a mejorar la formación y la capacidad técnica de los miembros del Tribunal. Por lo tanto, esperemos que esta enmienda, que obedece además a recoger una partida que no se va a gastar, puesto que, como digo, corresponde a una baja producida en los altos cargos del Tribunal de Cuentas, y que nos da la impresión, por lo visto, de que el Gobierno o el partido del Gobierno pretende esperar a que se mueran todos los altos cargos para poder aprobar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, pues que en base a esto se apruebe esta enmienda, que significa mejoramiento de los profesionales del Tribunal de Cuentas.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)

El señor Bravo de Laguna tiene la palabra.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Preferimos consumir un turno en contra de todas las enmiendas a esta sección, señor Presidente, a las que nos opongamos.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Comunista a la sección 03, Tribunal de Cuentas, tiene presentadas las enmiendas números 737, 738, 739, 740 y 741. Para su defensa, tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Teníamos presentadas además las enmiendas números 742, 743 y 744, que por un error nuestro en la presentación han sido consideradas como no admitidas a trámite. Aunque dentro del conjunto de enmiendas referentes al Tribunal de Cuentas se establece la debida compensación entre enmiendas que suponen aumento de gastos con aquellas enmiendas que suponen disminución de gastos, de manera que al final la suma no solamente es cero, sino que la suma es ampliamente negativa, es decir, que las propuestas de disminución exceden con bastante a las propuestas de aumento, sin embargo por no haberse relacionado expresamente entre sí estos aumentos con estas disminuciones hay algunas que han sido consideradas como no admitidas a trámite. Por ello yo plantearía ahora a la Presidencia la posibilidad de admitir unas enmiendas «in voce», es decir, en el sentido de indicar ahora expresamente las compensaciones que no hicimos en el escrito, para, si la Presidencia lo tuviera a bien, considerarlas admitidas.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor Pérez Royo, la enmienda número 737 supone la supresión de 1.165.000 pesetas, y la 738 de 20 millones de pesetas.

El señor PEREZ ROYO: Exactamente, mientras que las de incremento suponen entre todas cinco millones.

El señor PRESIDENTE: Su señoría puede efectuar la defensa también de las enmiendas 742, 743 y 744, entendiendo que es una sola enmienda conjunta y que como tal puede ser debatida y votada.

El señor PEREZ ROYO: Dicho esto, las enmiendas se explican bastante fácilmente, entre otras cosas porque coinciden en gran parte con las que ha desarrollado anteriormente el señor Padrón.

Nosotros también hemos advertido que en la plantilla del tribunal hay actualmente cinco Ministros y la dotación es para la plantilla completa, que creo que está integrada por 12 Ministros. Entonces, aquí hay una cantidad de pesetas que sobran, porque en definitiva no hay a quien dárselas, mejor dicho, siempre habrá alguien para recibirlas, pero en principio en la plantilla

del tribunal no existen los Ministros destinatarios de las mismas.

Por ello, nosotros proponemos suprimir tanto las retribuciones básicas como las partidas para atenciones de altos cargos en relación a aquellos altos cargos que al menos legalmente no existen. También proponemos la supresión de algunas otras atenciones que nos parecen innecesarias, como las atenciones de carácter social y representativo para Protocolos y Secretaría y para misiones extraordinarias del Intosai; es decir, para viajes cuya justificación no encontramos. Tenemos noticias de los viajes que han desarrollado determinados altos cargos del Tribunal de Cuentas durante los últimos años y no creemos que sirvan para mejorar en nada el conocimiento y funcionamiento del Tribunal. A título de anécdota se puede decir que el último viaje que ha realizado la jerarquía del Tribunal de Cuentas ha sido a China Popular para comprobar el control externo del gasto público en dicho país. Creemos que eso no sirve demasiado como experiencia del Derecho comparado para mejorar el control externo en España. Razón por la cual nosotros pedimos la supresión de estas partidas que encontramos injustificables.

En cambio, sí que consideramos necesario establecer dotaciones para, por ejemplo, adquisición de libros, publicaciones, suscripciones para crear una biblioteca en ese organismo con la modesta cantidad de un millón de pesetas con la que pocas suscripciones van a poder hacer, pero es que ni siquiera pueden llevar a cabo esto con el poco dinero de que disponemos actualmente. También consideramos necesario establecer dotaciones para incrementar el equipo inventariable y adquirir máquinas de producción y diverso material de cálculo electrónico porque creo que no hay demasiada cantidad. Ya se ha dicho en la Comisión muchas veces que el sistema de control de las cuentas que se ven obligados a desarrollar los funcionarios del Tribunal consiste poco más o menos en que con un lápiz como éste, colorado por un lado y azul por el otro, van punteando las cuentas y prácticamente nada más. La penuria de material es absolutamente de caricatura. No es que con esto se vaya a solucionar el problema, pero, por lo menos, dentro de los márgenes del actual presupuesto nosotros proponemos este modestísimo incremento.

El señor PRESIDENTE: ¿ Turno en contra de

las enmiendas? (*Pausa.*) Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Mi grupo parlamentario en la Ponencia ya aceptó parcialmente la enmienda 741, del Grupo Parlamentario Comunista, para adecuar determinados epígrafes del presupuesto del Tribunal de Cuentas. Concretamente el concepto 251 aparece ahora como atenciones de carácter social y representativo para Protocolos y Secretaría y ello supone que el capítulo 241 se incrementa en 220.000 pesetas tal y como figura en el informe de la Ponencia.

En cuanto a la enmienda 419, del Grupo Socialista, mi grupo parlamentario, en atención a que el Tribunal de Cuentas en este momento solamente tiene cinco Ministros y no seis como aparece consignado en los presupuestos —porque si en el presupuesto aparecen inicialmente fiscal y diez Ministros, luego hay que reducir el número a cuatro— se podría decir «a deducir por cinco vacantes de Ministros», puesto que después de la elaboración del anteproyecto ha fallecido uno de los Ministros del Tribunal, con lo cual aparecería una deducción de 1.165.148 pesetas y podríamos crear el concepto a que se refiere la enmienda 419, del Grupo Socialista, del artículo 28, el concepto 282, «gastos de promoción y estudio», precisamente con esa cantidad de 1.165.148 pesetas.

Por tanto, en este punto ofrecemos una aproximación a la enmienda socialista y rechazamos los demás conceptos aquí vertidos.

El señor PRESIDENTE: Antes de darles un segundo turno, a la vista de las manifestaciones del Grupo Centrista que aceptaría parcialmente la enmienda 419 en la supresión de 1.165.248 pesetas por la vacante de un Ministro y también de dicha enmienda la cantidad de 529.000 pesetas de Protocolos y Secretaría del Intosai y puesto que han manifestado el criterio contrario a la enmienda 741, del Grupo Parlamentario Comunista, yo quisiera preguntar al Grupo Centrista si este mismo criterio, señor Bravo de Laguna, también podría extenderse a las 220.000 pesetas a que se refiere la enmienda 741, «Misiones extraordinarias del Intosai», en cuyo caso podríamos someter a votación conjuntamente la enmienda 741 en sus dos epígrafes, «Protocolo y Secretaría del Intosai» y «Misiones extraordina-

rias», y la enmienda 419 parcialmente en la vacante de un Ministro y con las tres cantidades resultantes integrar un fondo para formación y perfeccionamiento del funcionario.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Hay conformidad por parte de los grupos a la propuesta de ordenación que se efectúa por la Presidencia? (*Pausa.*) En ese caso, aclaro a sus señorías: de la enmienda 419 irían destinadas a la creación de un nuevo concepto 282, «Formación y perfeccionamiento del personal», las siguientes cantidades: de la sección 03, 01.01.111.4, por vacante de más de un Ministro, la cantidad de 1.165.248 pesetas; de la sección 03, 01.02.252, «Protocolo y Secretaría del Intosai», 529.000 pesetas, y de la enmienda 741, la cantidad de 220.000 pesetas, relativa a misiones extraordinarias del Intosai.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Lo que ofrecimos en el informe de la Ponencia fue un cambio de denominación de tal manera que en el concepto 251, «Atenciones de carácter social y representativo de Protocolo y Secretaría», aparece la cantidad de 529.000 pesetas. Luego, eso supone que el capítulo 241 se incrementa en 220.000 pesetas que se bajan precisamente del 251.3, «Misiones extraordinarias del Intosai». Por tanto, el concepto a que se refiere la enmienda socialista solamente lo integraríamos con la deducción de vacante de un puesto de Ministro.

El señor PRESIDENTE: A la vista de las manifestaciones, yo quiero preguntar al Grupo Parlamentario Socialista en relación a la enmienda 419.

El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, no nos oponemos a que se presente esa enmienda, pero mantenemos a efectos de votación y para Pleno la enmienda inicial que consis-

tía en 4.639.000 pesetas para cursillos de formación.

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Comunista, en relación a la propuesta centrista sobre la enmienda 741.

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, nosotros mantenemos nuestras enmiendas porque, en todo caso, la propuesta centrista hace referencia únicamente a nuestra enmienda 737 y le da una aplicación con la cual, en principio, nosotros estaríamos de acuerdo. Si se quiere, estaríamos de acuerdo en retirar la enmienda 737 y la 743, puesto que entra dentro del concepto de formación y perfeccionamiento. Las restantes las mantenemos.

El señor PRESIDENTE: ¿Y la 741 respecto de la que existe la transaccional?

El señor PEREZ ROYO: No, porque la transaccional es la 743, ¿no?

El señor PRESIDENTE: Es la enmienda 741, que destina a Protocolo y Secretaría 529.000 pesetas.

El señor PEREZ ROYO: Esa la mantenemos porque, en definitiva, lo que hace es cambiar la rúbrica. La propuesta del Grupo Centrista es pasar a gastos generales del presidente del organismo. Consideramos admitida la 737 y la 743 en la propuesta centrista y las retiramos. Las restantes quedan vigentes para votación.

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación en primer lugar la enmienda número 419, del Grupo Parlamentario Socialista. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 419, del Grupo Parlamentario Socialista.

A continuación, se somete a votación la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Centrista al servicio 01, capítulo 02, en que el concepto 282, Formación y perfeccionamiento del personal, quedaría integrado con la cantidad

de 1.165.248 pesetas, que se detraerían del servicio 01, «Dotación para la vacante de más de un Ministro».

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional centrista, respecto a la enmienda número 419.

El señor Padrón tiene la palabra.

El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, como es obvio, hemos votado a favor de nuestra enmienda y nos hemos abstenido en la enmienda del Grupo Centrista, porque nos parece poco serio destinar solamente un millón de pesetas para cursillos de formación.

Tendremos ocasión de hablar del tema del Tribunal de Cuentas en los debates de la totalidad la próxima semana, porque a nosotros nos parece ya inaguantable la situación del Tribunal de Cuentas. Llevamos cuatro años batallando para que se consignent unos presupuestos adecuados para que este organismo pueda controlar y fiscalizar los gastos totales del Estado que, como saben, sobrepasan los cinco billones de pesetas.

Este año no solamente no se aumenta la dotación con respecto al año anterior, sino que encima se rebaja, estando, como todos sabemos, pendientes de aprobación un una ley orgánica que necesariamente llevará a una adecuación y a una transformación del Tribunal de Cuentas.

Por tanto, nos parece poco serio, nos parece una vergüenza, que un país democrático, un país que intenta equipararse a los países europeos siga manteniendo un Tribunal de Cuentas con unas dotaciones que más se asemejan a la dotación que puede destinar un país de una república bananera, un país centroafricano, que a lo que representaría la dotación de un país democrático, de un país que intenta entrar en el Mercado Común Europeo.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Estamos nada más que en la sección 03, señor Presidente, y creo que pronto se van a agotar los objetivos, como sigamos por este camino.

Creo que el señor Padrón sabe perfectamente que existe un proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y que esa ley será la que deba introducir aquellos conceptos de carácter presupuestario y de orden extraordinario para atender las nuevas necesidades de la estructura, que allí se cree, del Tribunal de Cuentas. En cualquier caso, este presupuesto presentado procede del propio organismo, del organismo que hoy existe; no se han introducido modificaciones por parte del Ministerio de Hacienda ni por parte del Gobierno y, en definitiva, rechazamos los calificativos que el señor Padrón utiliza con esta prodigalidad que les caracteriza.

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el resto de las votaciones.

Se someten a votación las enmiendas que el Grupo Parlamentario Comunista ha mantenido para su defensa, números 738, 739, 740, 741, 742 y 744.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 738, 739, 740, 741, 742 y 744.

Sometemos a votación la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Centrista respecto de la enmienda 741, que implica suprimir de las atenciones de carácter social y representativo la parte relativa a «Protocolo y Secretaría del Intosai», que pasaría simplemente a «Protocolo y Secretaría», y la cantidad asignada a misiones extraordinarias del Intosai, concepto 251 al concepto 241.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional del Grupo Centrista. En consecuencia, el contenido de la sección tres quedará integrado por el que marca el proyecto de ley con las alteraciones derivadas de la aprobación de las dos enmiendas transaccionales precedentes.

La sección 04, Tribunal Constitucional, tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la 434, que aparece aceptada por los ponentes. ¿Desean efectuar su defensa o que pase directamente a votación?

El señor BARON CRESPO: Si está aceptada, que se ponga directamente a votación.

El señor PRESIDENTE: Pasamos directamente a votación, en consecuencia, de la enmienda número 434 y, en consecuencia, su compuesto del Tribunal Constitucional. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 434 y en consecuencia su contenido integrará el presupuesto de la sección cuatro, Tribunal Constitucional.

Sección 05 A la sección cinco, Consejo de Estado, figuran presentadas las enmiendas 432 y 433, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Desean efectuar su defensa a pasarnos directamente a votación? *(Pausa.)* En consecuencia, se somete a votación las enmiendas números 432 y 433, a la sección cinco, Consejo de Estado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 14 votos a favor; 18 en contra.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 432 y 433, a la sección cinco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Sección 08 A la sección ocho, Consejo General del Poder Judicial, figura presentada una enmienda, la 431, del Grupo Parlamentario Socialista, que sometemos directamente a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; en contra, 18; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 431, al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial.

Sección 11 La sección once, Presidencia del Gobierno, tiene las siguientes enmiendas: número 96, del Grupo Centrista, que no se desea efectuar su defensa; enmiendas números 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173 y 190, del Grupo Parlamentario Minoría Catalana.

Quisiera preguntar, antes de entrar en el debate de las mismas, a la vista de las manifestaciones formuladas por los ponentes en el informe en cuanto a las enmiendas de la Minoría Cata-

lana, cuál es el criterio en el presente momento en relación a dichas enmiendas. Es la página 29 del informe de la Ponencia.

El señor Del Valle tiene la palabra.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Señor Presidente, nosotros habíamos ofrecido una enmienda transaccional, que en principio había sido aceptada por Minoría Catalana, y que figura en la página 29 del informe de la Ponencia. Consistiría en incluir una Disposición adicional nueva cuya consecuencia sería la retirada de todas las enmiendas que había formulado Minoría Catalana a los capítulos 1, 2, 3 y 4 en las distintas secciones del Presupuesto.

El señor PRESIDENTE: ¿Puede preguntar a la Minoría Catalana sobre su posición, a la vista del informe de la Ponencia?

El señor Gasoliba tiene la palabra.

El señor GASOLIBA I BOHM: Tal como se acordó en Ponencia, y a la vista del texto definitivo que consta en el informe de la misma, nosotros aceptamos esta enmienda transaccional. Por lo tanto, quedarían retiradas todas las enmiendas que hacemos a las secciones que se refieren a los capítulos 1 a 4, no así los que significan transferencia de capital a los capítulos 6 y 7. Por tanto, éstas, concretamente a la sección once y del resto de las secciones, quedarían retiradas. Lo único que hay que hacer, entiendo yo, en este momento es proceder a ubicar esta enmienda transaccional con una Disposición final o una Disposición adicional al texto del articulado.

El señor PRESIDENTE: Señor Gasoliba, puede indicar a la Mesa, a la vista de la aceptación de la enmienda transaccional centrista, que ahora va a ser sometida a votación, cuáles son las enmiendas, en consecuencia, que mantiene S. S. vivas a la sección once, Presidencia del Gobierno.

Tiene la palabra el señor Gasoliba.

El señor GASOLIBA I BOHM: Yo entiendo que ninguna, porque ninguna hace referencia a los capítulos 6 y 7.

El señor PRESIDENTE: Figuran igualmente presentada a la sección once enmiendas del Grupo Socialista del Congreso, números 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 436, 437 y 438.

Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, voy a defender desde la enmienda número 420 a la 430 y el resto, es decir, las números 436, 437 y 438, serán defendidas por mi compañero de grupo señor De Vicente.

Este paquete de enmiendas se puede ordenar en cuatro grandes apartados. Por una parte, están las enmiendas números 420 y 422, que básicamente tienen una filosofía de crítica a la política del Gobierno, que sigue sin regular por una vía legislativa las ayudas a la Prensa. Nosotros no estamos en contra de que se ayude a la Prensa. Creemos que se ha avanzado en el tema de la subvención al papel prensa de producción nacional, pero creemos que desde el punto de vista de la difusión y, sobre todo, para el apoyo a la modernización tecnológica de la Prensa sería muy importante, absolutamente necesario, que esto se regulara desde un plano legislativo; y más teniendo en cuenta que no se puede estar año tras año planteando unos criterios que no se sabe precisamente cuáles son, aunque va mejorándose su conocimiento, como se ha puesto de relieve con la comparecencia del señor secretario de Estado para la Información, el cual ha hablado de una serie de solicitudes de créditos que parecen más objetivas que las que se hacían en tiempos del anterior secretario de Estado para la Información, por lo menos hasta hace dos años, en que conseguimos una cierta información que, desde luego, no era nada objetiva en cuanto a la distribución de las ayudas.

Creemos que sería muy importante y absolutamente necesario que la política de modernización tecnológica de la Prensa se hiciera teniendo en cuenta las necesidades, que son objetivas y que son ciertas, de transformación de este medio de comunicación de masas. Pero esto se podría plantear con mucha más seriedad a través de una vía de ayuda de crédito oficial, con la aportación que sea necesaria a fondo perdido o con la subvención necesaria a tipo de interés, pero desde luego no a través de una vía que dependa directamente de la Presidencia del Gobierno, que entendemos no hace ningún favor ni a la modernización de la Prensa ni a su imagen de independencia. Este es un criterio que el Grupo Socialista ha mantenido ya en los últimos años, aunque ha habido ciertos avances —hay que reconocerlo— en cuanto a la objetividad en la distribución de las ayudas.

Creemos que esta no es la ubicación ni el lugar donde se debe plantear este tema; creemos que debería hacerse a través de una legislación sustantiva e invitamos al Grupo de UCD a que avance en este terreno, cuando tantas veces nos dice que la Ley de Presupuestos no es el lugar para regular las cosas desde un punto de vista sustantivo y precisamente en este terreno se dedican a hacerlo.

La enmienda 423 plantea la reducción de la subvención al Patrimonio Nacional, porque en estos momentos, como se sabe, el Grupo Socialista tiene una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley del Patrimonio Nacional, la cual se refiere precisamente a la política de clarificación y de explicación de la situación del Patrimonio Nacional. Por otro lado, hemos conseguido, a través de preguntas formuladas por varios diputados, el tener cierto conocimiento de la situación del Patrimonio Nacional y nosotros entendemos, desde luego, que es absolutamente inaceptable que el Patrimonio Nacional se esté dedicando a determinadas actividades como subvenciones para determinados deportes de lujo y que no responden al papel que debe tener el Patrimonio Nacional.

Nos alegramos, en este sentido, de que cuando hemos planteado la enmienda y hemos llamado al actual director del Patrimonio Nacional, nos haya dicho que él está también de acuerdo en que se haga rápidamente una auditoría sobre el mismo. Entendemos que para el bien del país sería muy interesante llegar a fondo en este tema, poder hacer un inventario completo y tener un conocimiento exacto del funcionamiento del Patrimonio Nacional.

En el resto de las enmiendas, lo que se plantea es una serie de cuestiones que chocan frontalmente, entendemos nosotros, con la política de contención de gastos, anunciada reiteradamente por el actual Gobierno. Concretamente, no entendemos cómo puede haber un aumento importante y un mantenimiento en los gastos reservados; no entendemos cómo las dietas pueden aumentar en un 127 por ciento; cómo el capítulo de transportes y comunicaciones puede aumentar en un 202 por ciento; no entendemos cómo los gastos de inmuebles pueden aumentar en un 43 por ciento, y en ese sentido proponemos reducciones correlativas. No entendemos tampoco cómo con una política de contención del gasto corriente se puede llegar a unas partidas de au-

mento en el personal contratado y en el personal eventual tan sustanciales. Como no se nos ha explicado nada de esto, entendemos que no debe de aumentarse, porque si la política de contención del gasto corriente es general, quien debe dar ejemplo en primer lugar es Presidencia del Gobierno.

Por último, hay una enmienda sobre la que además existe —por lo menos en el Consejo de Administración de la Mupal— un acuerdo total de todos los grupos políticos. Nosotros la hemos insertado en la sección once, pero si el grupo que apoya al Gobierno cree que es mejor situarla en otro Ministerio, incluso en gastos de diversos Ministerios, no tendríamos problema, pero entendemos que guarda relación con la Administración pública. Con esta enmienda proponemos crear en el capítulo 4, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, una dotación para la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, fijando un porcentaje de esos ingresos igual al establecido en el Real Decreto-ley 36/78.

Esta es una enmienda que entendemos que tiende a corregir la discriminación existente con el colectivo de trabajadores de la Administración local. En este sentido, señalamos que nosotros no hemos hecho más que presentar un acuerdo apoyado unánimemente y que parece ser que también es aceptado por el Gobierno. Si hay algún otro sitio mejor para insertar esta enmienda, nosotros lo aceptaríamos. Lo que creemos importante es que resuelva esta situación.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 436, 437 y 438, tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Se trata de tres enmiendas relativas a defensa de los consumidores, tema que aparecerá en diversos Ministerios, puesto que, como ya he señalado en la defensa de la enmienda 417, que fue aprobada, son varios los que tienen competencia en la materia.

Las enmiendas que contemplamos aquí son las siguientes: en primer lugar, una enmienda de totalidad al presupuesto del servicio 08, Secretaría de Estado para el Consumo, del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, por la que proponemos la devolución de dicho presupuesto al Gobierno para su reelaboración y ulterior envío al Congreso de los Diputados.

La razón es muy sencilla y fácilmente comprensible. Este presupuesto tiene dotaciones por importe de 527.200.000 pesetas en materia de personal y de gastos para el funcionamiento de los servicios, y tiene otra partida de 266 millones para transferencias a Corporaciones locales y asociaciones de consumidores; de tal forma que cada peseta de las que se transfieren a Corporaciones locales, a organizaciones de consumidores o se dedican a tareas de asistencia técnica de defensa del consumo, cuesta en términos de gestión dos pesetas. Nos parece, por tanto, una cantidad excesivamente alta, un auténtico despilfarro de recursos, de lo cual da buena muestra el hecho de que en el presupuesto por programas del Ministerio de la Presidencia no figure por ninguna parte programa alguno para la actividad de esta Secretaría de Estado que, de esta suerte, resulta ser una Secretaría de Estado cara y fantasma.

En cuanto a las siguientes enmiendas, 437 y 438, en la primera se pretende dotar una partida presupuestaria de 25 millones, previa creación del concepto de aplicación económica correspondiente, con la finalidad de, con cargo a esos 25 millones de pesetas, financiar los gastos que ocasione la inserción mensual en los medios de comunicación social de la relación de productos alimenticios adulterados y fraudulentos. Este es un tema que aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados el día 17 de septiembre y al parecer no hay dinero para publicarlo, porque en el mes de octubre no se publicó la relación de artículos fraudulentos y, aunque en principio cabía pensar que si no se publicó es porque ninguno con carácter definitivo había sido definido como tal en el mes de octubre, no es menos cierto que ulteriores informaciones públicas han demostrado que fueron plurales los alimentos que, con riesgo o no para la salud, estaban adulterados, con comprobación finalizada en dicho mes. Así pues, acudimos «en auxilio del Gobierno» para que pueda hacerlo.

Finalmente, la enmienda 438 se propone la sustitución de la rúbrica del artículo 29 de esta sección por otra que diga: «Para los gastos de colaboración y asistencia técnica a las Corporaciones locales en orden a la creación y potenciación de servicios de control de alimentos y bebidas y oficinas de información a los consumidores», con lo cual daríamos cumplimiento —o insstaríamos al Gobierno a que lo haga de una vez—

a la medida decimoséptima aprobada por el Congreso de los Diputados en el debate sobre el síndrome tóxico, del 17 de septiembre del 81. Allí se aprobó, pero si no se prevé partida presupuestaria para hacer frente al cumplimiento del tema, ni en este caso, ni en el anterior de la inserción de los anuncios en Prensa y todo lo que se prevé es dinero para que cada peseta que se da cueste dos pesetas de gestión, nos parece que ni se cumple lo mandado por el Parlamento ni se da una gestión adecuada en términos de eficacia del gasto público.

El señor PRESIDENTE: Figura igualmente presentada a la sección once la enmienda número 683, de Socialistas de Cataluña, que desean sea sometida directamente a votación.

Existe también la enmienda 745 a la sección once, del Grupo Parlamentario Comunista, que igualmente desean sea sometida directamente a votación.

Finalmente, la enmienda número 925, del señor Bandrés. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Bandrés.

El señor BANDRES MOLET: Brevísimamente, señor Presidente, para indicar simplemente a los que van a votar —porque tal como aparece en la enmienda, es ininteligible en principio—, que se trata de la transferencia de capital que hace la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno al Ente Público RTV para financiar programas de inversión, y señala una cifra de 3.064 millones de pesetas.

La razón de nuestra enmienda es que no aparece especificado en esta partida si se incluyen los fondos necesarios para establecer un tercer canal de televisión en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en Euskadi. Es deseable, desde nuestro punto de vista, que así fuera, ya que el Estatuto de Autonomía establece esta obligación por parte del Estado y no aparece consignada con claridad. Por eso, una aclaración del destino de esta partida nos parece imprescindible para poder votar a favor de la misma.

El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de las enmiendas defendidas, tiene la palabra el señor Bavo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Trataré de contestar a las enmiendas pre-

sentadas por los distintos grupos parlamentarios a la sección once, Presidencia de Gobierno.

Hay un primer grupo de enmiendas que se refiere al tema de la subvención a la Prensa que aparece consignada en los Presupuestos. El propio enmendante, señor Barón, ha reconocido que existen unas disposiciones de carácter administrativo que introducen una mayor transparencia y claridad en la concesión de estas subvenciones, concretamente las órdenes de 28 de mayo de 1981, de 26 de agosto de 1981 y de 30 de junio del propio año, concretan un conjunto de disposiciones de carácter reglamentario. No tienen carácter estrictamente legal, pero nosotros entendemos —y así lo hicimos constar ya el año pasado al oponernos a enmiendas similares— que es peor regular toda esta materia a través de una ley. Entendemos que es un mal principio establecer todas estas cuestiones como de reserva de ley. Por ejemplo, la legislación comparada nos permitiría deducir que solamente hay dos países, Bélgica e Italia, que tienen leyes de ayuda a la Prensa. Nosotros creemos que es preferible que se articulen a través de disposiciones de carácter administrativo y no sobrecargar las tareas de este Parlamento con disposiciones de carácter legal para estas materias.

En segundo lugar, se ha hecho una referencia a un conjunto de enmiendas que, según el grupo enmendante, tenderían a disminuir los gastos corrientes de Presidencia de Gobierno. Quiero decir que algunas de las cifras que aparecen en dichas enmiendas, por ejemplo, que el incremento de dietas del 127 por ciento no aparezcan en los cálculos globalizados de Presidencia de Gobierno. En la Memoria que todos los señores diputados tienen aparece perfectamente claro cómo Presidencia de Gobierno ha sido precisamente una de las secciones que menos ha incrementado su presupuesto para el año próximo. De tal manera que los gastos corrientes se incrementan exclusivamente en un 4 por ciento, y las operaciones de capital, en un 12,3 por ciento. De manera que el incremento conjunto de todos los capítulos en la sección es de un 4,6 por ciento.

En cuanto a las enmiendas que se refieren a la Secretaría de Estado para el Consumo, el señor De Vicente, que las ha defendido, ha hecho referencia a la carencia de programa, en el propio presupuesto, para dicha Secretaría. Quizá olvida que en el Real Decreto 1808/1981, de creación de

la Secretaría de Estado para el Consumo, se disponía que antes del 31 de diciembre de 1981, es decir, en un plazo aún no finalizado, se procedería a la reestructuración y adscripción definitiva del servicio. En consecuencia, hasta que esto se produzca, no es posible establecer programa alguno y menos por la vía de la Ley de Presupuestos.

Respecto a la enmienda 438, nosotros entendemos que sería demasiado rígida la fórmula establecida por la enmienda en el sentido de consignar para los gastos de colaboración y asistencia técnica a las Corporaciones locales en orden a la creación y potenciación de servicios de control de alimentos y bebidas, porque, en definitiva, la propia técnica presupuestaria, el artículo 29, permite precisamente que se destine a esas u otras atenciones. Por tanto, sería tratar de dar un rigor excesivo a la consignación presupuestaria.

En cuanto a la enmienda presentada por el señor Bandrés, puesto que las enmiendas de Socialistas de Cataluña y Comunistas no han sido defendidas, tengo que decir, respecto al presupuesto de Radiotelevisión —que ya se discutirá en su momento también—, que la partida de subvención para inversiones que figura en Presidencia de Gobierno está destinada efectivamente a inversiones. En cualquier caso, no parece procedente, desde el punto de vista presupuestario ni tampoco desde el punto de vista legal, fijar aquí la posibilidad de creación de un tercer canal regional; entre otras razones, porque el Estatuto Jurídico de RTVE establece claramente que antes de crear ese tercer canal de carácter regional habrá de darse cobertura nacional al segundo programa. Como en las previsiones de inversión de RTVE no aparece que se pueda cubrir prácticamente la totalidad del territorio nacional con el segundo programa hasta el año 1982, parecería inadecuado, y desde luego contradictorio con el Estatuto Jurídico de RTVE, que se hiciera consignación expresa de inversiones para un tercer canal regional en este Presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno en defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Para un segundo turno, específicamente en torno a las enmiendas que se refieren a las ayudas a la Prensa.

Nos ha leído el señor Bravo de Laguna tres disposiciones emanadas del año 1981. Hay que decir que nosotros llevamos ya cuatro años insistiendo en este tema y que las disposiciones reglamentarias han salido este año. Es decir, el trabajo que hacemos en la Comisión de Presupuestos no es absolutamente baldío, de lo cual hay que alegrarse.

Pero hay más cosas. Este planteamiento de ayuda a la Prensa no es absolutamente generoso y desinteresado, porque las ayudas a la Prensa se inician con un crédito, que precisamente pasa por la Comisión de Presupuestos muy poco antes de que se celebraran las elecciones del 1 de marzo de 1979, y era un crédito de 900 millones de pesetas, sin ningún tipo de criterio y con un informe desfavorable del Consejo de Estado. Luego tuvimos ocasión, en el Presupuesto de hace dos años y en el Presupuesto del año pasado, de ver la utilización que se había hecho por el señor Meliá, cuando era secretario de Estado para la Información, de la política de ayudas a la Prensa. Ciertamente, este año se está consiguiendo objetivar un poco más eso. De todas maneras, son difíciles de explicar las cifras de solicitud y de concesión de créditos, o de ayudas a fondo perdido, que el otro día se nos leyeron por el señor secretario de Estado para la Información.

Nosotros —insisto— creemos que es importante que se discuta esto por el Parlamento. Además, creemos que, por el bien de la Prensa, del Parlamento y también del Gobierno, no deben ser ayudas de Presidencia de Gobierno, sino que debe ser una política de modernización tecnológica de ayuda a la Prensa, en función de los objetivos que cumple. No tenga ningún miedo el señor ponente de UCD en sobrecargar de trabajo al Parlamento, porque en estos momentos estamos sobrecargados de trabajo, pero para conseguir enterarnos de lo que hacen ellos con el dinero de las ayudas a la Prensa.

El señor PRESIDENTE: En segundo turno para la defensa de las enmiendas números 436, 437 y 438, el señor De Vicente tiene la palabra.

El señor DE VICENTE MARTIN: Muy brevemente, para decir que no he oído opinión del Grupo Centrista en relación con la enmienda 437 que, me parece, es importante, ya que se trata de la posibilidad de dar cumplimiento a un

acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados en el debate del síndrome tóxico del 17 de septiembre. No sé si es una omisión o, simplemente, que no merece consideración.

En relación con la enmienda 436, relativa a la Secretaría de Estado para el Consumo, he quedado sorprendido, y mal, por las argumentaciones del señor Bravo de Laguna, ya que dice que no es lugar la Ley de Presupuestos para incluir los programas de los organismos públicos. Sabe el señor Bravo de Laguna que los presupuestos por programas vienen con la ley, y prueba de ello es que en el presupuesto por programas, en el Libro Rojo del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, figuran otros programas, pero no éste. Lugar es, lo que ocurre es que no vienen.

De otra parte, la argumentación dada sobre el hecho de que antes del 31 de diciembre hay que reestructurar todos los temas de consumo, aparte de que pone de relieve una vez más la lamentable confusión entre consumo y alimentación —siendo así que alimentación es un concepto más reducido que el de consumo—, pone de relieve que de acuerdo con su argumento aquí no va a haber programas de los servicios públicos en materia de consumidores; porque hasta el 31 de diciembre, la cosa va de reestructuración, y a partir del 1 de enero, la cosa no se sabe si estará reestructurada o no. Lo cierto y evidente es que, con reestructuración y sin ella, aquí se crea un organismo, se pone su presupuesto para el año 1982, se le dota con un presupuesto tan generoso de gasto de dos pesetas por funcionario, que por cada peseta gestionada, dos pesetas de coste de personal, que es auténticamente de locura, y si lo aplicáramos con carácter general al Presupuesto imagínense lo que significaría, y se nos dice que por todo eso no puede haber programa, alegándose y añadiéndose seguidamente que es que la ley no es lugar adecuado para el programa. Pues ni hay programa y la ley sí es el lugar para que con ella venga el presupuesto por programas, aunque esto no es susceptible de enmiendas, como sabe perfectamente el señor Bravo de Laguna. Pero, ¿por qué vienen los restantes programas de otros Ministerios y los programas del Ministerio de la Presidencia de Gobierno y no viene éste? Pues muy claro, porque no existe.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno en contra, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Respecto a las enmiendas presentadas respecto a las subvenciones a la Prensa, sabe perfectamente el señor Barón que toda la información que se ha solicitado por los distintos grupos parlamentarios ha sido facilitada; que el secretario de Estado para la Información ha estado presente en esta Comisión y respondió a cuantas preguntas le fueron planteadas al respecto. Sabe perfectamente que lo que es atribución de subvención por consumo de papel prensa y por subvención por el número de ejemplares vendidos están perfectamente objetivadas y son las cantidades mayores que figuran en los presupuestos. De manera que esta afirmación de que en absoluto se sabe a qué se destina este dinero es una afirmación relativamente ligera.

La enmienda número 437, a la que ha dicho el señor De Vicente que no he contestado —y así es, pues no he contestado una por una—, trata de los 25 millones que pretende deducir del Consejo de Seguridad Nuclear para incrementar la Secretaría de Estado para el Consumo. Nosotros pensamos que no se puede deducir cantidad alguna del Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo presupuesto es relativamente reducido para las funciones del Consejo y, por tanto, nos oponemos por esta razón.

En cuanto a la argumentación que hace de que no figure el programa de la Secretaría de Estado para el Consumo, esta Secretaría ha sido creada el 20 de agosto de 1981, por lo que difícilmente podría tener un programa elaborado para presentar en estos Presupuestos. A esto es a lo que yo me he referido, de que no era el lugar adecuado los Presupuestos para fijar ese programa si previamente no estaba determinado. Ya sé que existe un presupuesto por programas, pero de aquellos organismos que efectivamente puedan realizar sus programas antes de presentar la Ley de Presupuestos.

Evidentemente, el señor De Vicente, al utilizar el argumento de que la única función de la Secretaría de Estado para el Consumo es hacer una transferencia de doscientos y pico millones, pone el ejemplo de que se utilizan quinientos y pico millones para hacer una transferencia de doscientos, es bastante pobre; está bien para la galería, pero él sabe que la Secretaría de Estado para el Consumo no puede tener exclusivamente esa finalidad. La prueba es que hay una cierta contradicción entre esa afirmación y el intento

de quitar 25 millones al Consejo de la Seguridad Nuclear para dárselo a la Secretaría de Estado para el Consumo.

Nos oponemos a todas estas enmiendas por todas estas razones. El se muestra escéptico respecto a las posibilidades de que, efectivamente, la Secretaría de Estado para el Consumo cumpla algún programa; nosotros no somos escépticos al respecto.

El señor PRESIDENTE: Con ello queda concluido el debate de las enmiendas de la sección once, Presidencia del Gobierno.

Comoquiera que las enmiendas números 159 y siguientes, de Minoría Catalana, parecen retiradas y en lugar de ellas figura una enmienda transaccional, que en su caso integraría el contenido del proyecto de ley como Disposición final sexta, vamos a someter a votación, en primer lugar, el contenido de dicha enmienda transaccional que figura en la página 29 del informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional, que figura en la página 29 del informe, que integrará el contenido de la ley como Disposición final sexta.

A continuación vamos a someter a votación las enmiendas que permanecen vivas, como consecuencia de la anterior votación, a la sección once. En primer lugar, enmienda número 96, del Grupo Parlamentario Centrista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 96 que, en su caso, rectificará el contenido de la sección once, servicio 06, capítulo 01, Obligaciones de la AISS.

A continuación vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista agrupadas de acuerdo con los servicios. En primer lugar, enmiendas números 421, 423, 425, 426, 427, 429 y 430 al servicio 01 de la sección once, Presidencia del Gobierno.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a que se ha dado lectura con anterioridad.

Votamos la enmienda número 424, al servicio 02 de la sección once.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 424.

Se pone a votación la enmienda 428, al servicio 03.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 428.

Sometemos a votación las enmiendas números 420 y 422, al servicio 05 de la sección once.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 420 y 422.

Por último, votación de las enmiendas números 436, 437 y 438, al servicio 08.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 436, 437 y 438.

Se pone a votación la enmienda número 683, de Socialistas de Cataluña, a la totalidad de la Secretaría de Estado para la Información, servicio 05.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 683. Votación de la enmienda número 745, del Grupo Comunista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 745.

Por último, votamos la enmienda número 925, del señor Bandrés, al servicio 02.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 925.

Sección 12 A la sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores, figuran presentadas las siguiente enmiendas: al servicio 01, las enmiendas 441 y 442, del Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, entiendo que son enmiendas a organismos autónomos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo digo por si se tramitan ahora o para que se tengan en cuenta a la hora de tramitar las enmiendas de los organismos autónomos. *(El señor Barón pide la palabra.)*

El PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, son dos enmiendas de totalidad, una al Instituto Iberoamericano de Cooperación y otra al Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Dado que existe una enmienda de totalidad a la sección 12, nuestro tratamiento será conjunto. Mi compañero de Grupo, señor Padrón, tiene razón formalmente, pero no habría inconveniente en agrupar la defensa en el Pleno, por lo cual pediríamos que se pusieran a votación aquí, porque es un problema de insuficiencia de dotación presupuestaria.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la Mesa ha comprobado, señor Padrón, y son enmiendas no a los presupuestos de los organismos, sino a las subvenciones que figuran en los Presupuestos del Estado en favor de los mencionados organismos. Como se trata de organismos independientes, habrán de ser votados con idéntico carácter.

Las enmiendas números 746 y 747, del Grupo Comunista, serán sometidas a votación, puesto que se rechaza el turno de su defensa.

Por último, enmienda 103 del Grupo Parlamentario Centrista, que se da por defendida y pasaremos seguidamente a su votación.

Se somete a votación la enmienda número 441, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, en relación a la subvención al Centro Iberoamericano de Cooperación *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 441.

Votación de la enmienda 442, del mismo grupo, al Instituto Hispanoárabe de Cultura.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 17; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 442.

Se vota ahora la enmienda número 746, del Grupo Parlamentario Comunista, al servicio 02 de la sección doce.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 746.

Votación de la enmienda 747, del Grupo Parlamentario Comunista, al servicio 04 de la sección doce.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 18; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 747.

Por último, procedemos a votar la enmienda número 103, del Grupo Centrista, del aumento al Instituto Hispano-Arabe de Cultura en 20 millones de pesetas.

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada y, en consecuencia, su contenido pasará a integrar el proyecto de ley con deducción del concepto 1306, artículo 284, Cooperación Científica y Técnica, en la cuantía de 20.750.000 pesetas y correlativo incremento de la dotación al Instituto Hispano-Arabe de Cultura.

Sección 13

A la sección trece, Ministerio de Justicia, figuran presentadas varias enmiendas.

Tiene la palabra el señor Escartín.

El señor ESCARTIN IPIENS: Señor Presidente, rogaría de su atención y de la de los demás grupos parlamentarios para que, antes de entrar en el debate concreto de las enmiendas formuladas a esta sección, se tomase en consideración una enmienda transaccional que tiene por objeto tratar de paliar las deficiencias que en este momento nos encontramos en la Administración de Justicia por una infradotación de sus medios para los servicios correspondientes.

El señor PRESIDENTE: Señor Escartín, la enmienda transaccional que S. S. está proponiendo en este momento ¿es en relación a qué enmiendas?

El señor ESCARTIN IPIENS: Diría que es una enmienda «in voce» de nueva presentación para su aceptación por los demás grupos, si ello es reglamentariamente posible, puesto que no comporta ningún gasto, sino simplemente una transferencia dentro de las distintas partidas de una misma sección; lo cual sería un instrumento para subsanar una grave deficiencia que se nos puede plantear en el próximo ejercicio.

El señor PRESIDENTE: Señor Escartín, lo que ocurre es que al no referirse a un concepto transaccional en relación a ninguna enmienda, si le parece, vamos a someter en primer lugar a deliberación las distintas enmiendas de los grupos, y con posterioridad veríamos la enmienda transaccional que plantea su señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 446 y 447, del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, nosotros hemos presentado también una enmienda de totalidad al Ministerio de Justicia que veremos en el Pleno, pero, aparte de ellas,

tenemos dos enmiendas parciales; una de ellas consiste en la detracción de 100 millones de pesetas de la cantidad destinada a inversiones en prisiones, que consta de 6.550 millones de pesetas, para destinarlas a la contratación de asistentes sociales que deberán realizar el programa de prestaciones asistenciales y postpenitenciarias. Como ven, es una enmienda modesta que pretende únicamente corregir uno de los graves problemas que tiene actualmente la Administración de Justicia. Todos sabemos el gran incremento que ha habido en los últimos años en el número de reclusos en las prisiones, la cantidad de problemas que se derivan de este aumento masivo y, por lo tanto, dada la falta de dotación presupuestaria, creemos necesario crear esta nueva partida.

También hemos presentado otra enmienda, detrayendo de gastos corrientes, en concreto de teléfonos y de las dotaciones para el parque móvil de Ministerios y para comunicaciones, un montante de unos 105 millones de pesetas, puesto que estos conceptos vienen notablemente incrementados con respecto al año anterior.

Antes, con toda amabilidad y sin tener que emplear calificativos de ningún tipo —no sé si me va a responder el señor Bravo de Laguna—, quiero decir que estas enmiendas son posibles, por lo menos la de los 100 millones. Muchas veces se nos dice que no hay dotación y que si se detrae esta partida se van a paralizar los servicios o no se van a llevar a cabo determinadas inversiones. Esto es incierto. El año pasado, nosotros requerimos en esta Comisión la presencia del director general de Instituciones Penitenciarias para preguntarle si la enmienda que nosotros presentábamos, de detracción de 200 millones de la cantidad destinada para la construcción de centros penitenciarios, iba a significar una paralización o una demora en la tramitación de estas obras, y se nos contestó claramente que no. Recuerdo que aquella enmienda consistía en detraer 200 millones para asistencia a las familias de los reclusos y que contábamos con el apoyo favorable de muchas personas de Unión de Centro Democrático que, desgraciadamente, luego, en la sesión plenaria, dieron marcha atrás y no se pudo aprobar esta enmienda.

Sabemos que esto es posible, puesto que en los Presupuestos del año 1981 se han anulado bastantes partidas del Presupuesto de este año, se han anulado montantes bastante importantes de

crédito —tenemos contabilizados más de 22.000 millones— detraídos tanto de gasto de inversiones como de gastos corrientes.

Por tanto, nos parece que oponerse a esta enmienda para la creación de este servicio para asistencia a presos, tanto en su régimen penitenciario como una vez liberados, es oponerse a una necesidad social. Por ello esperamos de la racionalidad y del buen juicio del Partido de Unión de Centro Democrático en la votación de esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Figuran igualmente presentadas a la sección trece, Ministerio de Justicia, por el Grupo Parlamentario Comunista, las enmiendas 751, 752, 748, 749 y 750. ¿Desea consumir un turno en su defensa, señor Pérez Royo? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Sí, señor Presidente, mejor dicho deseo consumir un turno específicamente en defensa de la enmienda 750, que es la que considero más importante, y pedir simplemente la votación para las restantes.

La enmienda 750, como digo, es una enmienda importante, porque importante es el problema con el que se enfrenta. El problema es el de la dotación suficiente y digna del personal al servicio de la Administración de Justicia, desde jueces, magistrados, hasta secretarios, personal auxiliar, etcétera. Como saben SS. SS., la situación de este personal, o al menos de segmentos de este personal, es absolutamente indigna en cuanto a las remuneraciones; y digo indigna, porque esta escasez de remuneración determina una situación, unas prácticas, unos abusos que son generalmente conocidos y recriminados, pero a los cuales no se les pone coto.

En definitiva, estoy hablando de la corrupción; corrupción que en cierta medida viene a ser consentida —el sistema famoso de las astillas— y estimula como consecuencia de unas remuneraciones absolutamente insuficientes y ridículas que, en ocasiones, no llegan a las 25.000 pesetas al mes. Además hay otra caosa. Hay una ley que establece un sistema de retribuciones complementarias. Nosotros pedimos que se aplique esta ley, y en esto estamos en línea con las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial. Hacen falta 3.440 millones de pesetas, para establecer un sistema de retribuciones

complementarias del personal al servicio de la Administración de Justicia adecuado a la Ley de 24 de abril de 1980.

Se nos puede decir que con este incremento se rompe el ANE. Nosotros somos, si no los primeros, sí defensores, al mismo nivel que el primero, del ANE. Pero, evidentemente, el ANE tampoco es la Biblia, algo que esté ahí que no se pueda romper de ninguna manera. La mejor forma de respetar un instrumento como el ANE es dotarlo de la suficiente flexibilidad como para que pueda ser cumplido en su letra y en su espíritu. Y eso es lo que hay que hacer, porque, de otra forma, estaríamos respetando absolutamente el ANE, si se quiere, pero introduciendo un factor de absoluta irracionalidad en la negociación.

En ocasiones, el personal al cual estoy haciendo referencia, cuando ha ido a negociar con el Gobierno, al más alto nivel —hablo de ocasiones anteriores, probablemente de un Gobierno anterior a éste—, se le ha venido a indicar —si no expresamente, ustedes me perdonarán la licencia—, que es verdad que los salarios son los que son, pero que las remuneraciones que se cobran por una y otras cosas no son exactamente las que figuran en los Presupuestos. En definitiva, se ha intentado —si me permiten la expresión— tapar la boca con el achaque de la corrupción, que todo el mundo sabe que existe.

Si queremos acabar de una vez por todas con la corrupción, si queremos evitar que exista, por lo menos, pretexto, entre comillas, para la corrupción, es necesario, de una vez por todas, encararse con este problema y darle una solución; solución que en los Presupuestos actuales cuesta 3.440 millones de pesetas. Esto es lo que pedimos en nuestra enmienda 750.

El segundo punto de la enmienda es que en un Ministerio exiguo en dotaciones como es el de Justicia hacía falta, para que la enmienda fuera admitida a trámite, sacar esos 3.440 millones de pesetas de alguna parte, y nosotros, francamente, no hemos encontrado otro capítulo que el de dotación al clero. Sabemos que también es un problema conflictivo; que se trata de quitar 3.440 millones de pesetas a la dotación del clero, y nosotros no queremos quitárselo. Lo que pasa es que entendemos que la única forma de ser admitida la enmienda es indicando la compensación y ésta, por volumen, únicamente se puede encontrar aquí.

Si el Grupo Centrista y los restantes grupos de la Cámara, naturalmente, se encuentran sensibles a la necesidad que nosotros indicamos en nuestra enmienda y, al mismo tiempo, nos indican otra forma de sacar estos 3.440 millones que no sea quitándolos de donde he indicado, por nuestra parte, estupendo, porque no tenemos ninguna intención de disminuir las dotaciones para el clero, que también está mal pagado, todo hay que decirlo. Pero si se comparan las dotaciones que, en el Ministerio de Justicia, hay para transferencias al clero con la dotación que hay para transferencia a la Administración de Justicia, verán que las cifras son francamente escandalosas cuando se colocan todas ellas bajo la rúbrica de «Ministerio de Justicia».

Someramente expresadas están las razones por las cuales pedimos el voto para esta enmienda que, como digo, estimamos de una gran importancia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Pérez Royo, por su intervención en defensa de obras pías.

Enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Centrista. Se renuncia a su defensa.

¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Escartín.

El señor ESCARTIN IPIENS: Señor Presidente, voy a responder con la máxima concisión a las importantes intervenciones de los compañeros de los Partidos Socialista y Comunista.

En primer lugar, quiero manifestar que el propósito fundamental del Gobierno, a la hora de verificar el Presupuesto del Ministerio de Justicia, es hacer frente precisamente al enorme reto que representa la Administración de Justicia en nuestro país, para lo cual se está desarrollando en este Presupuesto la política que ya se estableció en las leyes de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, leyes de retribuciones y presupuesto del año anterior, que significaron una corrección de las desgraciadas y tradicionales deficiencias en este sistema, que representaba un comienzo que se complementa por la acción de este Presupuesto para 1982.

Quiero, en primer lugar, después de hacer esta manifestación de carácter general, responder concisamente a la enmienda 446, del Partido Socialista, que pretende la detracción de 100 millones de pesetas del presupuesto de construcción

de nuevos establecimientos penitenciarios para un programa de prestaciones asistenciales pospenitenciarias. Por supuesto, compartimos perfectamente la filosofía de la atención pospenitenciaria mediante la creación de este servicio. Pero, naturalmente, esto que está previsto en la ley, a la que tenemos que dar cumplimiento, requiere no una acción presupuestaria, sino una previa acción legislativa, para lo cual el Gobierno tiene ya preparado un anteproyecto de ley, no en la suma que se deduciría de la modesta partida presupuestaria, que señalaba el señor Padrón y el Grupo Socialista, de 100 millones de pesetas, sino en una cantidad muy superior, puesto que lo que se pretende es la creación de un cuerpo especial de asistentes sociales penitenciarios, al cual se le dota ya de una plantilla de 500 plazas.

Por consiguiente, puedo anunciar exactamente esto, porque compartimos la filosofía de la enmienda, aunque no el método, puesto que la Ley de Presupuestos no puede ser el instrumento para dotar a un cuerpo inexistente de funcionarios con una partida presupuestaria. Anunciando este compromiso formal del Gobierno, sentimos de momento, y de forma muy provisional, tenernos que oponer a esta enmienda 446, cuya filosofía compartimos.

Respecto a la enmienda 447, relativa al presupuesto de teléfonos y comunicaciones del Ministerio de Justicia y de instituciones penitenciarias, probablemente el señor Padrón ha sufrido un grave «lapsus», puesto que ha hablado de aminoración del gasto público en lo que es la cantidad de la partida que propone la enmienda. Es decir, la enmienda del Grupo Socialista propone una partida para estos conceptos de 105 millones, y dice que ésta es la aminoración. La aminoración no es ésta, si no sería, según la propuesta socialista, de 45 millones de pesetas.

Pero quiero advertir que el servicio de teléfonos del Ministerio de Justicia, con la partida consignada para el presupuesto de 1981, no consiguió nutrir más que los gastos de los meses de enero y febrero, con lo cual existe un déficit que hay que corregir. Por supuesto, no podemos impedir que los servicios necesarios de la Administración de Justicia, juzgados y servicios penitenciarios se queden colapsados por la no utilización de un servicio tan elemental como el telefónico.

Algo análogo sucede exactamente con la par-

tida de transportes. Se sabrá que, con la nueva política penitenciaria, buena parte de nuestras cárceles se están estableciendo en el extrarradio de las ciudades, lo cual obliga a unos costosos medios de transporte que antes, cuando estaban en los cascos urbanos, no era preciso. Ello ha supuesto un aumento importante que, en buena parte, va a servir para corregir el déficit que ya llevamos en este año de 1981, que prácticamente quedaría absorbido por la partida presupuestaria que consignaba el Partido Socialista, sin que hubiera nueva consignación para este gasto en el próximo ejercicio.

Sin entrar en otras enmiendas, que al parecer están vivas, pero que no han sido objeto de defensa, voy a hacer una referencia a las enmiendas del Partido Comunista, si mal no recuerdo, las que ha defendido el señor Pérez Royo, concretamente la enmienda 750. Como a continuación diré, la enmienda transaccional en buena parte viene a corregir algunas de las deficiencias que el señor enmendante ha abordado. Sin embargo, quiero también decir que nuestra enmienda transaccional va a hacer frente, con mejor método, a lo que él mismo propone en otro orden de cosas. Porque, efectivamente, no es bueno el método que pretende nutrir el gasto, es decir, los 3.440 millones, sacándolos de una partida correspondiente a la Dirección General de Asuntos Religiosos, que en definitiva es el cumplimiento de unos acuerdos internacionales que tiene suscritos el Estado español y a los que evidentemente hay que dar cumplimiento, y no puede hacerse una ruptura unilateral de los mismos al hacer una ley como la presupuestaria.

Por otra parte, es necesario seguir e insistir en la política de mejora de los elementos que intervienen en la Administración de Justicia, para lo cual, señor Presidente, si los demás grupos lo admiten —y entonces sí tendría un carácter transaccional—, me atrevería a formular una enmienda transaccional en nombre del grupo centrista, que además sería perfectamente coherente con la fuente de donde se nutriría la partida presupuestaria y a la que iría destinada. Concretamente, se trataría de una nota al pie del concepto del servicio 03 de esta sección trece, que es la partida 173, la cual se nutriría de un nuevo concepto adicional, procedente, a su vez, de lo que son las dotaciones presupuestarias para los cargos de la carrera judicial, que en realidad, por la nueva legislación, que ha supuesto una inte-

gración de cargos y un adelanto de la edad de jubilación, supone que un conjunto de partidas presupuestarias, por numerosas vacantes que se han planteado, quedar realmente pendientes de un destino que puede ser, en parte, el formulado. Para lo cual propondríamos que de la partida 112 del servicio 03 de esta sección trece se pasasen las cantidades que correspondan, mediante las transferencias oportunas, a la partida 173 de este mismo servicio y sección del artículo 17, donde se habla del personal eventual, contratado y vario.

Es evidente, señor Presidente, que los instrumentos de aplicación de la justicia no solamente provienen de la creación de nuevos juzgados y de la cúspide, diríamos, de la decisión judicial, sino de todo el personal auxiliar, de todo el personal contratado que está detrás de todo el ejercicio profesional.

Por consiguiente, entendemos que de esta manera se vendría a corregir parte de las deficiencias señaladas, y me propongo presentar esta enmienda en contestación a la formulada.

El señor PRESIDENTE: Con anterioridad a las peticiones de palabra formuladas, vamos a dar lectura a la enmienda propuesta por el señor Escartín.

A la sección trece, servicio 03 artículo 173, figuraría la siguiente adición: «El importe de este crédito podrá ser incrementado mediante transferencia de los distintos subconceptos del concepto 112 de la misma sección y servicio, hasta el importe equivalente a las vacantes dotadas en el presupuesto y durante el período que media hasta la cobertura de aquéllos por funcionarios de carrera. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa del de Justicia, autorizará las citadas transferencias, así como determinará el régimen retributivo del personal de sustituciones no funcionario».

Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Como el Partido Socialista tiene una enmienda a la totalidad de la sección de Justicia, y esta pequeña aportación que se hace en la sección trece satisface un 1 por ciento de nuestra enmienda a la totalidad —queda el 99 por ciento pendiente—, no tenemos inconveniente en admitirla a trámite.

El señor PRESIDENTE: Los restantes grupos presentes en la Cámara, ¿tienen algún inconveniente en su admisión a trámite? (Pausa.)

Para un segundo turno en defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: No, señor Presidente, no es segundo turno, sino únicamente indicar que mantenemos la enmienda 446, aunque sólo sea para que el señor Escartín repita en el Pleno esos criterios de buena voluntad para solucionar el problema de la asistencia postpenitenciaria; y, en cambio, la enmienda 447, en base a las razones que ha dado, la retiramos.

El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno en defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Más que un segundo turno, puesto que la verdad es que no se ha replicado más que a una parte de mi argumentación, es para decir que nosotros mantenemos nuestra enmienda.

Quiero decirle al señor Escartín que nosotros no nos oponemos a que su enmienda transaccional sea admitida a trámite y a que la cuelgue en la percha que le parezca oportuno. Si considera que la transacción hay que hacerla con nuestra enmienda, pues de acuerdo. En realidad, ahí no hay transacción. Nuestra enmienda se refiere a un problema diverso. No se trata del personal eventual y contratado, que es un problema que también hay que solucionar, sino de todo el personal, también el escalafonado, también el personal funcionario de la Administración de Justicia, cuya situación es la que he indicado anteriormente, y sobre esa situación no se me ha contestado, porque es difícil contestar, es difícil negar lo que yo he dicho, es difícil negar la realidad. La realidad se impone y, como decían esta mañana, está por encima de los pactos; la realidad sí que no pacta, ni ANE ni nada.

A lo único que se me ha contestado es al tema de la dotación al clero. Yo insisto en que nosotros no tenemos ningún interés en quitar la dotación al clero, aunque quiero llamar la atención a SS. SS. sobre el hecho de que en el Ministerio de Justicia aparecen 22.000 millones de pesetas para pagar a todo el personal de la Administración de Justicia, y 9.000 y pico millones de pesetas para las transferencias a la Iglesia católica para pagar al clero. Las cifras son bastante elocuentes.

Nosotros no nos oponemos a eso, pero enten-

demo que hay que buscar una solución y, posiblemente, la solución pueda ir en una vía similar a la que ha indicado el señor Escartín, buscando una fórmula de transferencia, que entendemos que si se admite para una enmienda habrá que considerarla también como admisible, al menos a trámite, para otra enmienda parecida y, en consecuencia, sentar el principio de que se pueden establecer 3.000 millones para retribuciones complementarias con cargo a transferencias que se efectúen de otros conceptos en el propio Ministerio de Justicia, o incluso en otros Ministerios, a instancia del Ministro oportuno y con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

En ese sentido nosotros mantenemos nuestra enmienda haciendo constar que, probablemente, para el Pleno la reformulemos en lo que se refiere a su segunda parte, en cuanto a la compensación, en el sentido que acabo de indicar.

El señor PRESIDENTE: Doy por entendido que el señor Pérez Royo mantiene también las otras enmiendas que no son la 750.

El señor Escartín tiene la palabra para un segundo turno de rectificación.

El señor ESCARTIN IPIENS: Con la máxima brevedad, para hacer al señor Pérez Royo una puntualización que, tenía razón, he omitido en mi argumentación anterior.

Quiero decir que en la Ley de Presupuestos —y esto también hay que añadirlo a las argumentaciones que he dado antes— no se han desnutrido los conceptos que él ha manifestado, sino que, recordará, según el artículo 4.º, apartado cinco, de la Ley de este año, de 1982, el sueldo base de los funcionarios de la Administración de Justicia es de 31.300 pesetas, y que con el coeficiente corrector del 1,25 significa una retribución mínima de 39.100 pesetas, de forma que la cifra que ha anunciado de 25.000 pesetas es una pura lucubración o que responde a una deficiente información del señor Pérez Royo.

Además, también tengo que señalar al señor Pérez Royo que dentro de esta misma sección, y dentro de este mismo servicio, existe la partida 124 para el personal destinado íntegramente, oficiales, agentes y auxiliares de Administración de Justicia, por 200 millones de pesetas que si, evidentemente, no corrige todas las deficiencias ya ancestrales que acarrea este sector del funcionariado, por supuesto también es una nueva par-

tida presupuestaria que trata de paliar estas mismas deficiencias.

Por consiguiente, hay que puntualizar un tanto las distintas partidas para sacar una conclusión; y creo que, en unión de las leyes que ya se han aprobado por esta Cámara, constituye ya un buen precedente y un buen punto de partida para sanar esta infradotación de medios de la Administración de Justicia.

El señor PRESIDENTE: Con ello queda concluido el debate de las enmiendas presentadas a la sección trece, Ministerio de Justicia.

Vamos a someter a votación, a la vista de la retirada de la enmienda 447 por el Grupo Socialista, la enmienda número 446 al servicio 04 del Ministerio de Justicia. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 12 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 446.

La enmienda 751 se agrupa a efectos de su votación con la 748 por afectar al servicio 01. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 751 y 748.

Enmienda número 752, del Grupo Parlamentario Comunista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 752.

Enmienda número 749, del mismo grupo parlamentario. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 749.

Enmienda número 750, del Grupo Parlamentario Comunista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 750.

Enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Centrista, al servicio 06, artículo 241, dietas de locomoción y traslados. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 17 votos a favor; 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 97, cuyo contenido integrará, en consecuencia, la sección 13, Ministerio de Justicia, servicio 06, con detracción del artículo 284, en beneficio del 241.

Por último, votamos la enmienda transaccional formulada por el señor Escartín, de la que se ha dado lectura a SS. SS., relativa al artículo 173. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos a favor; 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional cuyo contenido se integrará en la sección 13, artículos 112 y 173. Tiene la palabra el señor Escartín.

El señor ESCARTIN IPIENS: Ha habido un error material en la enmienda número 97, que realmente corresponde a la sección del Ministerio de Asuntos Exteriores y no a la sección de Justicia. Por consiguiente, con ese matiz, todos los demás puede estar de acuerdo.

El señor GARCIA-MARGALLO MARFIL: No, no, yo lo que ruego es que no se tenga por votada la enmienda número 97.

El señor PRESIDENTE: Perdón. La enmienda número 97 figura en el informe de la Ponencia en la sección 13, Ministerio de Justicia, y en la recopilación de enmiendas. *(Pausa.)*

Efectivamente, señores diputados, ha existido un error, puesto que la enmienda número 97 no era a la sección 13, pese al rótulo equivocado y

al propio informe de la Ponencia, sino a la sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos a someterla a votación, en consecuencia, con esta rectificación, anulando, yo creo que, obviamente, la votación anteriormente efectuada.

Enmienda número 97 a la sección 12, servicio 06, con detracción del artículo 284, Cooperación Científica y Técnica, en beneficio del artículo 241, Dietas de locomoción y traslados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 97, cuyo contenido integrará, en consecuencia, el de la sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.

La sección 14, Ministerio de Defensa, tiene mantenida la enmienda número 123, del Grupo Parlamentario Andalucista. ¿Desea efectuar su defensa, señor Arredonda?

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, para decir que nosotros proponíamos extraer 19.000 millones de pesetas aproximadamente, pero no era con la idea de quitarlos al Ministerio de Defensa, sino con la idea de ver dónde podíamos invertir esa partida; pero como sería imposible utilizar esa cantidad que nosotros proponemos extraer, retiramos esta enmienda, porque no conducen a nada las partidas que irían en compensación de ella.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En consecuencia, queda retirada la enmienda número 123 del Grupo Andalucista.

El Grupo Socialista del Congreso tiene presentada la enmienda número 448. Tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Esta enmienda tiene como pretensión la unificación de todas las operaciones de capital de la sección en los números económicos 611 y 617; que pasen todas a la Dirección General de Armamento y Material. Evidentemente, se trata de las inversiones directas a realizar por el Ministerio, y ese es el contenido de esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Socialistas de Cataluña tiene presentadas las en-

miendas números 675, 676, 677 y 680. Tiene la palabra el señor Parras para su defensa.

El señor PARRAS I COLLADO: Sí, señor Presidente; y hacer la clarificación siguiente: La pretensión de que las enmiendas 675, 676 y 677 vayan en un solo bloque, a efectos de votación y, al mismo tiempo, permitirme hacer una pequeña explicación de por qué las defendemos.

Como pueden SS. SS. observar, ninguna de las tres genera gasto de ninguna clase y, por tanto, tampoco reducen ingresos. Simplemente se tiene la pretensión de orientarlas en un mismo sentido, dado que la idea común es incluir una serie de partidas que corresponden a los diferentes entes en uno solo, según se especifica en los distintos contenidos de las enmiendas. Nosotros damos dos o tres motivaciones, y una de ellas, la fundamental, es que consideramos necesario conseguir la existencia real de un Ministerio de Defensa unificado. Si nos limitamos exclusivamente, para hacerlo bastante breve, a examinar las motivaciones que damos en la enmienda número 675, observamos que, por ejemplo, la Dirección General de Armamento y Material sólo dispone de 6.000 millones, sobre un total de 130.000 millones, para inversiones en armamento y material, y esto nos parece totalmente disconforme con la concepción de un Ministerio de Defensa unificado.

Por estas razones, mantenemos la enmienda, con la pretensión de que prospere.

El señor PRESIDENTE: Por último figura presentada a la sección 14 la enmienda número 753, del Grupo Parlamentario Comunista, que desea sea efectuada únicamente su votación, puesto que no la defiende. ¿Turno en contra de las enmiendas defendidas? (*Pausa.*) Tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Simplemente decir que nos oponemos a las enmiendas que tratan de unificar todos los capítulos de la sección 06, Ministerio de Defensa, en la Dirección General de Armamento y Material, puesto que el Real Decreto de creación de esta Dirección General hablaba de que esta estructuración única se realizaría en forma escalonada y, por tanto, nosotros entendemos que constituiría un grave problema funcional en este momento aceptar las enmiendas, puesto que se

dejaría sin presupuesto una serie de servicios todavía existentes. No creemos que, a través de las correcciones presupuestarias, proceda la cancelación de determinados organismos o servicios dentro de ningún Ministerio y, en concreto, nos oponemos, por tanto, a esta supresión en el Ministerio de Defensa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. No solicitándose ningún turno nuevo en defensa, vamos a proceder a la votación.

Enmienda número 448, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que pretende la unificación de todos los capítulos de la sección. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 12 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 448.

Enmiendas números 675, 676 y 677, de Socialistas de Cataluña. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 17 en contra; tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 675, 676 y 677.

Enmienda número 680, de este mismo grupo. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 10 votos a favor; 17 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 680.

Tiene la palabra el señor Parras.

El señor PARRAS I COLLADO: Simplemente para decir que en la 680 había pedido defensa y votación aparte y que las tres se podían votar conjuntamente.

El señor PRESIDENTE: Perdón, ha sido votada separadamente. Lo que yo entendí es que S. S. había efectuado la defensa de todas sus enmiendas.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Vicente.

El señor DE VICENTE MARTIN: Señor Presidente, por un azar he girado la cabeza en dirección al grupo mayoritario de la Cámara y tras una votación en la que se han computado 18 votos a favor, y aun presumiendo que pudiera haber algún voto de otro grupo, tengo la sensación de que, materialmente, son imposibles las votaciones que se están computando por el que yo llamaría método de la inercia.

El señor PRESIDENTE: Efectuaremos las votaciones con la debida atención. De todas maneras, señor De Vicente, como S. S. sabe, por el gran número de votaciones hay diputados que no levantan la mano y se están efectuando los cómputos en todos los grupos en este sentido.

Enmienda número 753, del Grupo Parlamentario Comunista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 12 votos a favor; 16 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 753 del Grupo Parlamentario Comunista.

A la sección quince, «Ministerio de Hacienda», Sección 15 figuran presentadas las siguiente enmiendas: enmiendas números 451 y 452 del Grupo Socialista del Congreso. Para su defensa, tiene la palabra el señor Padrón.

El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente. La enmienda 451 pretende una minoración en los gastos destinados a comunicaciones en 200 millones de pesetas, puesto que el incremento establecido para 1982 con respecto a 1981 es un 213 por ciento. Nos parece excesivo este aumento y, por tanto, pedimos su minoración, adecuándolo a unas cifras más reales.

La enmienda 452 pretende un incremento en la dotación destinada a los consorcios para gestión e inspección de las contribuciones territoriales en 645 millones de pesetas, con disminución

también de partidas destinadas a dietas y a publicaciones e información.

Nosotros hemos hecho una recopilación de datos de los incrementos que suponen la aplicación 23.5 del capítulo II, y en el Ministerio de Hacienda estos incrementos son bastante elevados, y por esto, creemos que es necesario una disminución de gastos corrientes que no tienen una mayor aplicación práctica, y que nosotros pensamos que pueden ser minorados sin tener que efectuar una paralización de los servicios y en cambio incrementar las partidas destinadas a la mejora de las inspecciones de las contribuciones territoriales. Además, la cantidad que se destina para este concepto es una cantidad realista que responde a las necesidades. Todos hemos oído aquí las declaraciones del Ministro de Hacienda, dando cuenta de la escasez de inspectores e insuficiencia para efectuar una inspección adecuada y, por tanto, acabar con el fraude fiscal. En base a estos razonamientos, hemos presentado esta enmienda destinada a mejorar estos servicios, que en definitiva va a contribuir a una mejora en la recaudación total del Ministerio de Hacienda.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Comunista tiene presentadas las enmiendas 754 y 755.

El señor PEREZ ROYO: Se mantienen para votación.

El señor PRESIDENTE: Se mantienen para votación sin defensa.

Enmienda 897 de Socialistas de Cataluña; igualmente se renuncia al trámite de su defensa.

Para turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Sí, señor Presidente, nos oponemos porque el capítulo II del Ministerio de Hacienda se incrementa en un 13,80 por ciento, y efectivamente lo que se hace es una redistribución del propio crecimiento global del capítulo II, porque las instrucciones del Gobierno para elaborar los presupuestos indican que se pueden efectuar las redistribuciones internas que aconseje el nivel necesario para los distintos programas y tipos de gastos. Justamente cuando se pide un mayor realismo en cuanto a las partidas presupuestarias es

cuando se objetan estos incrementos en algunos de los conceptos.

Pues bien, este incremento, que efectivamente existe, responde a unas deducciones en otros sitios, porque si efectivamente las comunicaciones crecen en un 213 por ciento y el conjunto del capítulo II crece un 13,80 por ciento, es evidente que para producir aquel incremento en comunicaciones ha tenido que haber disminuciones importantes en otros conceptos dentro de este capítulo II.

En cuanto a la enmienda 452, nos oponemos a las deducciones que se pretenden, por ejemplo, en dietas, locomoción y traslado de 300 millones de pesetas, cuando precisamente se trata de un grupo parlamentario que cifra las esperanzas presupuestarias para el próximo año en un fuerte incremento derivado de la lucha contra el fraude fiscal. Pues bien, un capítulo importante en esta materia está contenido precisamente en el capítulo de dietas, locomoción y traslado, que justamente se pretende ahora deducir.

Por todas estas razones, nos oponemos a ambas enmiendas y a las demás que no han sido defendidas, pero a efectos de votación, anunciamos nuestro voto en contra.

El señor PRESIDENTE: Vamos, por tanto, concluido el debate de las enmiendas presentadas a la sección quince, «Ministerio de Hacienda», a someterlas a votación.

Someteremos a votación conjuntamente, en primer lugar, las enmiendas 451 y 452, del Grupo Socialista del Congreso, que afectan ambas al servicio 01 de la sección quince. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 17 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 451 y 452.

Enmienda número 754, del Grupo Comunista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 13 votos a favor; 18 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 754.

Enmienda número 755, del mismo grupo parlamentario. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 12 votos a favor; 18 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 755.

Por último, enmienda número 897, del Grupo Socialistas de Cataluña. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 10 votos a favor; 18 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 897, del Grupo Socialistas de Cataluña.

Sección 16 Con ello concluye el examen de las enmiendas a la sección quince, «Ministerio de Hacienda», y comenzamos con la sección dieciséis, «Ministerio del Interior».

Antes de comenzar con un examen quisiera advertir a SS. SS. que hay un error en el informe remitido por la Ponencia, y así lo han comunicado los ponentes de la Mesa, en el sentido de que el artículo 485 de la sección dieciséis, servicio 01, debe llevar la siguiente redacción: «Este crédito podrá ser incrementado hasta un importe de 400 millones de pesetas mediante transferencia de otros conceptos de cualquier sección de estos Presupuestos Generales del Estado. La transferencia será aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de los Departamentos a que figuren adscritos los créditos».

A la sección dieciséis figuran asimismo mantenidas las siguientes enmiendas: en primer lugar, la enmienda 104, del Grupo Centrista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez-Villaseñor.

El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: La enmienda número 104, como han podido ver en su formulación, supone la creación de un concepto nuevo, ampliable y sin dotación, para atender las necesidades derivadas de la aplicación a la Guardia Civil de la Ley 20/1981, de creación de la situación de reserva activa.

No se necesitan grandes argumentos para establecer que, una vez promulgada la ley y desarrollada la misma por el Real Decreto de 30 de octubre de 1981, es necesario introducir ese concepto aun cuando, dado que todavía no se

puede evaluar el coste que supondrá su aplicación, queda sin fijar ninguna cantidad, pero el concepto es necesario que quede fijado, al objeto de que en la aplicación de la correspondiente ley pueda tener una adecuada ubicación en los presupuestos del Ministerio del Interior.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? *(Pausa.)* No se usa.

A la misma sección dieciséis se han presentado las siguientes enmiendas que se agrupan a efectos de debaté y de votación. Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al servicio 05, las enmiendas números 454, 456 y 457.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Estas tres enmiendas, la 454, 456 y 457, han sido aceptadas por la Ponencia, por lo que rogaríamos que sólo se sometieran a votación. Las enmiendas 455 y 459 se mantienen a efectos de votación, y se retira la enmienda 458.

El señor PRESIDENTE: El señor Tamames tiene la enmienda número 15. Como no está presente, será sometida a votación.

El Grupo Parlamentario Comunista tiene presentadas las enmiendas 756, 757 y 758.

¿Desea efectuar su defensa, señor Pérez Royo? *(Denegaciones.)*

En consecuencia, serán sometidas directamente a votación.

Concluido, por tanto, el debate de las enmiendas presentadas a la sección dieciséis, «Ministerio del Interior», vamos a someterlas a votación, reiterando nuevamente la advertencia, efectuada con anterioridad, en orden a la corrección del error del informe de la Ponencia.

Pasamos a votar la enmienda número 104 al servicio 05, del Grupo Parlamentario Centrista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 17 votos a favor; tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 104.

Enmiendas números 454, 456 y 457 al servicio 05 y que, igualmente, aparecen informadas favorablemente por la Ponencia. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad de la Comisión las enmiendas 454, 456 y 457, y, en consecuencia, su contenido integrará el del proyecto de ley, en cuanto al dictamen emitido por esta Comisión.

Enmienda número 15, del señor Tamames. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 16 votos en contra; 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 15, del señor Tamames.

Enmienda número 455, del Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 10 votos a favor; 17 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 455.

Enmienda número 459 del mismo grupo parlamentario. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 12 votos a favor; 17 en contra; dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 459.

Enmienda número 756, del Grupo Parlamentario Comunista, que debe ser al servicio 02, no al capítulo 02. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: un voto a favor; 17 en contra; 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 756.

Por último, enmiendas de este mismo grupo, al servicio 04, de la sección dieciséis, enmiendas números 757 y 758. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 11 votos a favor; 17 en contra; una abstención.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 757 y 758.

En consecuencia, el contenido de la sección dieciséis, «Ministerio del Interior», quedará integrado en el proyecto de ley y al que se adicionará el error al que se ha hecho referencia con anterioridad en el informe de la Ponencia, y el contenido de las enmiendas números 104, 454, 456 y 457.

La sección diecisiete, «Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo», tiene presentadas enmiendas. ¿Puedo preguntar a la Minoría Catalana cuáles son las enmiendas que se mantienen, a partir de la número 308 en adelante? Sección 17

El señor GASOLIBA I BOHM: De acuerdo con la enmienda transaccional, se mantienen las enmiendas números, 308, 310, 311, 316, 320, 321, 322, 323 y 327.

El señor PRESIDENTE: Puede efectuar el turno de su defensa.

El señor GASOLIBA I BOHM: Todas ellas, señor Presidente, responden a inversiones directas, bien sea por transferencias de capital o inversión directa en los capítulos correspondientes, el 06 o el 07, en cada uno de los servicios comprendidos dentro de esta sección; para concretar, inversiones a realizar en Cataluña en obras de infraestructura y que algunas de ellas responden a obligaciones contraídas anteriormente a los traspasos que se han contemplado durante el año pasado y a lo largo de este año. Por ejemplo, las acciones de desarrollo regional y planificación y ordenación urbanística, o bien las de desarrollo de infraestructuras, o la cuestión de expropiaciones comprometidas anteriormente, para realizar unas obras que ahora están bajo la ejecución y control de la Generalidad de Cataluña.

Estos son los conceptos básicos por los cuales se exponen estas enmiendas, que son enmiendas básicamente de clarificación y especificación y no, evidentemente, de variación de los fondos comprometidos en el conjunto de la sección diecisiete.

El señor PRESIDENTE: De todas maneras quisiera señalar al señor Gasoliba que en las enmiendas de S. S., en la parte que pudieran quedar afectadas, el criterio de la Mesa favorable a

su admisión es en lo relativo a la no especificación territorial del gasto, por entender que, a través de ello lo que se efectuaba era una enmienda indirecta a los Presupuestos por programas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. En consecuencia con esta corrección, y así se hizo constar en el informe de la Mesa, de la misma manera que han sido rechazadas otras enmiendas que pretendían pura y simplemente la asignación geográfica del gasto por razón territorial, las enmiendas de S. S. son admitidas en la parte que suponen transferencias de uno a otro servicio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, pero no en tanto en cuanto implican asignación específica geográfica del gasto.

Igualmente figuran presentadas a la sección diecisiete, por el Grupo Parlamentario del Congreso, las enmiendas números 460, 462, 463 y 464.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Barón.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, la enmienda 464 ha sido admitida por la Ponencia. La enmienda número 460 se refiere a una transferencia de capital a entes territoriales para la instalación de los sistemas de detección y vigilancia de la contaminación atmosférica, planes y tratamiento de residuos sólidos.

Nosotros creemos que ésta es una de las acciones más importantes que hay que establecer, incluso habría que ir a un criterio de unificación con el Ministerio de Industria, y que es muy importante ir desarrollando este tema en los entes territoriales, así como fomentarlo en el plan interurbano; porque hay un condicionamiento muy importante que, además, está reconocido por el mismo Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a una serie de zonas industriales importantes en toda España y aun no teniendo más dotación —ya que este año no se puede aumentar mucho— sí, al menos, es muy interesante que esta acción se descentralice para que sea más efectiva.

Con respecto a la enmienda 461, querría de la benevolencia de la Presidencia que se me permitiera subsanar un pequeño defecto de forma que hay en ella y que ha conducido a su no admisión. En la misma proponemos que se incremente la transferencia a COPLACO para los ayuntamientos de la provincia de Madrid, con objeto de financiar la elaboración y redacción de los distin-

tos planes generales de ordenación urbana en los municipios del área metropolitana. Comprobando en el original de la enmienda, he visto que no habíamos señalado una detracción en otro concepto de la misma sección y, si me permite la Presidencia, diría ahora, para que conste en la enmienda, de qué concepto detraemos para que pueda ésta tener validez y ser defendida. (*Asentimiento.*)

La propuesta sería con detracción del artículo 77, concepto 771, que quedará en 19.906.700 pesetas. Entendemos que con ello queda subsanado el defecto de forma. Es el servicio 08, el mismo servicio del Ministerio. Si se nos admite esta subsanación, la someteríamos a votación.

Con respecto a la enmienda número 463, como creemos que es muy importante que por parte de la Administración se fomente una actividad que están emprendiendo nuestros agricultores, consistente en el desarrollo de sistemas de riego con aprovechamiento de agua, y dado que el agua es un bien enormemente escaso en la mayor parte del país, creemos que tiene mucha importancia ir a la implantación de sistemas de riego con ahorro de agua. En este sentido, desde el punto de vista privado, se ha iniciado la actividad, pero creemos que la Administración puede contribuir de una manera muy poderosa al desarrollo de la economía del agua, que es un tema que en la situación actual cada vez tiene más importancia. Pediríamos que esta enmienda se sometiera también a votación.

El señor PRESIDENTE: Con independencia de la admisión o no de la enmienda, sobre la que pediría reunión de la Mesa a continuación, figuran presentadas por el Grupo Parlamentario Comunista las siguientes enmiendas: 759, 760, 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 769 y 770. ¿De-sea efectuar su defensa? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el señor Pérez Royo.

El señor PEREZ ROYO: Señor Presidente, yo creo que hay más: enmiendas números 771, 772... Son enmiendas al Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, organismo autónomo del Ministerio de Obras Públicas y, en consecuencia, las tengo numeradas correlativamente, pero, de suyo, tiene razón S. S., porque son del organismo autónomo, aunque tienen indudable relación con el Ministerio en cuanto a que el incremento de dotación que se propone para el IPPV,

Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, se compensa con disminución en conceptos que aparecen especificados en el presupuesto escrito del MOPU.

El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Royo, las enmiendas 771 y 772 de S. S. figuran en el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda como enmiendas a la totalidad del organismo autónomo de que se trata. En consecuencia, allí podrán ser sometidas a debate y votación.

El señor PEREZ ROYO: Ya lo sé, señor Presidente, pero esas enmiendas tienen relación inmediata con éstas y son incomprensibles por sí solas. Hay enmiendas del Ministerio, por ejemplo, la 770 y la 768, que se hallan íntimamente relacionadas con éstas. En consecuencia —me da igual—, yo lo que quiero es plantear el problema y aprovechar este turno incluso para dar por defendidas estas enmiendas y someterlas a votación en su momento. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Perdona, señor Pérez Royo; agradecería un poco de silencio y atención a su compañero, que está en el uso de la palabra.

Señor Pérez Royo, puede comenzar el turno de defensa.

El señor PEREZ ROYO: Nuestras enmiendas al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que son numerosas y que se mueven en diferentes campos, tienen sin embargo una importancia especial, a nuestro juicio, al menos desde el punto de vista cuantitativo, en lo que se refiere al programa de construcción de viviendas.

En ese sentido, nosotros señalamos un hecho grave en los presentes presupuestos, y es que el programa de promoción pública de la vivienda —la vivienda de promoción pública— aparece dotado con una cifra que es un 4 por ciento inferior, en términos reales, a la del presupuesto anterior, lo que a nosotros nos parece grave, por una razón fundamental: Actualmente existe el plan trienal de construcción de viviendas; plan trienal que, según decía el otro día el señor Ministro, se va a cumplir este año en un 90 por ciento, cifra que en principio parece aceptable. Lo que no parece tan aceptable es el tipo de viviendas que van a integrar ese 90 por ciento de

cumplimiento, que son fundamentalmente viviendas de promoción privada, viviendas bajo demanda, en definitiva, de promoción privada. En cambio, están sufriendo un retroceso considerable las viviendas de promoción pública; retroceso considerable, entre otras cosas, porque no hay demanda para ellas, no hay demanda solvente, al precio al que están saliendo estas viviendas al mercado.

Entendemos que hay que solucionar este problema, para ello proponemos un incremento sustancial —sustancial y no exagerado, ya que en cualquier caso, no llegará a los 10.000 millones de pesetas, en un presupuesto que está en 74.000 millones— en la transferencia al Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, de suerte que se pueda financiar un programa algo más holgado de viviendas y, por supuesto, sin llegar a lo que sería deseable, sino dentro de los límites de austeridad que nos marca el presente presupuesto.

¿Y con qué compensamos este incremento? Lo compensamos, básicamente, con reducción en una partida que ha experimentado un crecimiento espectacular y, a nuestro juicio, injustificado. Esta partida es la 771 del servicio 08, leo el concepto concreto: «Transferencias a empresas, subvenciones para completar la inversión privada en actividades localizadas en las áreas de promoción y desarrollo y en otras zonas de acción regional que establezca el Gobierno, que podrá llegar hasta un 30 por ciento de la inversión». Esta partida está dotada con 20.000 millones de pesetas, pero lo importante no es destacar estos 20.000 millones, sino la progresión de este concepto, que es la siguiente. En el año 1979 había para este concepto 2.371 millones; el año pasado fueron 13.938, es decir, una multiplicación casi por cuatro, y este año suben hasta 20.206 millones de pesetas, mientras que —como digo— el programa de construcción de viviendas va siendo objeto de reducción, en términos reales, cada año.

A nosotros nos parece francamente que esto no es enfrentarse con el problema de la vivienda en nuestro país, del cual hemos hablado en muchas ocasiones y que es sencillamente la quiebra entre una demanda que no tiene solvencia, una demanda que no es capaz a los precios actuales a que salen las viviendas al mercado, y una oferta insuficiente que no se cuadra con esta demanda por esta misma razón, por defecto de

solvencia en la misma. Entendemos que hay que solucionar este problema y, sin perjuicio de insistir sobre el mismo, nosotros queremos dejarlo ya aquí sentado como el punto fundamental, a nuestro modo de ver, de nuestras enmiendas al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Señalamos esto, sometemos a votación las restantes, y para todas ellas, naturalmente, pedimos el voto favorable de sus señorías.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Solchaga desea consumir un turno?

El señor SOLCHAGA CATALAN: Sí, señor Presidente, pero primero quería hacer una pregunta y es que me parece que no han sido puestas a votación, ni siquiera consideradas como susceptibles de votación, la enmienda 462, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la enmienda 619, de Socialistas Vascos, que son coincidentes en su contenido. ¿Es esto así?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Solchaga, no han sido sometidas a votación porque todavía no hemos votado ninguna de las enmiendas a la sección diecisiete.

En relación con la enmienda 462, sí se ha ofrecido el turno de defensa al Grupo Socialista; en cuanto a la enmienda 619, no se ha ofrecido al Grupo Socialista Vasco y se le ofrece en este momento. Tiene la palabra S. S. para ello.

El señor SOLCHAGA CATALAN: En ese caso, aprovecho para defender conjuntamente las dos que, como he dicho, son coincidentes en su contenido.

Esta enmienda pretende que la aplicación económica 731, de la sección diecisiete, servicio 07 del Presupuesto del Estado, extienda su objetivo al financiamiento de las actividades y promoción directa por el Estado de viviendas destinadas al alquiler.

Como se sabe, ésta es una partida para el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda y la explicación de nuestra solicitud reside en el problema que estos días se está viviendo o se está planteando de manera casi constante.

Con frecuencia ocurre que, después de que el Ministerio de la Vivienda, a través del Instituto de Promoción Pública, ha llegado a un acuerdo con el municipio correspondiente para erradicar un problema de chabolismo —como ha ocurrido,

para poner un ejemplo muy concreto, en el barrio de El Burgo, en el Ayuntamiento vizcaíno de Portugalete— y ofrece, por consiguiente, a los chabolistas la posibilidad de acceder a una vivienda social, se encuentra con que, como consecuencia de la crisis económica y de que muchos de ellos se hallan en una situación de desempleo, éstos no pueden hacer frente a la compra de la vivienda, mientras que sí podrían hacer frente a una situación, más fácil para ellos, de alquiler, quizá con una opción posterior de compra.

Si a este problema no le damos solución, aparte de los aspectos dramáticos que siempre revisten estos temas de la vivienda de las familias más modestas, nos quedamos también sin resolver los problemas urbanísticos de erradicación del chabolismo en muchos ayuntamientos, y dejamos tanto a los ayuntamientos como al Ministerio en una situación conflictiva, difícilmente subsanable, mientras no encontremos cauces para asegurar que el Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, ante la situación de insolvencia, pueda dar una alternativa a quienes deban acogerse a sus ofertas. *(El señor Presidente abandona la Presidencia.)*

Por consiguiente, ésta no es una enmienda que encarezca el presupuesto, en el sentido de que no aumenta el gasto, sino que tan sólo se deja a la flexibilidad y la discreción del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda y del Ministerio correspondiente la posibilidad de utilizar una parte de la aplicación económica que estamos discutiendo, la 731, no solamente para la financiación de la promoción pública de viviendas «stricto sensu», sino también para la financiación de la promoción de viviendas destinadas al alquiler frente a esta demanda insolvente a la que hay que dar solución.

El señor VICEPRESIDENTE (Alierta Izuel): Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Fernández.

El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Ruego a la Presidencia que me corrija si fallo en la enumeración de las enmiendas, pero entiendo que hay que contestar a las enmiendas números 308, 310, 311, 316, 320, 321, 322, 323 y 327, de Minoría Catalana; las 461 y 462, defendidas por el Grupo Socialista del Congreso; las 464 y 619, del Grupo Socialista

Vasco, y después las enmiendas 768 y 772, del Grupo Parlamentario Comunista. Intentaré contestar sucintamente y de la manera más sistemática posible.

A la enmienda 308, de Minoría Catalana, que trata de la inclusión en el servicio 29, entes territoriales, de un capítulo VI, concepto 621, dotado con 856 millones, suelo urbanizado en Cataluña, que se financiaría con bajas en el servicio 08, concepto 773, en 399 millones, y en el 732, 457 millones, nosotros nos vamos a oponer, porque entendemos que el crédito 773, de los Presupuestos Generales del Estado para 1982, fue destinado a financiar las actividades de la Empresa Nacional del Suelo, fijado de acuerdo con los criterios y directrices del Comité de Inversiones Públicas.

El criterio general que sustenta el INUR es invertir con carácter preferente en aquellas obras que se consideran imprescindibles para poner en servicio los polígonos y, así, atender la demanda, y, en todo caso, dejar para otras etapas posteriores las obras complementarias, cuando las enajenaciones de parcelas permitan disponer de fondos al propio polígono.

En este sentido, sólo cabría en este momento consignar para el año 1982 20 millones de pesetas para el polígono industrial de Vich y 60 millones de pesetas para el Riu Clar de Tarragona, con un total de 80 millones, de los cuales, al aplicar el 70 por ciento, quedarían 56 millones y no la cifra de 856 que se pide en la enmienda.

Respecto a la enmienda número 310, que trata del aumento de la transferencia a la Generalidad de Cataluña, tenemos que decir que dentro del concepto 17.07.611 se incluye la transferencia a realizar a la Generalidad de Cataluña por un importe de 118,6 millones de pesetas, que comprende el conjunto de las inversiones reales amparadas por dicho concepto, sin que se prejuzgue su aplicación concreta, lo que corresponderá a la propia Generalidad, en función de sus necesidades de inversión.

Entendemos que hay que rechazar esta enmienda, puesto que, según el proyecto de presupuestos, la inversión a realizar en 1982 por la Generalidad de Cataluña, con cargo al concepto 17.07.611, es el 100,9 por ciento del año anterior, cuando se está produciendo para el resto del Estado una inversión del 89,9 por ciento del año 1981. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

Respecto a la enmienda 311, que habla de la creación de un nuevo concepto, 17.01.751, a la Generalidad de Cataluña por traspasos de servicios en materia de edificación, por un importe de 10 millones de pesetas con bajas en el 17.01.721, entendemos que debe ser rechazada también, porque la justificación que se contiene en la enmienda es plenamente válida en cuanto a la exigencia de dotar de equipo a los laboratorios del extinguido Instituto Nacional de la Calidad de la Edificación, pero hay que decir que en este momento hay laboratorios construidos y carentes de equipo, como los de León, Avila, Toledo, otros en fase de construcción, como los de Soria, Huesca y Teruel, y otros muy deficientemente equipados, como los de Lérida y Tarragona. Por tanto, hay un gran abanico de necesidades que deben atenderse, de acuerdo con las previsiones presupuestarias, sin que sea posible atender la enmienda.

En cuanto a la enmienda 316, también de Minoría Catalana, que habla de la creación de un nuevo concepto 754, en el artículo 75 del capítulo VII del servicio 29 de la sección diecisiete, con la denominación «A la Generalidad de Cataluña para el pago de expropiaciones, revisiones y saldos de liquidación pendientes de abono», correspondientes a obras ejecutadas por el MOPU con anterioridad al traspaso de servicios en materia de carreteras, con una dotación de 568.421.415 pesetas, este grupo parlamentario dice que se aplique el párrafo 4.º del apartado f) del citado real decreto a los contratos ya realizados por el MOPU, pero en las transferencias realizadas a la Generalidad durante los ejercicios de 1980 y 1981 ya se contemplan cantidades para contratos específicos, que son a los que se refiere el citado párrafo. Por tanto, está definido el cauce legal en el que deben considerarse estas discrepancias que aparecen entre la petición de Minoría Catalana y la consignación en el presupuesto, y esta justificación y cuantificación ha de verificarse en otras instancias y no por la vía presupuestaria.

En cuanto a la enmienda número 321, tenemos que oponernos, porque dentro del concepto 17.07.611 se incluye la transferencia a realizar a la Generalidad de Cataluña por un importe de 118,6 millones de pesetas, que comprende el conjunto de las inversiones reales amparadas por dicho concepto sin que se prejuzgue su aplicación concreta a los subconceptos que corres-

ponderían, en todo caso, a la Generalidad en función de sus necesidades de inversión.

Cuando se hace alusión en la enmienda a las cuantiosas inversiones en adaptación y mejora de edificaciones oficiales que exige la puesta en marcha de la Administración autónoma, hay que hacer constar que ésta es una estimación que pugna directamente con las directrices que deben imperar en la gestión del gasto público y que es, además, incompatible con la situación económica actual.

En cuanto a la enmienda número 322, que habla de la inclusión de un nuevo artículo, el 17.29.75, con la especificación del concepto 751 dotado con 1.200 millones de pesetas procedentes del concepto 17.08.771, tenemos que decir, muy sucintamente, que va contra la filosofía actual de la Dirección General de Acción Territorial, que intenta paliar los desequilibrios interregionales; y en este sentido se están dirigiendo los concursos de grandes áreas de expansión que afectan a regiones como Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, que tienen deficiencias mucho más generalizadas que las de la región catalana.

Respecto a la enmienda número 323, también del mismo grupo parlamentario, de creación de un subconcepto 4 en el concepto 611 del servicio 07 de la sección 17, con 800 millones y reducción del servicio 07 de la sección 17 para reparación del patrimonio público de viviendas en la provincia de Barcelona, también nos oponemos por esa misma consideración de lo que supondría de desequilibrio.

Queda la enmienda número 327, de creación de un nuevo concepto 755, con la denominación «Conservación y explotación de las carreteras transferidas a la Generalidad de Cataluña», que entendemos que hay que rechazar también, puesto que se refiere al mantenimiento de la distribución porcentual de los créditos, efectuada de forma simplista, proporcionalmente al número de kilómetros en la liquidación del año 1980 y, por supuesto, en este momento se está atendiendo a otros parámetros más complejos y que nos parecen mucho más justos.

En cuando a la enmienda número 461...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Fernández, quisiera advertirle una cosa: la enmienda 461 no ha sido admitida a trámite por la Mesa, pero sí existe —y si no le importa, le inte-

rrumpo en este momento— una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de la que voy a dar lectura, previamente a solicitar la conformidad de los demás grupos para su tramitación.

«Enmienda transaccional a la sección 17, servicio 08, capítulo 7, artículo 73, nuevo apartado. COPLACO, para la transferencia a los ayuntamientos con objeto de financiar la elaboración y redacción de los distintos planes generales de ordenación urbana en los municipios del área metropolitana de Madrid, de acuerdo con el Real Decreto-ley 11/80, de 26 de septiembre, pesetas 300 millones, con baja en el servicio 08, capítulo 7, artículo 77, que queda reducido a la cuantía de 19.906.700 pesetas.»

¿Hay inconveniente por parte de algún grupo parlamentario en su admisión a trámite? (*Denegaciones.*)

En consecuencia, pueden tener en cuenta SS. SS. la enmienda formulada a efectos de contestación.

El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Admitida a trámite esta variante de la enmienda 461, nosotros nos vamos a oponer a ella, porque entendemos que el mandato legal impide soluciones distintas de las que en este momento existen en base al Real Decreto-ley 11/1980, de 26 de septiembre, que ordena con claridad los criterios de las directrices para el Area Metropolitana de Madrid.

A la enmienda 462, que coincide, si no recuerdo mal, con la 619, del Grupo Socialista Vasco, para introducir un texto en el que se señale expresamente la promoción directa por el Estado de viviendas destinadas a alquiler, nos vamos a oponer puesto que entendemos que la transferencia recogida en dicha aplicación engloba la totalidad de la subvención del Estado al IPPV para todas sus actividades, y, por supuesto, entre ellas se encuentra la construcción y adquisición de viviendas, sin que se señale si van a ser cedidas en venta o en arrendamiento, entendemos que va a depender de las peticiones concretas que se hagan de las Delegaciones provinciales el destino de las viviendas que así se construyan.

Quedan las enmiendas números 768 y 772, del Grupo Parlamentario Comunista, que intentaré también contestar de manera seguida. La primera de ellas se refiere a la redistribución de los

créditos del concepto 17.08.771 y que nosotros entendemos que entra de lleno en el tema de la filosofía que inspira la sección territorial y la distribución de los fondos, y la número 772, a la sección 17, capítulo 07, artículo 75, que solicita incrementar su dotación hasta 5.000 millones de pesetas...

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, estas son las enmiendas referidas a organismos autónomos, que no se discuten en este momento. Estamos únicamente en las del articulado de la sección 17.

El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Rectifico, y queda concluida la intervención exponiendo nuestro rechazo a las enmiendas presentadas.

El señor PRESIDENTE: Existen presentadas asimismo la enmienda 898, de Socialistas de Cataluña, que se somete directamente a votación; y la 923, del señor Bandrés. ¿Desea efectuar su defensa? *(Pausa.)* El señor Bandrés tiene la palabra.

El señor BANDRES MOLET: Brevísimamente, para indicar que ya en la enmienda a la totalidad dijimos que con frecuencia, las cifras de gastos de inversión en pagos ordenados para los sucesivos años no alcanzan el total de lo presupuestado; por ejemplo, en 1980 no alcanzaron más que el 50 por ciento y decíamos que en el año 1981, la tónica se acentuaba, porque durante los ocho primeros meses del año, sólo se había realizado el 30 por ciento del gasto.

Aquí nos encontramos con un supuesto de esa misma naturaleza. Quiero decir que el Ministerio se propone construir y adquirir viviendas en Castaño, en realidad, en Sopuerta, Vizcaya, por un importe equis, el que figura en el presupuesto; pero ya para el año anterior, o años anteriores, se habían presupuestado 61 millones de pesetas que no han sido gastados. El sentido de esta enmienda es ampliar el crédito correspondiente a esa cantidad que ya estaba presupuestada anteriormente y no ha sido gastada, con objeto de que no se produzca un perjuicio en la construcción precisamente de estas viviendas de tipo económico, sobre todo porque tienen un destinatario final, que son las clases trabajadoras.

Cumpliendo el Reglamento, se propone la deducción de la referida cuantía de la partida sin clasificar del mencionado programa, de adquisición y construcción de viviendas iniciadas en el año 1980.

Esta es la razón y la justificación de esta enmienda, que se propone para su votación.

El señor PRESIDENTE: Por último, existe presentada la enmienda 668, del Grupo Centrista, que no se desea defender.

¿Turno en contra de la enmienda 923? *(Pausa.)* No se agota.

En consecuencia, podemos pasar ya a las votaciones de las enmiendas presentadas a la sección 17.

Puesto que se ha efectuado una defensa conjunta, señor Gasoliba, ¿hay inconveniente en que las enmiendas de su señoría sean votadas conjuntamente?

El señor GASOLIBA BOHM: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas números 308, 310, 311, 316, 320, 321, 322, 323, y 327, del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 17; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas a que se ha hecho referencia, del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana.

Ponemos a votación la enmienda número 460, del Grupo Socialista del Congreso. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en contra, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 460.

Ponemos a votación las enmiendas 462, 463 y 619. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 18; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas citadas.

Enmienda número 464, del mismo Grupo Parlamentario Socialista.

El señor GARCIA-MARGALLO MARFIL: Señor Presidente, solicitaría una suspensión de un minuto.

El señor PRESIDENTE: ¿Para la enmienda número 464?

El señor GARCIA-MARGALLO MARFIL: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Vamos a ir sometiendo a votación las restantes enmiendas y, a continuación, la número 464.

Se someten ahora a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Comunista, números 759, 760, 761, 762, 763, 764 y 766, al servicio 07. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 759 a 766, leídas.

Sometemos a votación las enmiendas números 767, 768, 769 y 770, al servicio 08. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve; en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las cuatro enmiendas señaladas.

Sometemos a votación la enmienda número 898, del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve; en contra, 18; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 898.

Sometemos a votación la enmienda número 923, del señor Bandrés. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 11; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 923.

Sometemos a votación la enmienda número 668, del Grupo Parlamentario Centrista. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, quedó aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada y, por unanimidad de la Comisión, y en consecuencia, la enmienda número 668 integrará el contenido de la sección 17.

Por último, queda pendiente de votación la enmienda número 464, del Grupo Socialista del Congreso, al servicio 06, de la sección 17. Se somete a votación, en consecuencia. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 464.

Para concluir en el día de hoy vamos a examinar la sección 18. *(Rumores.)*

Señorías, piensen que mañana quedan todavía bastantes secciones, los presupuestos-resúmenes de la Seguridad Social, los organismos autónomos y, además, hay formuladas diversas comparencias.

El señor Barón tiene la palabra.

El señor BARON CRESPO: Señor Presidente, como se acaba de ver en el mismo voto que ha hecho del Grupo Centrista, que ha votado en contra de una enmienda aceptada en Ponencia, creo que nos convendría a todos un descanso y, además, este grupo tendría necesidad de evacuar consultas. Pediríamos que se suspenda la sesión y se reanude mañana a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: El señor Del Valle tiene la palabra.

El señor DEL VALLE Y PEREZ: Nosotros, a lo que considere oportuno la Presidencia, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: En ese caso, yo pediría a la Mesa que se reintegrara para debatir sobre la continuación o no. *(Pausa.)*

Señores diputados, visto el grado de cansancio de SS. SS., del que también participa la Mesa, que debe seguir con más atención, puesto que está pendiente, no de las intervenciones indivi-

duales, sino de la totalidad, se levanta la sesión, que continuará mañana a las diez en punto de la mañana. Ruego la máxima puntualidad, puesto que a las diez en punto comenzará la sesión.

Se levanta la sesión.

Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.

Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00, Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961